

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS

ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES CON ÉNFASIS EN
DIPLOMACIA**

Título de la investigación:

**ANÁLISIS DE LA NARCOCULTURA EN LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA POR MEDIO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO (2021-2025)**

Estudiante:

GABRIELA DURÁN ALPÍZAR

Tutor:

LICENCIADA NIKOLE MUÑOZ VILLALOBOS

SEDE ARANJUEZ, SAN JOSÉ, COSTA RICA

MAYO 2026

AGRADECIMIENTO

La decisión de emprender este reto académico no nació únicamente de un interés profesional, sino de una experiencia profundamente humana y de un valor fundamental que mi padre siempre me inculcó: el deseo de concluir una carrera y la importancia del estudio como motor de cambio en la vida. Durante la pandemia, ver a mi padre enfrentarse al COVID-19 y estar a punto de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos me confrontó con una pregunta esencial: ¿qué haría con mi vida sin él? En ese instante comprendí que los logros más valiosos no son solo los que se acumulan en un currículo, sino aquellos que pueden hacer sentir orgullosos a quienes amamos.

Ese momento de vulnerabilidad se transformó en un motor de esperanza y compromiso. Decidí retomar mi sueño de estudiar Relaciones Internacionales, no solo como un proyecto académico, sino como una forma de honrar la vida, de darle sentido a la adversidad y de demostrar que cada esfuerzo puede convertirse en un legado. Esta tesis, por tanto, no es únicamente un requisito para obtener un grado, sino también un testimonio de resiliencia, gratitud y búsqueda de trascendencia.

En este camino, no he estado sola. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi tía Marta, quien ha ocupado un lugar muy importante en mi vida. Su apoyo constante, sus palabras de aliento y su presencia en los momentos más difíciles me han recordado que los sueños se construyen mejor cuando se comparten. Gracias a ella, he encontrado fuerza en los días de cansancio y motivación en los momentos de duda. Este logro no es únicamente mío, sino también suyo, porque cada paso que doy en mi carrera lleva consigo la huella de su cariño y respaldo.

Asimismo, deseo reconocer a quienes marcaron mi formación académica de manera positiva. A mi tutora Nikole, por su guía constante y rigurosa; a mi mentora Irene, por su acompañamiento humano y profesional; a Diego, por brindarme la oportunidad de ser parte de excelentes proyectos de extensión que enriquecieron mi visión y compromiso social; y a Doña Paula, por escucharme y motivarme siempre, recordándome que la educación también se nutre de la empatía y la confianza. Cada uno de ellos ha dejado una huella invaluable en mi trayectoria, recordándome que el conocimiento florece cuando se comparte.

De igual manera, agradezco profundamente a mis hijos, quienes han sido mi mayor fuente de inspiración y apoyo. A Gabo, por acompañarme en la pasantía; a Daniel, por ser mi fiador y ayudarme a cumplir este sueño; a Sebas, por estar siempre dispuesto a apoyarme en la parte tecnológica; y a mis hijas Valeria y María Ángel, a quienes deseo transmitir con mi ejemplo que nunca es tarde para cumplir los sueños, y que una mujer siempre debe estudiar y realizarse tanto laboral como académicamente.

Finalmente, quiero agradecer a Rubén por toda su ayuda, su apoyo y por darme una lección tan valiosa de vida. Su presencia marcó un antes y un después en mi historia, motivándome a concluir este sueño y enseñándome que no existen límites cuando se tiene convicción y esperanza.

Como bien señaló Nelson Mandela: *“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”* (1994). Esta tesis representa mi manera de cambiar mi mundo y de agradecer a quienes han sido pilares en mi vida.

Contenido

CAPÍTULO 1	7
1. Introducción	7
1.1. Planteamiento del problema	9
1.2. OBJETIVOS	15
1.2.1. Objetivo general:	15
1.2.2. Objetivos específicos:	15
1.4. ANTECEDENTES	19
1.4.1 Internacionales	19
1.4.2. Nacionales	21
PROYECCIONES	25
1.5.1 Alcances	25
1.5.2 Limitaciones	26
2.2 Marco Histórico	28
2.2.1 Mini cronología 2021-2025	28
2.2.2 Relación Costa Rica – Estados Unidos de América: evolución de la cooperación en seguridad e hitos previos que condicionan 2021-2025	39
2.2.3 Comparación histórica breve: México y Colombia; trayectorias y lecciones relevantes para Costa Rica	41
2.3 Marco Conceptual	43
2.3.1 Definiciones de narcocultura; fenómeno transnacional; cooperación internacional; imagen del Estado	43
2.3.2. Implicaciones conceptuales: cómo medir la afectación simbólica sobre la imagen estatal	47
2.4 Marco Referencial	49
2.4.1 Poder simbólico (Pierre Bourdieu)	49
2.4.2 Constructivismo.	50
2.4.3 Sistema Mundo	52
2.4.4 Conexión analítica: narcocultura e imagen estatal en la cooperación Costa Rica y Estados Unidos de América	54
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	55
3.1 Enfoque de la investigación	55
3.2 Método de Investigación	56
3.3 Fuentes de Información	57
3.3.1 Fuentes Primarias	58

3.3.2 Fuentes Secundarias	58
3.4 Población y Muestra	59
3.4.1 Población.....	59
3.4.2 Muestra	60
3.5 Unidad de Análisis	61
3.6 Instrumentos	61
3.6.1 Revisión bibliográfica	61
3.6.2 Entrevista a profundidad	62
3.7 Recolección y procesamiento de datos.....	63
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	64
4.1 Desarrollo del contexto sociocultural-político en el que se manifiesta la narcocultura en Costa Rica durante el período 2021-2025.....	64
4.1.1 Juventud y narcocultura en Costa Rica (2021-2025)	65
4.1.2 Medios de comunicación y narconarrativas	66
4.1.3 Religiosidad popular y narcocultura.....	67
4.1.4 Estética del lujo y ostentación	68
4.1.5 Juventud, sicariato y reclutamiento forzado; comparaciones regionales	69
4.1.6 Costa Rica como democracia pacífica.....	70
4.1.7 Reformas legales recientes	71
4.1.8 Presión externa en política pública: influencia de Estados Unidos en la agenda de seguridad y cooperación.....	73
4.1.9 Economía negra y narcotráfico: cómo el crimen organizado se inserta en la economía informal y afecta la legitimidad estatal	75
4.1.10 Costa Rica como país de tránsito: papel estratégico en la cadena global del narcotráfico y la narcocultura	76
4.1.11 Impacto en comunidades fronterizas y costeras: desigualdad, empleo informal y dependencia de economías ilícitas	77
4.2 Identificación de los mecanismos de cooperación internacional orientados al manejo de la narcocultura entre Costa Rica y Estados Unidos de América como fenómeno transnacional.	79
4.2.1 Introducción al fenómeno transnacional	79
4.2.2 Programas de seguridad.....	80
4.2.3 Alianzas internacionales y cooperación contra la narcocultura	82
4.2.4 Asistencia técnica	84
4.2.5 Comparación regional (MÉXICO Y COLOMBIA)	86

4.2.6 Impacto en la legitimidad estatal y diplomática.....	87
4.2.7 Cooperación bilateral con Estados Unidos de América: programas de seguridad, asistencia técnica y presión diplomática.	88
4.3 La narcocultura como fenómeno transnacional en la relación bilateral Costa Rica- Estados Unidos de América: aplicación del concepto habitus y su influencia en la seguridad regional.	90
4.3.1 Simbolismo	92
4.3.2 Política exterior costarricense	95
4.3.3 Enfoques culturales en Relaciones Internacionales: soft power y diplomacia simbólica	97
4.3.4 Relación Bilateral Costa Rica-Estados Unidos de América	99
4.3.5 Influencia en la seguridad regional	102
4.3.6 Comparación regional	103
4.4 La narcocultura como parte de la disputa simbólica entre Costa Rica- Estados Unidos de América.....	105
4.4.1 Dimensión	105
4.4.2 Habitus narco vs. Juventud	109
4.4.3 Cooperación bilateral, habitus narco se globaliza	112
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	117
5.1 Conclusiones.....	117
5.2 Recomendaciones:	124
BIBLIOGRAFÍA.....	127

CAPÍTULO 1

1. Introducción

El estudio de la narcocultura ha dejado de ser un tema exclusivo de la criminología para convertirse en un objeto de análisis relevante en las Relaciones Internacionales, este fenómeno, entendido como el conjunto de símbolos, narrativas y prácticas culturales asociadas con el narcotráfico. Este fenómeno se manifiesta en la vida cotidiana y en la percepción internacional de los Estados latinoamericanos (Astorga, 2012; Gaezón, 2023). Ahora bien, en el caso de Costa Rica, país que históricamente ha proyectado una imagen de estabilidad democrática y paz social, estas expresiones socioculturales del narcotráfico representan un desafío que trasciende las fronteras nacionales y se vincula con dinámicas transnacionales del crimen organizado.

Así pues, la relación bilateral con los Estados Unidos de América constituye un espacio privilegiado para examinar de qué manera estas representaciones simbólicas del mundo narco se convierten en un actor simbólico dentro de la diplomacia contemporánea. Entre 2021 y 2025, ambos países han reforzado sus mecanismos de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico, tal contexto abre la posibilidad de analizar no solo los resultados operativos de dicha cooperación, sino también los efectos culturales y simbólicos que emergen de ella. Por lo tanto, la pregunta central de esta investigación se orienta a comprender como la cooperación bilateral ha influido en la contención de los efectos transnacionales de estas dinámicas culturales asociadas con el narcotráfico sobre la seguridad regional (Bailey & Taylor, 2009).

Durante este mismo periodo, Costa Rica y Estados Unidos de América han fortalecido sus mecanismos de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico, por ejemplo, en febrero de 2025, el gobierno costarricense firmó nuevos convenios con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Estado, con el objetivo de intensificar la lucha contra el crimen organizado, aumentar la capacidad de decomisos y la desarticulación de bandas criminales (Código Extra, 2025).

Por otra parte, en julio de 2025 se prorrogó el Memorándum de Entendimiento entre ambos países, esto ampliaría el intercambio de datos mediante el Sistema Cooperativo de

Integración de Información Situacional (CSII). Asimismo, este acuerdo incluye información proveniente de radares, sensores y rastreos aéreos, con el fin de mejorar el control de los espacios aéreo, marítimo y terrestre frente al crimen organizado (El Observador, 2025).

Por otra parte, la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos de América a San José en febrero del año anterior reafirmó el compromiso bilateral en materia de seguridad, migración y ciberseguridad, destacando a Costa Rica como un “aliado y modelo” en la región (Forbes, 2025), este gesto diplomático evidenció que la cooperación bilateral no solo se limita a acciones operativas, sino también configura narrativas de legitimidad y confianza mutua que inciden en la percepción internacional de Costa Rica.

Por tanto, la relevancia de este análisis radica en ampliar el horizonte de las Relaciones Internacionales al incorporar las expresiones culturales del narcotráfico como categoría analítica, mientras la mayoría de los estudios sobre el tema se concentran en impactos económicos o políticos, esta propuesta visibiliza como las narrativas culturales inciden en la diplomacia y en la cooperación internacional. Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, la narcocultura puede interpretarse como un espacio de disputa simbólica que otorga poder a actores no convencionales, quienes adquieren capacidad de influencia mediante la producción y circulación de significados. Asimismo, este enfoque permite la comprensión de la forma en que estas manifestaciones socioculturales impactan en la seguridad regional y redefine el papel de la diplomacia en escenarios no tradicionales (Bourdieu, 1997).

Por lo tanto, el contexto regional refuerza la pertinencia del tema, investigaciones en México, Colombia y Centroamérica han demostrado que estas configuraciones culturales vinculadas al narco no se restringen a expresiones locales, más bien se expanden como un fenómeno cultural con capacidad de cohesión y de influencia internacional (Becerra Romero, 2018; Edberg, 2004; Bravo Fierro, 2025). En Costa Rica, trabajos como los de Saborío (2019) y Muñoz Guillén (1997) han señalado la relación entre narcotráfico, democracia y soberanía, pero aún persiste un vacío en torno al análisis de la narcocultura como actor simbólico dentro de la diplomacia.

Por otra parte, la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos de América ofrece un marco idóneo para abordar este vacío, los acuerdos bilaterales, programas de

asistencia técnica y estrategias conjuntas de seguridad buscan no solo la reducción de los impactos del narcotráfico, sino también el enfrentamiento de las narrativas que legitiman estas expresiones culturales asociadas con el crimen organizado, en suma, la identificación de estos mecanismos y la evaluación con su eficacia en la contención de los efectos transnacionales del fenómeno constituye un aporte sustantivo al campo académico y a la práctica diplomática.

Esta investigación se propone el análisis de la narcocultura como fenómeno transnacional en el marco de la relación bilateral Costa Rica- Estados Unidos de America, al hacerlo, se reconoce que este fenómeno no es únicamente un problema interno, sino un desafío compartido el cual requiere respuestas coordinadas y sensibles a las dimensiones culturales, en síntesis este estudio aporta al campo de las Relaciones Internacionales al integrar el análisis cultural en la teoría de la cooperación internacional, ofreciendo un enfoque innovador el cual visibiliza nuevas formas de poder simbólico que afecta la seguridad regional.

1.1. Planteamiento del problema

El narcotráfico, más allá de su dimensión criminal y económica, ha generado un conjunto de expresiones culturales consolidadas bajo lo que diversos autores han denominado cultura del narcotráfico, este fenómeno incluye narrativas, símbolos, prácticas sociales y representaciones que de forma directa o indirecta, legitiman y normalizan las actividades ilícitas, convirtiéndose en un elemento el cual trasciende las fronteras nacionales y se inserta en dinámicas transnacionales (Edberg,2004; Valenzuela Arce, 2012). Dichas manifestaciones no solo se manifiestan en expresiones artísticas como la música o la literatura, sino también en imaginarios colectivos que influyen en la percepción internacional de los Estados y en la legitimidad de sus instituciones (Rincón,2013).

A su vez, la cultura del narcotráfico se ha consolidado como un fenómeno transnacional que trasciende las fronteras nacionales y afecta tanto la percepción interna como la imagen internacional de los Estados. En el caso de Costa Rica, tradicionalmente reconocida por su estabilidad democrática y su perfil pacifista, la emergencia de expresiones culturales vinculadas al narcotráfico plantea un desafío a su diplomacia y a la cooperación bilateral con Estados Unidos, “la narcocultura se ha convertido en un elemento simbólico

que trasciende fronteras y afecta la percepción internacional de los Estados” (Astorga, 2015,p.42).

Por un lado, la inserción de estas representaciones socioculturales en la vida cotidiana costarricense, no solo representan un desafío de seguridad interna, más bien condiciona la manera en que otros Estados perciben la legitimidad del país como socio estratégico, como señala Rincón (2020), “la imagen internacional de un país puede verse erosionada cuando la cultura del narcotráfico se convierte en un referente social y simbólico”(p.103), Molina (2021) complementa esta idea al advertir que la narcocultura no debe analizarse únicamente como un fenómeno criminal, por el contrario un entramado cultural que redefine las relaciones de poder y la legitimidad institucional en la región.

En México, las representaciones sociales del narcotráfico han sido ampliamente documentada como un fenómeno que permea la vida cotidiana y la esfera pública, investigaciones como las de Astorga (2005), Valenzuela Arce (2012) y Rincón (2013) han demostrado que este fenómeno legitima prácticas ilícitas y configura imaginarios colectivos los cuales consolidan la figura del narcotraficante como símbolo de poder y prestigio social (Becerra Romero,2018), la música de los narcocorridos, las series televisivas y las narrativas literarias han contribuido a normalizar la violencia y a proyectar una imagen cultural que trasciende las fronteras nacionales (Rincón, 2013).

En segundo lugar, este caso resulta fundamental para comprender la expansión transnacional de las manifestaciones culturales vinculadas con el narcotráfico hacia Centroamérica, donde Costa Rica comienza a experimentar manifestaciones similares en su contexto sociopolítico. En Colombia, las narrativas simbólicas del crimen organizado se han vinculado históricamente con la violencia, la política y la economía, generando un impacto profundo en la legitimidad del Estado y en su imagen internacional (Thoumi, 2003; Bailey & Taylor, 2009).

Según lo anterior, la figura de los carteles y su representación cultural han trascendido las fronteras nacionales, influyendo en otros países de la región y consolidando estas dinámicas culturales del narco como un fenómeno transnacional (García-Peña,2016; UNODC,2021). Las expresiones socioculturales originadas en el contexto colombiano se han expresado en prácticas sociales, en la música popular y en narrativas mediáticas que han

proyectado la figura del narcotraficante como héroe con poder, esto ha cambiado su imagen a la política exterior y a la cooperación internacional en materia de seguridad (García-Peña, 2016).

En países como México y Colombia, por ejemplo, este fenómeno ha sido objeto de múltiples investigaciones las cuales destacan su influencia en la vida cotidiana, en la legitimidad de las instituciones estatales y en la configuración de imaginarios colectivos (Becerra Romero, 2018; Bailey & Taylor, 2009), sin embargo en Costa Rica, los estudios sobre estas expresiones culturales son aun incipientes y se concentran principalmente en la narcoviolenencia, sus efectos sobre la democracia y la soberanía nacional (Muñoz Guillén, 1997; Saborío, 2019).

La comparación entre México, Colombia y Costa Rica revela distintos niveles de consolidación de estas configuraciones culturales ligadas con el narcotráfico y sus efectos en la política exterior, mientras tanto en México y Colombia se trata de fenómenos históricos y estructurales, por su lado, en Costa Rica se encuentra en una fase de expansión que amenaza con erosionar la imagen de estabilidad democrática, “ el narcotráfico no es solo un problema de seguridad interna, sino un factor que redefine las relaciones internacionales y los compromisos bilaterales” (Garzón, 2018, p.67).

En México, estas representaciones han consolidado una identidad cultural proyectada internacionalmente, afectando la percepción del país en escenarios diplomáticos (Valenzuela Arce, 2012), en Colombia, este movimiento se ha entrelazado con la violencia y la política, condicionándola legitimidad del Estado y su política exterior (Thoumi, 2023; García-Peña, 2016).

Ahora bien, Costa Rica ha construido históricamente una imagen internacional de estabilidad democrática, respeto a los derechos humanos y ausencia de fuerzas armadas, lo que le ha permitido proyectarse como un país seguro y confiable en la región, esta reputación ha sido un activo diplomático fundamental en su política exterior, no obstante, el crecimiento del narcotráfico y la expansión de sus expresiones culturales han comenzado a tensionar esta percepción, generando un desafío para la política exterior y la cooperación internacional (Saborío, 2019).

Estas dinámicas culturales del narco al operar como un fenómeno simbólico no solo afectan la seguridad interna, también inciden en la manera en que otros Estados y actores internacionales interpretan la legitimidad de Costa Rica como socio estratégico. A saber, la relación bilateral con Estados Unidos de América constituye un espacio privilegiado para examinar esta problemática.

Entre 2021 y 2025, ambos países han intensificado sus mecanismos de cooperación contra el crimen organizado, mediante acuerdos bilaterales, programas de asistencia técnica y estrategias conjuntas de seguridad, sin embargo, la mayoría de los análisis sobre esta cooperación se han centrado en resultados operativos, a saber decomisos de drogas, fortalecimiento institucional o capacidad policial, sin considerar los efectos culturales y simbólicos que acompañan al fenómeno. Por lo tanto, este vacío limita la comprensión integral de cómo la cooperación internacional contribuye a contener no solo el narcotráfico, sino también las narrativas que legitiman y expanden este fenómeno cultural (Bailey & Taylor, 2009; Bravo Fierro, 2025).

Si bien, la cooperación bilateral enfrenta un reto particular cuando estas expresiones simbólicas se convierten en un referente simbólico que permea la percepción internacional, este fenómeno cultural no solo afecta la seguridad interna, incluso condiciona la legitimidad de los tratados bilaterales en materia de lucha antidrogas y seguridad regional. Astorga (2015) advierte que “la narcocultura se ha convertido en un elemento simbólico que trasciende fronteras y afecta la percepción internacional de los Estados” (p.42), esto evidencia la necesidad de integrar la dimensión cultural en los análisis de cooperación.

La inclusión del caso colombiano en este planteamiento permite dimensionar la magnitud del problema, Colombia ha sido históricamente uno de los países más afectados por el narcotráfico y por las manifestaciones culturales asociadas con este fenómeno, con repercusiones profundas en su política interna, su seguridad y su imagen internacional. La narcocultura en Colombia se ha expresado en música, literatura, medios de comunicación y prácticas sociales que han normalizado la figura del narcotraficante como actor de poder y prestigio (Bailey & Taylor, 2009).

Este fenómeno ha trascendido las fronteras nacionales y ha influido en la percepción internacional de Colombia, condicionando su política exterior y sus relaciones diplomáticas,

la comparación entre Costa Rica y Colombia revela dos escenarios distintos, pero complementarios, mientras tanto en Colombia estas dinámicas culturales del narco han tenido un impacto histórico y estructural, en Costa Rica se encuentra en una fase de expansión que amenaza con erosionar la imagen de estabilidad democrática.

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, estas configuraciones simbólicas pueden interpretarse como un espacio de disputa simbólica que otorga poder a actores no convencionales, quienes adquieren capacidad de influencia mediante la producción y circulación de significados (Bourdieu, 1997), este poder simbólico afecta directamente la legitimidad diplomática y la seguridad regional, pues configura imaginarios colectivos que trascienden las fronteras estatales y condicionan la cooperación internacional (Bourdieu, 1997; Bravo Fierro, 2025).

Por su parte, Molina (2021) coincide en que estas expresiones culturales deben comprenderse dentro de un campo social en donde se disputan capitales simbólicos, esta perspectiva permite analizar como los actores ilegales no solo buscan beneficios económicos, sino también reconocimiento y legitimidad dentro de un entramado cultural, al apropiarse de símbolos y narrativas, estos actores logran posicionarse en espacios de poder que trascienden lo local y se proyectan en la arena internacional.

En línea con Bourdieu (1997), “el poder simbólico es, en efecto, ese poder invisible que solo puede ejercerse con la complicidad de quienes lo sufren” (p.170), esto explica como las representaciones culturales del narcotráfico logran consolidarse a manera de formas de influencia legítima, de igual manera, Vázquez Gutiérrez (2022) señala que las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico funcionan como mecanismos de cohesión social que moldean percepciones colectivas y condicionan la acción política, la narcocultura debe analizarse como un fenómeno el cual disputa espacios de poder en el campo internacional, configurando un escenario simbólico que afecta tanto la política exterior como la percepción internacional de los Estados, “las representaciones culturales del narcotráfico no solo reflejan una realidad social, sino que también producen formas de legitimidad que inciden en la acción política y diplomática” (Vázquez Gutiérrez, 2022, p.45).

En el caso colombiano, las manifestaciones socioculturales han demostrado su capacidad de expansión transnacional, influyendo en otros países de la región y generando

narrativas que legitiman el narcotráfico como forma de movilidad social (Thoumi,2003; García-Peña,2016). En México, por su parte, estas dinámicas simbólicas han consolidado una identidad cultural proyectada internacionalmente, afectando la percepción del país en escenarios diplomáticos (Astorga,2005), en Costa Rica, este fenómeno comienza a manifestarse en expresiones culturales y sociales que, de no ser atendidos, podrían consolidarse como parte de la identidad regional (Muñoz Guillén,1997).

La ausencia de estudios que integren la dimensión cultural en el análisis de la cooperación bilateral genera un problema académico y práctico, en el plano académico, se perpetua una visión reduccionista del narcotráfico que invisibiliza su dimensión simbólica y cultural (Edberg,2004; Becerra Romero,2018). En el área práctica, se diseñan políticas de cooperación que no consideran los factores culturales que legitiman estas representaciones, lo que limita su eficacia en la contención de sus efectos transnacionales (Bailey & Taylor,2009).

En consecuencia, el problema de investigación se centra en la necesidad de analizar cómo la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos ha influido en la contención de los efectos transnacionales de estas dinámicas culturales asociadas con el narcotráfico sobre la seguridad regional durante el periodo 2021-2025, considerando además las lecciones que ofrecen los casos de México y Colombia (Astorga,2005), asimismo evidencian que la literatura académica carece de un enfoque que reconozca estas expresiones culturales como actores simbólicos de la diplomacia contemporánea. Este vacío obliga a proponer un análisis que considere el narcotráfico como un fenómeno regional el cual requiere respuestas coordinadas y culturalmente informadas (Bravo Fierro,2025; Bourdieu,1997).

La cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos enfrenta un reto particular cuando las expresiones culturales asociadas a las actividades ilícitas, se convierten en un referente simbólico que permea la percepción internacional, este fenómeno cultural no solo afecta la seguridad interna, más bien condiciona la legitimidad de los tratados bilaterales en materia de lucha antidrogas y seguridad regional, “la imagen internacional de un país puede verse erosionada cuando la cultura del narcotráfico se convierte en un referente social y simbólico” (Rincón,2020, p.103).

En el caso costarricense, esta tensión entre su reputación histórica de paz y democracia y la creciente visibilidad de expresiones vinculadas con el narcotráfico genera un impacto directo en la confianza diplomática con Estados Unidos, influyendo en la manera en que se negocian y ejecutan los acuerdos de cooperación. Astorga (2015) también señala que “la narcocultura se ha convertido en un elemento simbólico que trasciende fronteras y afecta la percepción internacional de los Estados” (p.42).

El problema de investigación justifica los objetivos planteados, a saber describir el contexto sociopolítico y cultural en que emergen estas representaciones del narcotráfico en Costa Rica; identificar los mecanismos de cooperación internacional frente a este desafío; analizarlo como proceso transnacional en el marco de la relación bilateral; examinar estas dinámicas culturales como parte de la disputa simbólica entre Costa Rica y Estados Unidos de América, esta articulación asegura que el estudio no solo atienda los resultados operativos de la cooperación, sino también las narrativas culturales que legitiman y expanden este concepto.

Lo anterior, refuerza la necesidad de analizar la forma en que este fenómeno cultural incide en la política exterior costarricense y en su relación bilateral con Washington, siendo así se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo ha influido la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos de América en la contención de los efectos transnacionales de la narcocultura sobre la seguridad regional durante el periodo 2021-2025?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general:

Analizar la narcocultura en las relaciones diplomáticas entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América por medio de la cooperación internacional contra el crimen organizado durante el periodo 2021-2025.

1.2.2. Objetivos específicos:

- Desarrollar el contexto sociocultural-político en el que se manifiesta la narcocultura en Costa Rica durante el periodo 2021-2025.
- Identificar los mecanismos de cooperación internacional orientados al manejo de la

narcocultura entre Costa Rica y Estados Unidos de América como fenómeno transnacional.

- Interpretar la narcocultura como fenómeno transnacional de la relación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos de América en la disputa simbólica como parte de la influencia de seguridad regional bajo el concepto de habitus.
- Categorizar la narcocultura como parte de la disputa simbólica entre Costa Rica-Estados Unidos de América.

1.3. Justificación

Hablar de narcocultura no es únicamente referirse a un fenómeno criminal o económico, es reconocer que detrás de cada corrido, cada serie televisiva y cada símbolo que circula en la vida cotidiana, se construyen imaginarios los cuales legitiman y normalizan el narcotráfico, estos imaginarios como dice Edberg (2004), “el narcotraficante se convierte en una figura cultural que simboliza poder, movilidad social y resistencia frente al orden establecido” (p.27) son parte de una cultura que atraviesa fronteras y que influye en cómo las sociedades entienden el poder y la movilidad social, en este sentido, estas dinámicas culturales del narco no es un tema marginal, más bien constituye un actor simbólico que afecta la legitimidad de los Estados y la manera en cual se relacionan con el mundo (Rincón,2013).

Estas manifestaciones socioculturales deben entenderse como un fenómeno dinámico que se desplaza más allá de las fronteras nacionales y que, en su carácter de movimiento social y cultural, incide directamente en la política exterior, no se trata únicamente de expresiones artísticas o narrativas populares, sino de un entramado simbólico el cual influye en la manera en que los Estados son percibidos en el ámbito internacional.

En el caso de Costa Rica, esta situación adquiere especial relevancia porque contrasta con la imagen histórica de país pacífico, generando tensiones en su proyección diplomática, Rincón lo define como “la imagen internacional de un país puede verse erosionada cuando la cultura del narcotráfico se convierte en un referente social y simbólico” (Rincón,2020,p.103), este contraste obliga a analizar cómo este fenómeno afecta la

legitimidad de los tratados bilaterales con Estados Unidos y cómo condiciona la agenda de cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Costa Rica, históricamente reconocida por su estabilidad democrática y su imagen internacional de paz, enfrenta hoy un reto que toca fibras sensibles de su identidad, la expansión del narcotráfico y sus expresiones culturales cuestionan esa reputación de país seguro y confiable, “la narcoviolenencia en Costa Rica ha dejado de ser un fenómeno aislado y comienza a erosionar la confianza en las instituciones democráticas” (Saborío,2019 p.15), este vacío en la investigación académica justifica la necesidad de un estudio que visibilice estas dinámicas culturales no solo como fenómeno de seguridad, sino también como un factor diplomático. (Muñoz Guillén,1997).

En efecto, la cooperación bilateral con Estados Unidos ofrece un escenario privilegiado para analizar esta problemática, entre 2021-2025, ambos países han intensificado sus esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado, pero la mayoría de los estudios se han centrado en resultados operativos y no en el fenómeno como tal. “Las políticas antidrogas en América Latina han estado más preocupadas por los resultados inmediatos que por las dinámicas culturales que sostienen al narcotráfico” (Bailey & Taylor, 2009 p.8), este silencio académico limita la comprensión integral del problema y en la práctica, reduce la eficacia de las estrategias de cooperación (UNODC,2024; OEA,2013).

La comparación con México y Colombia refuerza la pertinencia de este trabajo, en México, estas configuraciones culturales del narco han consolidado una identidad que se proyecta internacionalmente, “la narcocultura es una narrativa de poder que se ha convertido en parte de la vida cotidiana y en un referente cultural de alcance global” (Valenzuela Arce,2012 p.19), por otra parte, en Colombia, estas dinámicas se han entrelazado con la violencia y la política, condicionando la legitimidad del Estado y su política exterior.

Según Thoumi (2003), “el narcotráfico no puede entenderse únicamente como un negocio ilegal, sino como un fenómeno social que ha penetrado en la cultura política colombiana” (p.45), ambos casos muestran que estas representaciones son fenómenos aislados, sino transnacionales, con capacidad de influir en la seguridad regional y en la diplomacia (García-Peña,2016).

Desde el plano académico, esta investigación amplía el campo de las Relaciones Internacionales al integrar la dimensión cultural en el análisis de la cooperación internacional. La teoría de Pierre Bourdieu sobre el poder simbólico permite la comprensión de como este fenómeno se convierte en un espacio de disputa simbólica que otorga poder a actores no convencionales, “el poder simbólico es, en efecto, ese poder invisible que solo puede ejercerse con la complicidad de quienes lo sufren” (Bourdieu, 1997 p.170).

Este enfoque humaniza el análisis, porque reconoce que detrás de las estadísticas y los acuerdos bilaterales hay narrativas que moldean la vida cotidiana y la percepción colectiva (Vázquez Gutiérrez, 2022). En el plano social, el estudio contribuye a sensibilizar sobre los impactos culturales del narcotráfico, reconocer estas dinámicas simbólicas como fenómeno transnacional es también reconocer que afecta a comunidades, jóvenes y familias, y que las políticas públicas deben atender no solo la dimensión criminal, sino también la simbólica.

Como advierte la OEA (2013), “el problema de las drogas en las Américas no puede ser reducido a cifras de incautaciones; requiere comprender sus impactos sociales y culturales” (p.12). La pertinencia temporal y regional del estudio lo hace urgente, el periodo a estudiar marca un momento clave en la cooperación Costa Rica- Estados Unidos, la comparación con Mexico y Colombia ofrece lecciones valiosas para fortalecer la respuesta regional.

Ortiz Ruiz (2020) señala que “la cooperación internacional en materia de drogas debe aprender de las experiencias previas para no repetir errores y para integrar dimensiones culturales en sus estrategias” (p.33), la justificación del estudio radica en visibilizar la dimensión internacional de un fenómeno cultural que, al convertirse en movimiento, redefine las relaciones diplomáticas y la posición de Costa Rica en el sistema internacional.

La investigación se justifica en la necesidad de comprender estas expresiones culturales como un fenómeno que trasciende lo cultural interno y se convierte en un movimiento con implicaciones diplomáticas, Costa Rica enfrenta el reto de conservar su pacífica y democrática imagen frente a la expansión de símbolos y narrativas vinculadas al narcotráfico, este hecho afecta directamente la cooperación bilateral con Estados Unidos al condicionar su imagen, “la imagen internacional de un país puede verse erosionada cuando

la cultura del narcotráfico se convierte en un referente social y simbólico” (Rincón, 2020,p.103), analizar este fenómeno influiría en la política exterior y en la proyección internacional del país, reforzando la pertinencia académica y practica de este estudio.

1.4. ANTECEDENTES

1.4.1 Internacionales

Astorga (2005), en su obra *El siglo de las drogas: el narcotráfico, el Porfiriato al nuevo milenio*, publicada por Plaza y Janés en México, ofrece un análisis histórico sobre cómo el narcotráfico se convirtió en parte de la vida cotidiana mexicana, el autor señala que “el narcotráfico dejo de ser únicamente un negocio ilícito para convertirse en un fenómeno social que permea la cultura y la política” (Astorga, 2005, p.42). Esta afirmación muestra que el narcotráfico no puede entenderse solo desde la perspectiva criminal, sino como un entramado cultural que legitima prácticas ilícitas y configura imaginarios colectivos.

No obstante, el estudio de Astorga (2005), resulta fundamental porque introduce la idea de que el narcotráfico debe analizarse como fenómeno cultural y no únicamente desde la criminología, al describir la figura del narcotraficante como símbolo de movilidad social y resistencia frente al orden establecido, el autor evidencia como estas narrativas han tenido repercusiones en la política interna y en la percepción internacional de México.

La relevancia de este antecedente para la investigación radica en que evidencia cómo las narrativas culturales vinculadas con el narcotráfico trascienden las fronteras nacionales y repercuten en la diplomacia mexicana. Este enfoque permite el establecimiento de paralelismos con Costa Rica, en donde las expresiones culturales asociadas al narcotráfico comienzan a emerger y generan tensiones tanto en la proyección internacional del país como la dinámica de cooperación bilateral con Estados Unidos, reconocer estas manifestaciones culturales como parte de la disputa simbólica regional resulta clave para comprender los desafíos enfrentados por la política exterior costarricense en materia de seguridad.

Valenzuela Arce (2012), en *Narcocultura: lo cotidiano y lo espectacular*, profundiza en la dimensión cultural del narcotráfico, mostrando como las prácticas cotidianas y las expresiones artísticas han convertido a este fenómeno en una narrativa de poder con alcance global, el autor afirma que “la narcocultura es un espejo de la sociedad mexicana, en donde

lo ilícito se normaliza y lo espectacular se convierte en parte de la vida cotidiana” (Valenzuela Arce, 2012, p. 15).

La investigación antes mencionada, es clave porque introduce la idea de que la narcocultura debe analizarse como un fenómeno transnacional, capaz de afectar la seguridad regional y la legitimidad de los Estados, Valenzuela destaca que las representaciones culturales del narcotráfico, tales como la música y las producciones audiovisuales, han logrado consolidarse como símbolos de identidad que trascienden fronteras.

Del mismo modo, la pertinencia de este estudio para esta investigación radica en que muestra como las narrativas culturales vinculadas con el narcotráfico pueden convertirse en actores simbólicos dentro de la diplomacia, esto refuerza la necesidad de analizar como Costa Rica, al intensificar su cooperación bilateral con Estados Unidos de América, enfrenta el reto de contener no solo el crimen organizado, sino también las narrativas culturales que legitiman el narcotráfico.

Rincón (2013), en *Narrativas del narcotráfico en América Latina*, estudia como las producciones culturales, en otras palabras como los narcocorridos, las series televisivas y las narrativas literarias consolidan imaginarios colectivos que normalizan la violencia y legitiman la figura del narcotraficante como símbolo de prestigio social, el autor señala que “los narcocorridos no son simples canciones, son relatos que legitiman la violencia y la convierten en parte de la identidad cultural” (Rincón, 2013, p.67).

Este antecedente es importante porque conecta directamente la dimensión cultural con la diplomática, mostrando que las narrativas simbólicas del narcotráfico tienen efectos transnacionales, Rincón (2013) argumenta que la narcocultura se convierte en un actor simbólico que redefine las relaciones internacionales, al proyectar una imagen cultural que trasciende las fronteras nacionales.

La relevancia de este estudio radica en que demuestra como las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico afectan la percepción internacional de los Estados, esto refuerza la necesidad de analizar como Costa Rica enfrenta este fenómeno en su relación bilateral con Estados Unidos de América.

Thoumi (2003), en *Drogas ilícitas en Colombia; Su impacto político y económico*, demuestra que el narcotráfico no puede entenderse únicamente como un negocio ilegal, sino un fenómeno social que penetra la cultura política y afecta la legitimidad estatal, el autor afirma que “el narcotráfico en Colombia no es solo un problema de seguridad, es un fenómeno que ha moldeado la política y la economía del país” (Thoumi, 2003, p.23).

Esto conecta la dimensión cultural con la política exterior, mostrando que la narcocultura afecta directamente la diplomacia, Thoumi argumenta que las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico han legitimado prácticas ilícitas y han consolidado símbolos de poder que afectan la percepción internacional de Colombia.

Se muestra como la narcocultura afecta la cooperación internacional en materia de seguridad, esto refuerza la necesidad de analizar como Costa Rica, al intensificar su cooperación bilateral con Estados Unidos, enfrenta el reto de contener las narrativas culturales que legitiman el narcotráfico.

García-Peña (2016), en *Narcotráfico y cultura política en Colombia*, profundiza en como las representaciones culturales del narcotráfico han condicionado la política exterior colombiana y su cooperación internacional en materia de seguridad, el autor señala que “la figura del narcotraficante se ha convertido en un héroe social, legitimado por narrativas culturales que afectan la política exterior del Estado” (García- Peña, 2016, p.54).

La narcocultura no solo afecta la seguridad interna, sino también la política exterior y la cooperación internacional, el autor argumenta que las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico han legitimado prácticas ilícitas y han considerado símbolos de poder los cuales afectan la percepción internacional de Colombia.

Muestra como las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico afectan directamente la diplomacia, esto refuerza la necesidad de analizar como Costa Rica enfrenta este fenómeno en su relación bilateral con Estados Unidos.

1.4.2. Nacionales

Muñoz Guillén (1997), en *Narcotráfico, democracia y soberanía nacional en Costa Rica*, fue pionera en advertir que el narcotráfico debía analizarse más allá de su dimensión criminal, como un factor que afecta la soberanía nacional y la legitimidad democrática, la

autora señala que “el narcotráfico constituye una amenaza directa a la soberanía costarricense, pues condiciona las decisiones políticas y las relaciones internacionales” (Muñoz Guillén, 1997, p.34).

La autora mostró que la expansión del narcotráfico en Costa Rica comenzaba a condicionar la relación diplomática con Estados Unidos, anticipando que este fenómeno podría erosionar la imagen internacional del país, enfatizan que “la democracia costarricense, tradicionalmente reconocida por su estabilidad, enfrenta un nuevo desafío que proviene de actores no estatales con capacidad de influencia transnacional” (Muñoz Guillén, 1997, p.56).

Introduce la idea de que el narcotráfico no solo compromete la seguridad interna, sino también la proyección internacional de Costa Rica, esto conecta directamente con esta investigación, ya que analiza como las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico afectan la cooperación bilateral con Estados Unidos de América.

Saborío (2019), en su Estado del arte sobre narcoviencia en Costa Rica, publicado en la Revista Reflexiones, sistematizó investigaciones sobre narcoviencia en Costa Rica, el autor afirma que “la narcoviencia ha dejado de ser un fenómeno aislado y comienza a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas” (Saborío, 2019, p.12).

El autor evidencia que la violencia asociada al narcotráfico impacta directamente la democracia costarricense, debilitando la legitimidad del Estado y generando tensiones en la imagen internacional del país, en otro estudio, Saborío (2019) profundizó en como la narcoviencia afecta la percepción de Costa Rica como nación pacífica y estable, señalando que “la violencia vinculada al narcotráfico amenaza con transformar la identidad internacional del país” (Saborío, 2019, p.28).

Este autor muestra como la narcoviencia, a manera de expresión cultural y social, afecta tanto la legitimidad interna como la imagen internacional de Costa Rica, esto refuerza la necesidad de analizar como la cooperación bilateral con Estados Unidos aborda no solo la dimensión operativa del narcotráfico, sino también sus efectos culturales.

Vieira Filho (2024), en el Informe Estado de la Justicia, analizó la evolución de los grupos criminales vinculados con el narcotráfico entre 2010 y 2023, el autor señala que “las

organizaciones criminales en Costa Rica han desarrollado narrativas culturales propias que legitiman su presencia en comunidades vulnerables” (Vieira Filho, p.45).

En este sentido, Vieira Filho mostró cómo las políticas públicas de seguridad han intentado responder a la expansión de bandas criminales, pero también evidenció que estas organizaciones han logrado insertarse en el tejido social mediante símbolos y prácticas culturales, Vieira Filho afirma que “la eficiencia de las políticas públicas depende de su capacidad para enfrentar no solo la violencia física, sino también las narrativas culturales que sostienen al narcotráfico” (Vieira Filho, 2024, p.63).

El autor conecta la dimensión operativa de la seguridad con la dimensión simbólica del fenómeno, mostrando que las políticas públicas no pueden ser eficaces si no consideran las narrativas culturales que legitiman el narcotráfico, Vieira Filho al proponer que las organizaciones criminales desarrollan narrativas culturales propias las cuales normalizan su presencia en las comunidades vulnerables, implica que las estrategias estatales centradas únicamente en la represión y el decomiso de drogas resultan insuficientes, ya que no enfrentan el poder simbólico que el narcotráfico ejerce sobre la población.

La legitimidad del narcotráfico no se construye únicamente a través de la violencia, sino también mediante símbolos, imaginarios y prácticas culturales que generan aceptación social, en palabras de Bourdieu (1997), “el capital simbólico es el poder de hacer ver y hacer creer” (p.118), esto explica cómo las narrativas del narcotráfico logran consolidarse, a saber referentes de prestigio y movilidad social, si las políticas públicas ignoran esta dimensión, corren el riesgo de combatir solo los síntomas del problema y no las raíces culturales que lo sostienen.

Tania Molina (2018), en *Imaginarios sociales del narcotráfico en Costa Rica*, estudió cómo las narrativas vinculadas al narcotráfico comienzan a permear la vida cotidiana costarricense, en suma Molina señala que “los imaginarios sociales contruidos alrededor del narcotráfico legitiman prácticas ilícitas y afectan la percepción de seguridad” (Molina, 2018, p.22).

En *Futuro secuestrado* (2020), la autora profundizó en el impacto del narcotráfico sobre la juventud, mostrando cómo las dinámicas culturales y simbólicas del crimen

organizado condicionan las expectativas de movilidad social y futuro de las nuevas generaciones, afirma que ¡la juventud costarricense enfrenta un futuro secuestrado por narrativas que legitiman la violencia y el poder del narcotráfico” (Molina, 2020, p.41).

Pierre Bourdieu (1997), en *Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción*, plantea que las practicas sociales están determinadas por el habitus, entendido como un sistema de disposiciones duraderas que orienta la acción de los individuos, en el contexto del narcotráfico, este concepto permite comprender como las narrativas culturales vinculadas al crimen organizado se interiorizan en la vida cotidiana y legitiman prácticas ilícitas, Bourdieu señala que “el habitus es historia hecha cuerpo, es memoria social convertida en disposición” (Bourdieu, 1997,p.87), esto explica como las representaciones culturales del narcotráfico se convierte en parte de la identidad de ciertos sectores sociales.

Por su parte, la teoría del capital simbólico de Bourdieu también resulta fundamental para analizar la narcocultura, el autor sostiene que “el capital simbólico es el poder de hacer ver y hacer creer, de confirmar o transformar la visión del mundo” (Bourdieu,1997, p.118), en el caso costarricense, las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico otorgan prestigio y reconocimiento social a quienes participan en actividades ilícitas, consolidando la figura del narcotraficante como símbolo de poder, permitiendo entender como la narcocultura legitima prácticas ilegales y afecta la percepción de la juventud, tal como lo señala Molina (2020) en *Futuro secuestrado*.

Finalmente, la noción de campo social propuesta por Bourdieu ofrece un marco para analizar como el narcotráfico se inserta en la estructura social costarricense, el autor afirma que “cada campo es un espacio de posiciones y de luchas por la legitimidad” (Bourdieu,1997,p.142), en este sentido, el narcotráfico se convierte en un campo en donde se disputan formas de poder económico, político y simbólico, afectando tanto la legitimidad interna como la imagen internacional de Costa Rica, este antecedente es crucial porque conecta la teoría sociológica con el análisis cultural y diplomático, mostrando que la narcocultura no solo es un fenómeno criminal, sino también un actor simbólico que redefine las relaciones internacionales.

Ante esto, Fuentes periodísticas como Código Extra (2025) documentan la firma de convenios de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos de América con la DEA, el FBI

y el Departamento de Estado, el reportaje señala que “Costa Rica se ha convertido en un aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado” (Código Extra, 2025, p.3).

Estos acuerdos reflejan la dimensión operativa de la cooperación bilateral en materia de seguridad, pero también muestran como la narrativa oficial busca legitimar a Costa Rica como socio confiable en la región, el medio destaca que “la cooperación bilateral no solo se limita a acciones operativas, sino que configura narrativas de legitimidad y confianza mutua” (Código Extra, 2025, p.5).

Este antecedente permite conectar la dimensión cultural con la diplomática, mostrando que la cooperación bilateral no solo responde a necesidades de seguridad, sino también a la construcción de una narrativa internacional que refuerza la imagen de Costa Rica como país comprometido con la estabilidad regional.

PROYECCIONES

1.5.1 Alcances

La investigación se proyecta como un aporte académico y social que visibiliza a la narcocultura en Costa Rica y su afectación en la cooperación bilateral con Estados Unidos de América, su alcance principal es profundizar en un fenómeno que ha sido poco estudiado en el país, pero que ya muestra signos de expansión en la vida cotidiana, especialmente en la juventud y en las comunidades más vulnerables.

En el plano académico, este estudio pretende concientizar en la importancia de entender la narcocultura como fenómeno cultural y simbólico, además se pretende que este trabajo se convierta en un pionero para futuras investigaciones las cuales profundicen en las narrativas, imaginarios y representaciones sociales vinculadas con la cooperación y al narcotráfico. La investigación busca ampliar la relevancia del tema en Costa Rica, mostrando que no se trata de una realidad ajena, sino de un fenómeno que ya permea expresiones culturales, discursos mediáticos y dinámicas sociales.

En el plano institucional, el alcance es aportar al debate sobre la cooperación internacional en materia antidrogas, se pretende brindar un mayor desarrollo al análisis de cómo estas alianzas fortalecen o limitan la capacidad estatal y la forma en que se perciben

desde la ciudadanía, se busca que los hallazgos puedan servir como referencia para diseñar políticas públicas más sensibles que no se limiten a la dimensión represiva, más bien integren aspectos culturales y sociales.

En el plano cultural y social, el alcance corresponde a la visibilización de las formas en que la narcocultura se normaliza en la vida cotidiana, especialmente en las poblaciones más vulnerables, la investigación pretende dar voz a las comunidades que enfrentan la presencia de símbolos narco en música, redes sociales y estilos de vida, mostrando cómo estas expresiones influyen en la construcción de identidades y en la percepción de la legitimidad democrática. El objetivo es que el estudio sirva para programas educativos o comunitarios que busquen contrarrestar la influencia de este fenómeno.

Los alcances de la investigación se orientan a construir un análisis integral que combine lo académico, lo institucional y lo social, con el fin de aportar a un debate más humano y crítico sobre este imaginario y la cooperación internacional. Incluso se pretende que el trabajo no quede únicamente en un plano teórico, más bien tenga un impacto real en la comprensión del fenómeno y la formulación de respuestas más cercanas a las necesidades de las comunidades.

1.5.2 Limitaciones

Toda investigación tiene fronteras que delimitan hasta dónde puede llegar, reconocer estas limitaciones es parte del rigor metodológico y mantener la coherencia del estudio, en el plano temporal, el análisis se circunscribe al periodo 2021-2025, esto significa que los escenarios futuros se proyectan únicamente a partir de las tendencias observadas en este marco temporal, no se pretenden abarcar dinámicas anteriores ni posteriores, por lo tanto implica que los hallazgos deben entenderse como una fotografía parcial de un fenómeno en constante evolución.

En el plano geográfico, el estudio se centra en Costa Rica como caso principal, con referencias comparativas a México y Colombia, no se incluyen otros países de la región, aunque se reconoce el narcotráfico y la narcocultura son fenómenos transnacionales, esta delimitación permite profundizar en la especificidad costarricense, pero también implica que los resultados no pueden generalizarse automáticamente a otros contextos.

En el plano temático, la investigación se concentra en la dimensión cultural y en la cooperación internacional en materia de drogas, no se abordan en profundidad aspectos económicos, políticos o militares del narcotráfico, aunque se reconocen que estos forman parte del fenómeno, la decisión de limitar el análisis responde a la necesidad de mantener un enfoque claro y coherente con los objetivos planteados.

En el plano analítico, el estudio no pretende ofrecer soluciones operativas inmediatas, su objetivo es proporcionar un marco interpretativo para comprender las dinámicas culturales y de cooperación, además se reconoce que la narcocultura es un fenómeno complejo, en constante evolución y que cualquier intento de explicación debe ser necesariamente parcial y contextual, consecuentemente, la investigación se limita a la construcción de escenarios posibles y a la identificación de tendencias, sin pretender ofrecer recetas definitivas.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

En esta sección se realiza un recorrido por los principales enfoques teóricos que sustentan la investigación, con el fin de explicar cómo la narcocultura se configura como un fenómeno transnacional que impacta la política exterior y la seguridad regional. El marco teórico se organiza en tres apartados: Marco Histórico, Marco Conceptual y Marco de Referencia, cada uno con funciones específicas que integran el factor social individual, el espectro transnacional y la dimensión de política exterior bajo una perspectiva constructivista.

Se presentan los antecedentes vinculados con el desarrollo del narcotráfico y sus expresiones culturales en America Latina. Astorga (2005) demuestra cómo el narcotráfico dejó de ser únicamente un negocio ilícito para convertirse en un fenómeno social que permea la cultura y la política mexicana, en Colombia, las organizaciones criminales lograron insertarse en el tejido social mediante símbolos y prácticas culturales, lo que obligó a las políticas públicas a enfrentar no solo la violencia física, sino también las narrativas que legitiman al narcotráfico (Viera Filho, 2004). Estos antecedentes permiten comprender que la narcocultura es parte de una dinámica regional que condiciona la cooperación internacional en materia de seguridad y salud pública, al generar impactos en la economía negra y en la legitimidad estatal.

En el marco conceptual de esta investigación se señalan tres nociones que orientan el análisis: el habitus, entendido como el conjunto de disposiciones internalizadas que legitiman prácticas culturales y permiten interpretar la narcocultura en su dimensión simbólica (Bourdieu,1997); la salud, como ámbito afectado por el narcotráfico tanto en el consumo como en la violencia asociada, con implicaciones sociales y políticas, asimismo, la economía negra que explica la inserción de estas dinámicas en circuitos informales y su impacto en la movilidad y legitimidad social, estos conceptos se mencionan como referentes teóricos que guiaran la discusión en los apartados posteriores.

A partir de este marco se permite articular lo político con lo social, iniciando desde el factor individual (identidad, legitimidad cultural), pasando por el espectro transnacional (circulación de símbolos y narrativas), hasta llegar a la política exterior (cooperación bilateral y seguridad regional).

También, se examinan estudios y aportes académicos recientes que evidencian, a saber las narrativas culturales vinculadas con el narcotráfico trascienden lo criminal y se insertan en el tejido social y político. Bravo, Fierro (2025) señala que las expresiones culturales deben ser reconocidas como actores simbólicos dentro de la diplomacia contemporánea. Viera Filho (2024) afirma que la eficiencia de las políticas públicas depende de su capacidad para enfrentar no solo la violencia física, sino también las narrativas culturales que sostienen al narcotráfico. Desde el enfoque constructivista, se reconoce que las relaciones internacionales no se explican por intereses materiales, sino también por factores culturales y simbólicos que configuran la identidad de los Estados.

2.2 Marco Histórico

2.2.1 Mini cronología 2021-2025

Antes de analizar el periodo 2021-2025, resulta indispensable revisar los antecedentes históricos que marcaron la evolución de la narcocultura en América Latina y su impacto en la imagen y diplomacia de los Estados. En este caso, México y Colombia constituyen referentes centrales, pues en ambos casos el narcotráfico trascendió lo criminal para convertirse en un fenómeno cultural y político que condicionó la legitimidad estatal y proyecto narrativas internacionales asociadas con violencia y corrupción (Astorga (2025); Thoumi (2003); García-Peña (2016)).

Costa Rica, aunque no productor, se consolidó como país de tránsito y comenzó a experimentar la emergencia de expresiones culturales vinculadas al narcotráfico, esto tensionó su imagen tradicional de nación pacífica y democrática, diversos autores han abordado estas categorías desde perspectivas complementarias (Muñoz Guillén, 1997; Molina, 2018; Viera Filho, 2024).

Este recorrido histórico permite comprender que la narcocultura no es un fenómeno aislado, sino parte de una dinámica transnacional que afecta tanto la política interna como la proyección internacional de los Estados. Desde un enfoque constructivista, se reconoce que las narrativas culturales asociadas con el narcotráfico configuran identidades colectivas y disputas simbólicas que condicionan la política exterior y la cooperación bilateral en materia de seguridad (Bourdieu, 1997; Vázquez Gutiérrez, 2022).

El caso colombiano constituye un referente indispensable para comprender la magnitud del fenómeno en Costa Rica. La consolidación de una “economía negra” que penetró las estructuras sociales y políticas en Colombia (Thoumi, 2003, p.112) demuestra cómo el narcotráfico trasciende lo criminal y se convierte en un factor cultural y diplomático.

Ahora bien, reconocer este antecedente permite advertir que, aunque Costa Rica se encuentra en una fase más incipiente, las dinámicas culturales vinculadas con el narcotráfico ya comienzan a tensionar su imagen internacional y su cooperación bilateral con Estados Unidos. En este sentido, conocer el contexto colombiano no solo aporta perspectiva histórica, sino que ofrece lecciones para anticipar los riesgos enfrentados por la política exterior costarricense frente a la expansión de la narcocultura.

Este recorrido histórico permite comprender que la narcocultura no solo se consolidó como un fenómeno cultural en Colombia, además generó un marco de referencia para analizar su expansión en otros países de la región. Al mismo tiempo, la legitimación del narcotraficante como figura de movilidad social y resistencia frente al orden establecido se convirtió en un patrón que, con variaciones, comienza a replicarse en contextos tales como el costarricense. De esta manera, el análisis del caso colombiano no se limita a su especificidad nacional, sino que ofrece claves interpretativas para entender cómo las narrativas del narcotráfico tensionan la legitimidad estatal y proyectarse en la arena internacional.

Por otra parte, la narcocultura se consolidó como un elemento central de la vida cotidiana, legitimando al narcotraficante a manera de figura de movilidad social y resistencia frente al orden establecido. Rincón (2013) describe cómo “las narrativas del narcotráfico se insertaron en la cultura popular a través de música, televisión y símbolos urbanos, generando un imaginario colectivo el cual normalizó la violencia y la ostentación” (Rincón, 2013, p.67). Posteriormente, Rincón (2020) profundiza en la relación entre cultura del narcotráfico y legitimidad estatal, pues estas prácticas culturales no solo reflejaban la presencia del crimen organizado, también erosionan la confianza en las instituciones democráticas.

El Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, se caracterizó por una estrategia de violencia abierta y espectacularidad, Astorga (2005) señala que “la figura del capo se convirtió en un mito popular, exaltado por símbolos como zoológicos privados, mansiones extravagantes y actos de desafío directo al Estado” (Astorga, 2005, p.89). García-Peña (2016) complementa que esta espectacularidad reforzó la percepción internacional de Colombia como un país dominado por la violencia, debilitando su diplomacia y legitimidad estatal.

Por su parte, el Cartel de Cali adoptó una estrategia más discreta y empresarial, Thouni (2003) y Garzón (2018) destacan que este grupo se vinculó con sectores económicos y políticos, generando una narcocultura menos ostentosa, pero igualmente corrosiva. La auto definición como “Los Caballeros de Cali” buscaba proyectar una imagen de sofisticación y legitimidad social, sin embargo, como advierte Garzón (2018), “la corrupción institucional derivada de estas prácticas debilitó la gobernabilidad y proyectó al país como un Estado capturado por el crimen organizado” (Garzón, 2018, p134).

El contraste entre Medellín y Cali revela dos modalidades complementarias: la violencia espectacular y visible frente a la infiltración institucional y económica. García-Peña (2016) enfatiza que “esta doble narrativa no solo afectó la cultura política interna, sino que consolidó una percepción externa de Colombia como nación vulnerable y dependiente de cooperación internacional” (García-Peña, 2016, 102).

Estos estilos revelan dos formas complementarias de narcocultura; la primera, sustentada en la violencia espectacular que erosionó la imagen internacional de Colombia al asociarla con un Estado en crisis; la segunda, en la infiltración institucional que proyectó al país como un Estado capturado por el crimen organizado en sus estructuras más formales.

García-Peña (2016) enfatiza que esta doble narrativa no solo afectó la cultura política interna, sino que también consolidó una percepción externa de Colombia como nación vulnerable y dependiente de cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico.

Así mismo, la coexistencia de Medellín y Cali muestra que la narcocultura en Colombia no fue homogénea, sino una disputa simbólica entre violencia espectacular y legitimación silenciosa, desde el enfoque constructivista, estas narrativas condicionaron la identidad del Estado colombiano y su diplomacia.

En consecuencia, la narrativa de los “Caballeros de Cali” no debe de interpretarse como un intento exitoso de legitimación social, sino como una estrategia que profundizó la penetración del crimen organizado en la política y la economía, reforzando la percepción crítica de Colombia como un Estado cuya diplomacia se encontraba condicionada por la necesidad de gestionar una crisis estructural derivada de la narcocultura.

La narcocultura colombiana puede comprenderse como una narrativa en donde lo extraordinario se volvió parte de lo cotidiano, evocando la lógica del realismo mágico latinoamericano, “la cultura del narcotráfico en Colombia no solo se expresa en la violencia, sino en la capacidad de convertir lo inverosímil en parte de la vida diaria” (Rincón, 2020, p.45). Este fenómeno se manifestó tanto en la ostentación visible del Cartel de Medellín como la sofisticación discreta del Cartel de Cali, mostrando dos formas complementarias de cómo lo fantástico se normalizó en la vida política y social.

El Cartel de Medellín construyó una narcocultura llena de violencia y espectacularidad. Astorga (2005) describe cómo la figura del capo se convirtió en un mito popular, exaltando por símbolos como zoológicos privados, mansiones extravagantes y actos de desafío directo al Estado. Estos elementos, que en cualquier otro contexto parecerían irreales, se integraron en la vida cotidiana, proyectando internacionalmente la imagen de un país donde lo imposible se volvía real.

El Cartel de Cali, autodenominado “Los Caballeros de Cali”, buscó legitimarse mediante una narrativa de respetabilidad empresarial y discreción política. Thoumi (2003) advierte que esta modalidad configuró una “economía negra” que penetró en los círculos formales de poder, mientras Garzon (2018) subraya que la corrupción institucional derivada

de estas prácticas debilitó la legitimidad estatal. La imagen de los “caballeros” reforzó la percepción de un Estado capturado por el crimen organizado, en donde lo fantástico no era la violencia espectacular, sino la capacidad de mafias de presentarse como actores legítimos dentro de la política y la economía.

La narcocultura se evidencia en la manera en que lo extraordinario se normalizó; capos que construían zoológicos con animales exóticos, aviones cargados de dinero, barrios enteros financiados por el narcotráfico y organizaciones criminales autoproclamadas benefactores sociales, “el poder simbólico de la narcocultura tensiona la identidad de los Estados latinoamericanos, proyectando internacionalmente una imagen de fragilidad y crisis institucional” (Vázquez Gutiérrez, 2022, p.52). En este sentido, la diplomacia, al situar al país en el imaginario global como un territorio en donde lo irreal se volvía parte de la política exterior.

La integración del realismo mágico en la narcocultura colombiana revela que tanto la violencia espectacular de Medellín como la infiltración silenciosa de Cali compartieron una misma lógica cultural; transformar lo imposible en cotidiano y erosionar la legitimidad estatal. Esta narrativa, que combina lo fantástico con lo real, proyectó internacionalmente una imagen de Colombia como un Estado atrapado en una disputa simbólica entre violencia, corrupción y legitimación cultural del narcotráfico. Así pues, la relación entre realismo mágico y narcocultura constituye un concepto que será abordado con mayor profundidad en apartados posteriores de la investigación, a fin de explicar cómo estas narrativas culturales condicionan la legitimidad estatal y la cooperación internacional.

En la década de 1980, Pablo Escobar consolidó el Cartel de Medellín, llegando a controlar gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, “el narcotráfico en Colombia creó una economía negra que penetró las instituciones y condicionó la legitimidad estatal” (Thoumi, 2003, p.112). Escobar construyó un culto a su figura mediante violencia espectacular y gestos populistas: financió barrios, canchas y viviendas, es decir le permitió ser visto como benefactor social.

Rincón describe que “el capo se convirtió en un mito urbano, legitimado por narrativas culturales que lo mostraban como héroe popular frente a un Estado ausente” (Rincón, 2013, p.67). Su ingreso a la política en 1982 como congresista suplente evidenció la

capacidad del narcotráfico para infiltrarse en la democracia, “la ostentación y el desafío directo al Estado fueron parte de la construcción simbólica de Escobar como figura de poder” (Astorga, 2005, p89).

Ahora bien, la desarticulación del Cartel de Medellín culminó con la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, tras una operación conjunta entre fuerzas colombianas y agencias estadounidenses, “la persecución de Escobar se convirtió en un símbolo de la cooperación internacional, mostrando que la violencia del narcotráfico había trascendido las fronteras nacionales” (García- Peña, 2016, p.104).

Por consiguiente, la DEA y otras agencias estadounidenses jugaron un papel en el rastreo tecnológico y financiero del cartel, “la presión de Washington fue determinante para que el Estado colombiano intensificara sus operaciones, en un contexto donde la legitimidad interna estaba debilitada” (Garzón, 2018, p.139). La participación de Estados Unidos no respondía únicamente a la lucha contra el crimen, sino también a intereses estratégicos; asegurar la estabilidad regional y proteger su propio territorio del flujo masivo de cocaína.

La muerte de Escobar no significó el fin del narcotráfico, sino la transición hacia nuevas formas de criminalidad, “la desaparición del Cartel de Medellín no eliminó la economía negra, sino que fragmentó el poder criminal y lo dispersó en estructuras más flexibles” (Thoumi, 2003, p.120). Esta fragmentación reforzó la narrativa de Colombia como un Estado vulnerable, incapaz de contener por sí mismo el fenómeno.

Por lo tanto, la diplomacia colombiana quedó marcada por la cooperación en seguridad con Estados Unidos, “el poder simbólico de la narcocultura tensiona la identidad de los Estados latinoamericanos, proyectando internacionalmente una imagen de fragilidad y crisis institucional” (Vázquez Gutierrez, 2022, p.52). En el caso colombiano, la caída de Escobar consolidó la percepción de que la soberanía estaba condicionada por la intervención externa, esto afectó su legitimidad en el sistema internacional.

Del culto a Escobar como héroe urbano; benefactor de barrios populares y mito cultural evidencia cómo la cultura del narco trascendió lo criminal para convertirse en parte de la identidad latinoamericana contemporánea, “la figura del capo se legitimó en sectores populares al llenar vacíos de poder dejados por un Estado incapaz de proveer bienestar”

(García-Peña, 2016, p.101). Estos vacíos de poder, producto de la debilidad institucional y la incapacidad estatal para garantizar seguridad y servicios básicos, fueron ocupados por Escobar mediante prácticas clientelares; construcción de viviendas, financiamientos de canchas deportivas y asistencia directa a comunidades marginadas.

En este sentido, la narcocultura se consolidó como respuesta simbólica a la ausencia estatal, legitimando al capo como actor social, “la narcocultura en Colombia convirtió lo inverosímil en parte de la vida diaria normalizando la figura del narcotraficante como proveedor de orden y bienestar” (Rincón, 2020, p.45). La intervención estadounidense en la persecución de Escobar añadió una dimensión internacional a esta narrativa, “la presión de Washington fue determinante para intensificar las operaciones contra Escobar, en un contexto donde la legitimidad interna estaba debilitada” (Garzón, 2018, p.139).

La imagen de Colombia se proyectó de manera dual; por un lado, como epicentro de violencia y corrupción, incapaz de contener por sí mismo el poder del narcotráfico; por otro lado, como aliado estratégico en la guerra contra las drogas, dependiente de la cooperación externa para sostener su soberanía, “el poder simbólico del narcotráfico tensiona la identidad de los Estados latinoamericanos, proyectando internacionalmente una imagen de fragilidad y crisis institucional” (Vázquez Gutierrez, 2022, p.52).

Por otra parte, la trayectoria de los carteles en Colombia muestra que la narcocultura no solo transformó la vida cotidiana y la legitimidad estatal, sino que también condicionó la política exterior al convertir al país en un escenario de cooperación internacional en seguridad. Este antecedente resulta clave para Costa Rica porque evidencia cómo las narrativas culturales del narcotráfico pueden trascender lo interno y proyectarse en la arena diplomática, en el caso costarricense, aunque el fenómeno se encuentra en una fase incipiente, la experiencia colombiana advierte que la expansión de estas dinámicas culturales podría tensionar la imagen de estabilidad democrática y redefinir la relación bilateral con Estados Unidos.

Garzón (2018) advierte que “la corrupción derivada de las prácticas del Cartel de Cali debilitó la gobernabilidad y proyectó al país como un Estado capturado por el crimen organizado” (Garzón, 2018, p.134). A diferencia de Medellín, Cali evitó la violencia, pero su

capacidad de penetrar instituciones políticas y económicas mostró que el narcotráfico podía operar bajo la fachada de legitimidad.

La desarticulación del Cartel de Cali entre 1995 y 1996 no puede entenderse sin la influencia directa de la DEA y la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, “la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, fue determinante para la captura de los líderes del Cartel de Cali” (Garzón, 2018, p.141). Esta operación mostró que la infiltración silenciosa y empresarial del cartel era tan peligrosa como la violencia espectacular de Medellín, pues había penetrado las estructuras políticas y económicas del Estado.

El Cartel de Cali ocupó vacíos institucionales mediante prácticas de corrupción y control económico, “los capos de Cali lograron legitimarse como empresarios y benefactores, insertándose en la vida social y política de la ciudad” (Salazar, 2001, p.54). Esta legitimación se sustentó en la incapacidad del Estado para garantizar bienestar y seguridad, esto permitió que actores criminales se presentaran como proveedores de orden.

La caída tuvo repercusiones directas en la diplomacia colombiana, “la cooperación antidrogas con Estados Unidos redefinió la política exterior colombiana, subordinándola a la agenda de seguridad norteamericana” (Isacson, 2005, p.62), en este sentido, la imagen de Colombia se proyectó como un país incapaz de contener por sí mismo el poder del narcotráfico, pero también como aliado estratégico en la guerra contra las drogas.

En México, la narcocultura emergió con fuerza a partir de los años ochenta y noventa, vinculada al Cartel de Guadalajara y posteriormente a los carteles fragmentados que surgieron tras su caída, “los grupos criminales se convirtieron en actores de gobernanza local, imponiendo normas y ofreciendo protección en territorios donde el Estado era débil o inexistente” (Valdés Castellanos, 2013, p.119).

La narcocultura mexicana se expresó principalmente en los corridos y en la estética del narco, configurando un repertorio cultural que trascendió las fronteras nacionales, los narcocorridos, como señala Hernández (2010, p.56), funcionan como crónicas populares que legitiman al traficante como figura de movilidad social y resistencia frente al Estado. Sin embargo, lo distintivo del caso mexicano es que estas narrativas no se limitaron al ámbito

interno, sino que se proyectaron internacionalmente a través de la música, la televisión y la estética ostentosa vinculada al poder narco.

Esta capacidad de exportar símbolos culturales convirtió a México en un referente regional, cuyas expresiones comenzaron a replicarse en Centroamérica y, más recientemente en Costa Rica, de este modo, el análisis mexicano no solo revela la legitimación del capo como actor social, sino también la manera en que la narcocultura se consolidó como un fenómeno transnacional la cual condiciona la percepción internacional y la cooperación en seguridad.

La caída de Pablo Escobar en 1993 y la desarticulación del Cartel de Cali en 1995-1996 tuvieron un efecto directo en el auge de la narcocultura mexicana. Snyder y Durán-Martínez (2009) explican que “la presión internacional que debilitó a los carteles colombianos abrió espacio para que organizaciones mexicanas asumieran el control de las rutas hacia Estados Unidos” (Snyder y Durán-Martínez, 2009, p.254).

Este desplazamiento del poder criminal hacia México no solo transformó la dinámica del narcotráfico, también permitió que la narcocultura mexicana se consolidara como referente regional, “La fragmentación del narcotráfico colombiano fortaleció a los carteles mexicanos, que desarrollaron sus propias narrativas culturales y símbolos de legitimación” (Bailey, 2014, p.84).

La narcocultura mexicana no nació en un vacío, sino en un contexto en donde la caída de los capos colombianos generó reacomodo del poder criminal en América Latina, “la diplomacia antidrogas se reorientó hacia México, proyectando internacionalmente la imagen de un Estado atrapado entre la violencia interna y la dependencia de cooperación externa” (Toro, 1999, p.142).

El auge de la narcocultura en México se consolidó a partir de los años noventa, cuando los carteles mexicanos asumieron un papel central en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, la caída de Escobar y la desarticulación del Cartel de Cali en 1995-1996 generaron un reacomodo del poder criminal en América Latina, permitiendo que México se convirtiera en el nuevo epicentro del narcotráfico.

Este proceso no solo transformó la dinámica del narcotráfico, sino que también dio origen a una narrativa cultural propia, “los narcocorridos funcionan como crónicas populares que exaltan la figura del narcotraficante, legitimándolo como héroe social y actor de movilidad frente a un Estado ausente” (Hernandez, 2010, p.56), la música, la estética del narco y la violencia espectacular se convirtieron en símbolos culturales que reforzaron la legitimación social de los capos.

Por otra parte, la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos se intensificó tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y la fragmentación del Cartel de Guadalajara, “la política antidrogas subordinó la agenda mexicana de seguridad a los intereses estratégicos de Washington, debilitando la percepción de autonomía nacional” (Bailey, 2014, p.87).

La captura de los líderes del Cartel de Guadalajara; Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero provocó la separación del narcotráfico mexicano en múltiples organizaciones regionales, “la desarticulación del Cartel de Guadalajara generó un proceso de descentralización criminal que multiplico la violencia y diversifico las rutas hacia Estados Unidos” (Snyder y Durán-Martínez, 2009, p.254). Esta fragmentación fue el punto de partida para el auge de carteles como Sinaloa, Tijuana y Juárez, que desarrollaron narrativas culturales propias.

La expansión de la narcocultura mexicana tras la caída de los capos colombianos tuvo repercusiones en Centroamérica, especialmente en Costa Rica, “la fragmentación del narcotráfico colombiano fortaleció a los carteles mexicanos, que extendieron sus redes hacia Centroamérica, generando dinámicas culturales y criminales transnacionales” (Becerra, 2023, p.211). Este proceso no solo convirtió a Costa Rica en un espacio de Tránsito y almacenamiento, sino que también abrió la puerta a la penetración de narrativas culturales del narco en la vida cotidiana y en la percepción internacional del país.

La legitimación simbólica que en México se expresó a través de corridos, estética ostentosa y narrativas populares comenzó a replicarse en el contexto costarricense, tensionando su imagen histórica de estabilidad democrática, en consecuencia, la cooperación bilateral con Estados Unidos se intensificó, reforzando la posición de Costa Rica como aliado estratégico en la lucha contra las drogas, pero también evidenciando su vulnerabilidad frente

a dinámicas transnacionales que trascienden lo meramente criminal y se insertan en el plano cultural y diplomático.

Tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en Guadalajara en febrero de 1985, Caro Quintero se convirtió en uno de los hombres más buscados por las autoridades mexi1995. p. estadounidenses, su fuga hacia Centroamérica culminó con su captura en Alajuela, Costa Rica, en abril de ese mismo año, “la detención de Caro Quintero en Costa Rica evidenció la capacidad de los carteles mexicanos para operar transnacionalmente y la vulnerabilidad de los Estados centroamericanos frente al crimen organizado” (Astorga,1995. p.74).

Según lo anterior, la operación fue posible gracias a la presión diplomática de Estados Unidos, que exigió resultados inmediatos tras el asesinato de Camarena, “la captura de Caro Quintero fue un hito en la cooperación bilateral, mostrando que Washington podía extender su influencia más allá de Mexico” (Shirk y Wallman, 2015, p.36).

La presencia de Caro Quintero en Costa Rica tuvo un fuerte impacto en la imagen internacional del país, paso de tener una imagen de país pacífico y estable a quedar asociada con la narrativa de refugio para criminales transnacionales, “la captura de Caro Quintero en Costa Rica reveló que el país, pese a su institucionalidad democrática, podía ser utilizado como espacio de tránsito y ocultamiento por el narcotráfico” (Becerra, 2023, p.213).

Este episodio tensionó la política exterior costarricense, pues mostró la necesidad de reforzar la cooperación en seguridad con Estados Unidos y evidencio la fragilidad del país frente a dinámicas criminales regionales, la diplomacia costarricense se vio obligada a reafirmar su compromiso con la lucha antidrogas para proteger su imagen internacional.

Esta captura fue resultado directo de la presión de Estados Unidos, la política antidrogas de Estados Unidos convirtió la persecución de Caro Quintero en un símbolo de su capacidad para condicionar la agenda de seguridad en America Latina” (Tokatlian, 1999, p.81).

La DEA jugó un papel central en la operación, coordinando con autoridades costarricenses y mexicanas, este hecho reforzó la percepción de que la soberanía de los Estados latinoamericanos estaba subordinada a la agenda de seguridad de Washington, “la

guerra contra las drogas transformo la diplomacia regional, colocando a países como Costa Rica en una narrativa de dependencia y vulnerabilidad” (Bagley, 2012, p.47).

Tal hecho no solo tuvo implicaciones políticas, también culturales, en México, la figura de Caro Quintero se convirtió en parte de la narcocultura, exaltada en corridos y relatos populares como símbolo de poder y resistencia. En Costa Rica, en cambio, el episodio reforzó la idea de que el país podía ser arrastrado a dinámicas criminales transnacionales, afectando su imagen de “democracia pacífica”.

Este contraste muestra cómo la narcocultura mexicana, basada en narrativas musicales y estéticas, se proyectó hacia Centroamérica, mientras tanto la colombiana se había centrado en el mito urbano de Escobar. Ambas narrativas convergieron en Costa Rica como un espacio de tránsito y cooperación, condicionando su política exterior y su identidad internacional, “los repertorios culturales del narco en México sintetizan la memoria colectiva y legitiman la incorporación al mundo criminal como forma de resistencia y movilidad social” (Valenzuela Arce, 2014, p.63).

En Colombia la legitimación se construyó en torno a la figura del capo benefactor urbano. En el caso costarricense, Viera Filho (2024) advierte que “la expansión de las redes mexicanas hacia Centroamérica transformó a Costa Rica en un territorio de tránsito y almacenamiento, afectando su imagen como nación pacífica y democrática” (Viera Filho, 2024, p.212). De esta manera, la convergencia de ambas narrativas en Costa Rica no solo tensionó su identidad internacional, incluso subordinó su política exterior a la cooperación en seguridad con Estados Unidos, proyectando al país como vulnerable frente al crimen organizado transnacional.

2.2.2 Relación Costa Rica – Estados Unidos de América: evolución de la cooperación en seguridad e hitos previos que condicionan 2021-2025

La cooperación en seguridad entre Costa Rica y Estados Unidos se ha configurado históricamente a partir de episodios que marcaron la vulnerabilidad del país frente al narcotráfico y condicionaron su política exterior, la caída de Caro Quintero y su captura, evidencio que Costa Rica, pese a su institucionalidad democrática, podía ser utilizada como refugio por actores criminales transnacionales, “la detención de Caro Quintero en Costa Rica

reveló la capacidad de los carteles mexicanos para operar más allá de sus fronteras y la fragilidad de los Estados centroamericanos frente al crimen organizado”(Astorga,1995,p.74).

A partir de este episodio, la cooperación bilateral se intensificó en áreas de interdicción marítima, patrullajes conjuntos y asistencia técnica, “la política antidrogas de Estados Unidos convirtió países como Costa Rica en escenarios estratégicos de cooperación, subordinando su agenda de seguridad a los intereses hemisféricos de Washington” (Tokatlian,1999, p.83). Durante los años noventa y dos mil, Costa Rica firmó convenios que permitieron la presencia de embarcaciones estadounidenses en aguas territoriales y el fortalecimiento de la Policía de Control de Drogas, consolidando su papel como aliado estratégico en la región.

Los informes de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime) (UNODC) (2021-2024) confirman que Costa Rica se consolidó como país de tránsito para la cocaína, esto condicionó su imagen internacional y reforzó la necesidad de cooperación bilateral, “la creciente utilización de Costa Rica como punto logístico del narcotráfico internacional ha tensionado su tradicional imagen de democracia pacífica, obligando al Estado a redefinir su política exterior en clave de seguridad”(Pérez García, 2022,p.134), la expansión de las redes criminales hacia Centroamérica transformó a Costa Rica en un territorio de tránsito y almacenamiento, proyectando internacionalmente una narrativa de vulnerabilidad y dependencia de la cooperación con Estados Unidos.

La cooperación en seguridad entre Costa Rica y Estados Unidos durante el periodo 2021-2025 se estructuró en torno a tres ejes principales; interdicción marítima y aérea, fortalecimiento institucional y prevención social, estos pilares respondieron a la creciente presión internacional por el papel de Costa Rica como país de tránsito de cocaína y a la necesidad de contener la influencia cultural del narcotráfico en comunidades vulnerables.

A su vez, las operaciones conjuntas en el Caribe y el Pacífico se intensificaron con patrullajes coordinados y el uso de tecnología de vigilancia, el Informe Mundial sobre Drogas de la UNODC (2024) confirma que “Costa Rica se consolidó como un punto estratégico de tránsito hacia Norteamérica, por lo tanto reforzó la cooperación bilateral en interdicción marítima y aérea” (p.211). Estas acciones incluyeron el despliegue de guardacostas

estadounidenses en coordinación con la Fuerza Pública costarricense, consolidando la presencia de Washington en aguas nacionales.

La cooperación bilateral se tradujo en programas de capacitación policial y judicial, así como en financiamiento para infraestructura de seguridad, “la política antidrogas subordinó la agenda de seguridad de los países centroamericanos a los intereses estratégicos de Estados Unidos” (Bailey, 2014, p.87). En Costa Rica, esto se reflejó en la creación de unidades especializadas contra el crimen organizado, en reformas legales para agilizar extradiciones y el fortalecimiento de la Policía de Control de Drogas.

La cooperación incluyó iniciativas orientadas a comunidades vulnerables, buscando reducir la influencia de la narcocultura en jóvenes y poblaciones periféricas, “la creciente utilización de Costa Rica como punto logístico del narcotráfico internacional ha tensionado su imagen de democracia pacífica, obligando al Estado a redefinir su política exterior en clave de seguridad” (Pérez García, 2022, p.134). En este marco, se desarrollaron campañas educativas, proyectos comunitarios y programas de reinserción social que ofrecieron alternativas económicas y culturales frente al atractivo simbólico del narco.

En consecuencia, la cooperación en seguridad entre Costa Rica y Estados Unidos durante 2021-2025 no puede analizarse únicamente desde los resultados operativos, los programas de interdicción, el fortalecimiento institucional y la prevención social respondieron también a la necesidad de contener las narrativas culturales las cuales acompañan al narcotráfico y que comienzan a permear la vida cotidiana costarricense.

Este componente simbólico explica porque la cooperación bilateral se proyecta como un mecanismo de defensa de la imagen internacional del país; Costa Rica aparece ante el mundo como un Estado pacífico, pero vulnerable, cuya legitimidad depende en gran medida de su capacidad para enfrentar no solo el crimen organizado, sino también la expansión cultural de la narcocultura.

2.2.3 Comparación histórica breve: México y Colombia; trayectorias y lecciones relevantes para Costa Rica

El estudio comparativo de México y Colombia permite identificar cómo la narcocultura se consolidó como fenómeno social y político, ofreciendo lecciones relevantes para Costa Rica en el periodo 2021-2025.

En México, la narcocultura se expresó a través de corridos, estéticas visuales y símbolos que legitimaron la figura del capo como héroe popular, “los corridos del narcotráfico constituyen un repertorio cultural que normaliza la violencia y la convierte en aspiración de movilidad social” (Hernandez,2010, p.56). Desde una perspectiva constructivista, estas prácticas pueden entenderse como parte del habitus descrito por Bourdieu (1997), en el cual los individuos interiorizan esquemas culturales que legitiman la incorporación al mundo criminal como forma de resistencia y ascenso social.

En Colombia, la trayectoria estuvo marcada por la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria y el mito del benefactor urbano “el Robin Hood paisa”, “la economía negra del narcotráfico en Colombia creó un sistema paralelo de legitimidad política y social que erosiona la autoridad estatal” (Palacios,2006, p.112). El simbolismo religioso, expresado en la veneración de Escobar como protector de comunidades marginales, reforzó la aceptación social del narcotráfico y tensionó la relación entre Estado y sociedad.

Ambos casos muestran cómo la narcocultura trasciende lo criminal para insertarse en dinámicas culturales y políticas, Estados Unidos desempeñó un papel central en estas trayectorias, interviniendo en aspectos de seguridad bajo la lógica de sus propios intereses estratégicos, “la política antidrogas de Estados Unidos en America Latina ha respondido más a objetos de control político que a la reducción efectiva del narcotráfico” (Youngers y Rosin,2005, p.23).

En síntesis, mientras en México la narcocultura se consolidó a través de narrativas musicales y estéticas que legitimaron al capo como héroe popular, en Colombia se expresó mediante el simbolismo religioso y la construcción de un sistema paralelo de legitimidad social, ambos casos muestran que el narcotráfico trasciende lo criminal para convertirse en un fenómeno cultural y político condicionante de la política exterior.

Para Costa Rica, estas trayectorias ofrecen lecciones claras; reconocer que la narcocultura puede erosionar la confianza en las instituciones, tensionar la imagen internacional del país y subordinar su agenda de seguridad a intereses externos si no se atiende de manera integral.

La comparación histórica entre México y Colombia advierte que la narcocultura, más allá de sus expresiones locales, se ha configurado como un fenómeno transnacional que condiciona la legitimidad estatal y la política exterior en América Latina, “las dinámicas culturales ligadas al narcotráfico deben entenderse como parte de una empresa transnacional que reconfigura las condiciones de vida y la percepción internacional de los Estados” (Becerra, 2023, p.34). En este sentido, Costa Rica enfrenta el reto de no repetir los patrones observados en ambos países; la legitimación simbólica del capo como héroe social en México y la construcción de sistemas paralelos de poder en Colombia.

La experiencia comparada muestra que la narcocultura no solo erosiona la seguridad interna, sino que proyecta internacionalmente una narrativa de fragilidad institucional, obligando a países como Costa Rica a redefinir su política exterior en clave de seguridad y cooperación.

2.3 Marco Conceptual

2.3.1 Definiciones de narcocultura; fenómeno transnacional; cooperación internacional; imagen del Estado

La narcocultura, como categoría analítica, se ha consolidado en la literatura académica como un fenómeno que trasciende lo estrictamente criminal para convertirse en un sistema cultural y político, no se trata únicamente de prácticas ilegales, sino de un entramado simbólico que legitima la violencia y la convierte en parte de la vida cotidiana,” la narcocultura es una estética social que convierte la ilegalidad en aspiración y la violencia en espectáculo”(Rincón, 2019,p.67), esto evidencia su capacidad de moldear identidades colectivas y narrativas sociales.

Desde el enfoque constructivista, la narcocultura puede entenderse como un constructo transnacional que circula entre países y se adapta a contextos locales. Bourdieu (1997) aporta el concepto de habitus, útil para explicar cómo los individuos interiorizan esquemas culturales que legitiman la incorporación al mundo criminal como forma de movilidad social y resistencia frente a la exclusión. Este enfoque permite la comprensión de que la narcocultura no es un fenómeno aislado, sino un constructo social transnacional que circula entre países y se adapta a contextos locales, que no es un fenómeno estático, sino dinámico y relacional, capaz de resignarse en distintos escenarios.

La narcocultura tiene diferentes formas de representación, sin embargo sus simbolismos en México y Colombia son distintos, pero producen el mismo daño a la sociedad, “la legitimidad simbólica del narcotráfico se construye tanto en la economía ilegal como en la capacidad de penetrar instituciones estatales y generar reconocimiento social (Garay Salamanca, 2019, p.88). Estas trayectorias muestran que la narcocultura no solo se vincula con el crimen organizado, sino también con la economía negra y con formas alternativas de legitimidad política.

La dimensión transnacional del fenómeno se evidencia en la circulación de narrativas, símbolos y prácticas que atraviesan fronteras, “la narcocultura se ha convertido en un lenguaje compartido en America Latina, donde las expresiones culturales del narco viajan y se reasignan en distintos países” (Dávila, 2021, p142), Costa Rica como país de tránsito, se ve expuesto a la influencia de estas narrativas que tensionan su imagen internacional de democracia pacífica.

La narcocultura, como categoría analítica, se ha consolidado en la literatura académica como un fenómeno que trasciende lo estrictamente criminal para convertirse en un sistema cultural y político. No se trata únicamente de prácticas ilegales, sino de entramado simbólico que legitima la violencia y la convierte en parte de la vida cotidiana, “la narcocultura es una estética social que convierte la ilegalidad en aspiración y la violencia en espectáculo” (Rincón, 2019, p.67), por lo tanto evidencia su capacidad de moldear identidades colectivas y narrativas sociales.

En México, las expresiones musicales y religiosas han reforzado la legitimidad simbólica del narcotráfico, mientras que en Colombia la economía negra vinculaba al crimen organizado generó sistemas paralelos de poder y legitimidad, “la legitimidad simbólica del narcotráfico se construye tanto en la economía ilegal como en la capacidad de penetrar instituciones estatales y generar reconocimiento social”(Garay Salamanca, 2019, p.88), estas trayectorias muestran que la narcocultura se convierte en un fenómeno transnacional que condiciona tanto la seguridad como la política exterior de los Estados.

El efecto simbólico de la narcocultura sobre la imagen del Estado es decisivo, “la imagen internacional de los Estados pequeños se ve tensionada cuando fenómenos transnacionales como el narcotráfico penetran sus instituciones y obligan a redefinir su

política exterior” (Vargas,2020, p.101). Así, Costa Rica enfrenta el reto de mantener su reputación como democracia estable y pacífica, mientras la narrativa internacional lo proyecta como Estado vulnerable y dependiente de la cooperación externa para enfrentar el crimen organizado.

La narcocultura en America Latina se manifiesta de manera diferenciada en México y Colombia, aunque comparte elementos comunes como la legitimación simbólica del crimen organizado y la construcción de imaginarios sociales que trascienden lo estrictamente criminal.

En México, la narcocultura se ha expresado a través de símbolos religiosos como Jesús Malverde y el culto a la Santa Muerte, los cuales funcionan como referentes de protección y legitimidad espiritual, “la narcocultura mexicana se articula en torno a símbolos religiosos y populares que otorgan sentido y legitimidad a la vida criminal” (Valenzuela Arce,2014, p.92), estos cultos refuerzan la aceptación social del narco, integrando lo religioso en la vida cotidiana de comunidades vulnerables.

Los narcocorridos constituyen otra manifestación central, narrando hazañas de capos y normalizando la violencia como aspiración social, “los corridos del narcotráfico son un repertorio cultural que convierte la violencia en narrativa heroica” (Hernandez,2010, p.56), a esto se suman las narconovelas y la cultura de las buchonas, que exaltan el lujo, la ostentación y la feminización del poder narco, proyectando una estética aspiracional.

En términos de violencia, los carteles mexicanos se caracterizan por la espectacularidad y el uso de la violencia como mensaje público, “la violencia de los carteles mexicanos se ha convertido en un instrumento de comunicación política y social, diseñado para infundir miedo y demostrar poder” (Shirk y Wallman,2015, p.34).

En Colombia, la narcocultura se consolidó con un estilo más tradicional, vinculado con el culto a la Virgen María Auxiliadora, conocida popularmente como la “Virgen de los Sicarios” y a prácticas como las “balas rezadas”, en donde la violencia se ritualiza con elementos religiosos, “la figura de la Virgen de los Sicarios simboliza la fusión entre violencia y religiosidad, otorgando legitimidad espiritual a la acción criminal” (Salazar,2001, p.77).

Los personajes como Rosario Tijeras y la exaltación de Pablo Escobar en series y narrativas populares reforzaron la construcción del capo como benefactor urbano, “ la representación de Escobar como héroe popular refleja la capacidad del narcotráfico de insertarse en la cultura y generar legitimidad social”(Franco, 2009,p.115), a esto se le puede sumar el fenómeno de los niños sicarios que muestra como la narcocultura penetró en la infancia y juventud, creando generaciones socializadas en la violencia.

A diferencia de México, la violencia en Colombia se caracterizó por su intensidad en los años ochenta y noventa, vinculada con la confrontación directa con el Estado y a la construcción de sistemas paralelos de poder, “la economía negra del narcotráfico en Colombia creó un sistema paralelo de legitimidad política y social que erosionó la autoridad estatal” (Palacios,2006, p.112).

Aunque Costa Rica no ha desarrolla una narcocultura tan visible y consolidada como México o Colombia, su presencia se ha hecho notar en diversas dimensiones culturales, sociales y políticas. Incluso, la condición del país como territorio de tránsito ha favorecido la incorporación de símbolos, narrativas y prácticas asociadas con el narcotráfico que tensionan la imagen internacional de Costa Rica como democracia pacífica.

En el ámbito musical, se ha observado la circulación de narcocorridos mexicanos en sectores juveniles, especialmente en zonas costeras y fronterizas, “La difusión de corridos y música vinculada al narcotráfico en Costa Rica refleja la penetración cultural de narrativas externas que legitiman la violencia y poder económico ilícito”(Ramírez, 2020, p.88), asimismo, la estética de lujo y la ostentación, vinculadas con la figura del narco, han permeado en prácticas sociales como el consumo de vehículos de alta variedad y estilos de vida asociados al poder rápido.

Aunque Costa Rica no presenta cultos tan institucionalizados como el de Jesús Malverde o la Santa Muerte en México, si se han identificado expresiones religiosas vinculadas al narcotráfico, “la religiosidad popular en Costa Rica ha incorporado elementos de protección simbólica frente al narcotráfico, con rezos y rituales asociados a la violencia” (Vargas, 2021, p.134), estas prácticas, aunque menos visibles, muestran cómo el simbolismo religioso también se adapta el contexto costarricense.

La influencia de las narconovelas colombianas y mexicanas ha sido significativas en Costa Rica, en donde series como El señor de los Cielos, La Reina del Sur o Narcos han tenido amplia difusión, “el consumo de narconovelas en Costa Rica ha contribuido a la normalización de la figura del capo como personaje aspiracional, reforzando imaginarios de poder y riqueza ilícita” (López, 2019, p.72), esto evidencia cómo la narcocultura se inserta en el imaginario colectivo a través de productos mediáticos transnacionales.

La presencia de la narcocultura también se refleja en la incorporación de jóvenes a dinámicas criminales, “la participación de adolescentes en estructuras narco en Costa Rica responde a la construcción de un imaginario de movilidad social rápida, legitimado por narrativas culturales externas” (Chacón, 2022, p.101), este fenómeno, aunque menos masivo que en Colombia, muestra como la narcocultura se convierte en un referente para sectores juveniles en condiciones de vulnerabilidad.

La narcocultura en Costa Rica, aunque menos institucionalizada, proyecta un efecto simbólico que tensiona la imagen internacional del país, “la presencia de símbolos y narrativas narco en Costa Rica contradice la imagen de democracia pacífica, proyectando al país como territorio vulnerable y dependiente de la cooperación externa” (Alvarado,2023, p.119).

2.3.2. Implicaciones conceptuales: cómo medir la afectación simbólica sobre la imagen estatal

La afectación simbólica que la narcocultura produce sobre la imagen estatal constituye un desafío metodológico y conceptual, no se trata únicamente de medir impactos materiales; como decomisos o índices de violencia, sino de analizar cómo los símbolos, narrativas y prácticas culturales vinculadas con el narcotráfico reconfiguran la percepción interna y externa de los Estados.

La imagen estatal se construye en gran medida a través de discursos oficiales y mediáticos, “la representación mediática de los fenómenos criminales moldea la percepción pública y condiciona la legitimidad de las instituciones” (Entman,2004, p.23), la afectación simbólica puede medirse a través del análisis de narrativas mediáticas, discursos políticos y representaciones culturales que proyectan al Estado como fuerte, débil o vulnerable frente al narcotráfico.

La narcocultura se inserta en prácticas sociales que legitiman o cuestionan la autoridad estatal, “la cultura popular es un espacio de lucha simbólica donde se negocia la hegemonía y la resistencia” (Hall,1997, p.112). Aplicado al narcotráfico, esto implica que la aceptación de corridos, narconovelas o símbolos religiosos vinculados al narco refleja una disputa simbólica sobre la legitimidad del Estado, la medición de esta dimensión puede realizarse mediante estudios de consumo cultural y análisis de narrativas populares.

Por otra parte, la imagen estatal también se proyecta en el ámbito internacional, “el poder blando se basa en la capacidad de los Estados de proyectar una imagen atractiva y legítima” (Nye,2004, p.5). La narcocultura, al asociarse con violencia y corrupción, erosiona este poder blando y condiciona la política exterior, la afectación simbólica puede medirse a través de informes internacionales, percepciones diplomáticas y narrativas globales sobre el país.

Este fenómeno no solo afecta la legitimidad interna, sino que también genera procesos de estigmatización en el ámbito internacional, “el estigma es un atributo profundamente desacreditador que transforma la identidad social de quien lo porta” (Goffman,1963, p.13). Aplicado al narcotráfico, la asociación de un país con narrativas criminales produce un estigma diplomático que condiciona su imagen externa y limita su capacidad de ejercer poder blando, la medición de esta dimensión puede realizarse mediante el análisis de informes internacionales, percepciones en medios extranjeros y discursos diplomáticos que refuercen o cuestionen la reputación estatal.

La narcocultura también se inserta en la construcción de memorias colectivas que redefinen la identidad nacional y, en un plano más amplio, la identidad latinoamericana, “los lugares de memoria son espacios donde la historia se transforma en símbolo y se perpetua en la conciencia colectiva” (Nora, 1989, p.7). En América Latina, los corridos, las narconovelas y la mitificación de capos han operado como lugares de memoria que consolidan una visión alternativa del Estado, legitimando actores criminales como referentes sociales.

La violencia y el narcotráfico se han convertido en símbolos compartidos de la región, articulando una narrativa transnacional en donde lo ilícito se asocia con movilidad social, resistencia y poder, “la memoria del narcotráfico en Colombia se construye como relato urbano que mezcla violencia, religiosidad y aspiraciones sociales” (Salazar, 2001, p.81),

mientras que en México los narcocorridos proyectan al capo como héroe popular y benefactor comunitario, estas narrativas, al repetirse y circular en distintos países, configuran una identidad latinoamericana marcada por la normalización de la violencia y la legitimación cultural del narco.

Por su parte, la medición de esta dimensión no se limita al consumo cultural interno, sino que debe considerar cómo estas memorias colectivas circulan en el ámbito regional y global, proyectando una imagen de fragilidad institucional y condicionando la política exterior de los Estados, en este sentido, la narcocultura no solo redefine la legitimidad histórica de cada país, también contribuye a la construcción de una identidad latinoamericana atravesada por la violencia y el poder simbólico del narcotráfico.

2.4 Marco Referencial

2.4.1 Poder simbólico (Pierre Bourdieu)

El concepto de poder simbólico, desarrollado por Pierre Bourdieu, constituye la base teórica para comprender cómo la narcocultura afecta la legitimidad y la imagen de los Estados latinoamericanos. “la capacidad de imponer significados y de hacerlos reconocer como legítimos, ocultando las relaciones de fuerza que los sostienen” (Bourdieu, 1998, p.47), la narcocultura no solo opera como fenómeno criminal, sino como un sistema simbólico que disputa la autoridad del Estado en el terreno cultural y social, en el caso costarricense, este poder simbólico se manifiesta en la tensión entre la imagen internacional de democracia pacífica y la penetración de narrativas vinculadas al narcotráfico.

El poder simbólico se manifiesta a través del habitus, entendido como el conjunto de disposiciones interiorizadas que orientan las prácticas sociales, “el habitus es un sistema de disposiciones duraderas que genera prácticas y percepciones ajustadas a las estructuras sociales” (Bourdieu, 1997, p.78). En el caso de la narcocultura, el habitus narco se traduce en la normalización de la violencia, la ostentación de lujo y la legitimación del capo como figura de poder. Tanto en México como en Colombia, estas disposiciones se reproducen en narrativas culturales (corridos, narconovelas) y símbolos religiosos (Malverde, Virgen de los Sicarios), consolidando un orden simbólico alternativo al estatal.

En Costa Rica, la narcocultura se manifiesta de manera menos institucionalizada, pero igualmente significativa. La circulación de narrativas externas (narconovelas, narcocorridos),

la penetración en sectores juveniles y la ritualización religiosa adaptada a contextos locales reflejan la presencia de un habitus narco incipiente, la diferencia radica en que Costa Rica, como país de tránsito, proyecta una imagen internacional de democracia pacífica, pero vulnerable.

No obstante, la relación bilateral con Estados Unidos amplifica este efecto simbólico, la cooperación en seguridad, aunque necesaria, se convierte en un mecanismo de violencia simbólica, pues Costa Rica acepta narrativas externas que lo presentan como Estado dependiente y subordinado. Bourdieu y Wacquant (1992) afirman que “la violencia simbólica se ejerce con la complicidad de quienes la padecen, porque los esquemas de percepción y apreciación están estructurados de manera que la aceptan como legítima” (p.67). La reforma constitucional de 2015 sobre extradición de nacionales ejemplifica cómo el Estado costarricense sacrifica parte de su autonomía jurídica para mantener su credibilidad internacional, reforzando la narrativa de subordinación frente a Washington.

2.4.2 Constructivismo.

El constructivismo, como enfoque central de este análisis, aporta una visión más profunda al considerar que la cooperación internacional no se explica únicamente por intereses materiales, sino por factores ideacionales, identitarios y culturales, “la política internacional está determinada por estructuras de conocimiento compartido, donde las identidades y normas moldean los intereses de los Estados” (Wendt, 1999, p.33).

Aplicado a la narcocultura, el constructivismo permite comprender cómo las narrativas culturales y simbólicas influyen en la cooperación internacional. En México, la mitificación del capo y la legitimidad social del narco condicionan la forma en que el Estado negocia con Estados Unidos. En Colombia, la memoria colectiva de la violencia y la exaltación de Escobar proyectan una imagen internacional de Estado penetrado por el crimen, lo que justifica intervenciones externas.

En Costa Rica, el constructivismo explica cómo la imagen de democracia pacífica se tensiona frente a narrativas externas que lo presentan como país vulnerable y dependiente, la cooperación con Estados Unidos no solo responde a intereses de seguridad, sino también a la necesidad de mantener una identidad internacional de Estado confiable. Sin embargo, esta identidad se ve erosionada cuando la narcocultura penetra en sectores juveniles y en

instituciones políticas, proyectando una narrativa de fragilidad que condiciona la política exterior.

Mientras tanto, el constructivismo también permite el análisis de cómo las percepciones sociales y mediáticas condicionan la cooperación internacional, “las normas internacionales no solo regulan el comportamiento estatal, sino que constituyen identidades y definen intereses” (Finnemore y Sikkink, 1998, p.891). En el caso del narcotráfico, las narrativas mediáticas que presentan a Costa Rica como país de tránsito y vulnerable generan presiones externas las cuales moldean su política exterior, mostrando que la cooperación con Estados Unidos responde tanto a dinámicas de seguridad como a la necesidad de preservar una identidad internacional legítima.

Asimismo, el constructivismo aporta herramientas cómo los símbolos culturales del narcotráfico se convierten en referentes transnacionales que afectan la legitimidad estatal, “la política internacional es un espacio de construcción social donde las prácticas y significados compartidos generan estructuras de poder” (Adler, 1997, p.322). En este sentido, los corridos mexicanos, las narconovelas colombianas y las narrativas emergentes en Costa Rica no son meros productos culturales sino prácticas que reconfiguran la percepción del Estado y condicionan su capacidad de proyectar poder blando en la arena internacional.

Finalmente, el constructivismo permite vincular la cooperación internacional con la disputa simbólica por la legitimidad democrática, “la construcción de identidades colectivas en el ámbito internacional se da en procesos de interacción donde los Estados negocian significados y reconocimientos” (Risse, 2000, p.7). Para Costa Rica, esto implica que su identidad de democracia pacífica se encuentra en tensión frente a narrativas externas que lo presentan como Estado vulnerable. La cooperación con Estados Unidos, entonces, no solo es un mecanismo de seguridad, sino también un proceso de negociación simbólica que busca mantener la credibilidad internacional del país frente a la expansión cultural del narcotráfico.

En definitiva, el constructivismo ofrece un marco analítico para comprender cómo las narrativas culturales y simbólicas del narcotráfico reconfiguran la cooperación internacional y la legitimidad estatal, “las normas y las identidades no son simples reflejos de intereses materiales, sino factores constitutivos que definen la acción política” (Katzenstein, 1996, p.2). Bajo esta perspectiva, Costa Rica enfrenta el reto de preservar su identidad de

democracia pacífica en un entorno regional marcado por la expansión de la narcocultura. La cooperación con Estados Unidos se convierte, entonces, en un espacio de negociación simbólica donde se disputa la credibilidad internacional del país, este enfoque abre la puerta al análisis comparativo con México y Colombia, cuyos casos muestran cómo la narcocultura puede transformar tanto la política interna como la proyección externa de los Estados latinoamericanos.

2.4.3 Sistema Mundo

El análisis de la narcocultura y su impacto sobre la imagen estatal no puede desligarse de las estructuras económicas y geopolíticas que la sostienen. La incorporación de la economía negra, la teoría del Sistema-Mundo y los factores geopolíticos permiten ampliar la comprensión del fenómeno, mostrando que la narcocultura no es únicamente cultural o simbólica, sino también estructural y estratégica.

Asimismo, la teoría del Sistema-mundo de Wallerstein aporta un marco estructural para comprender cómo el narcotráfico se inserta en la división internacional del trabajo, “el sistema-mundo capitalista se organiza en torno a una división internacional del trabajo que reproduce desigualdades entre centro y periferia” (Wallerstein, 2004, p.23). En este esquema, Estados Unidos actúa como centro consumidor, mientras tanto México, Colombia y Costa Rica se convierten en periferias funcionales, ya sea como productores o corredores estratégicos. La narcocultura, en ese contexto, refleja la subordinación de las identidades nacionales a dinámicas globales que trascienden las fronteras estatales.

Sin embargo, la geopolítica del narcotráfico se manifiesta en la manera en que los Estados Unidos utiliza la cooperación internacional como herramienta de control regional, “la política antidrogas de Estados Unidos en América Latina ha estado marcada por una lógica geopolítica que busca asegurar control regional más que reducir el narcotráfico” (Tokatlian, 2010, p.41). En México, esta lógica se tradujo en la militarización de la seguridad; en Colombia, en la implementación del Plan Colombia y en Costa Rica, en la presión para aprobar reformas legales como la extradición de nacionales en 2025. Estos factores geopolíticos condicionan la política exterior costarricense, proyectando una imagen de Estado confiable, pero subordinado a los intereses de Washington.

La teoría del Sistema-Mundo permite observar que el narcotráfico no es un fenómeno marginal, sino un engranaje funcional dentro de la economía global, “las jerarquías del sistema mundial perpetúan la dependencia de las periferias respecto al centro, incluso mediante economías informales y criminales” (Chase-Dunn y Grimes,1995,p.389), la narcocultura se convierte en un reflejo simbólico de esta dependencia, legitimando prácticas que reproducen la desigualdad estructural entre Estados Unidos y America Latina.

Por otra parte, el narcotráfico revela cómo las economías ilícitas se integran en la lógica del capitalismo global, “las economías criminales no son externas al sistema, sino que forman parte de su dinámica de acumulación y reproducción” (Robinson,2008, p.52), en este sentido, México, Colombia y Costa Rica cumplen funciones diferenciados dentro de la cadena ilícita; productores, corredores y países de tránsito, respectivamente. La narcocultura, al normalizar estas prácticas, refuerza la percepción de que la región está atrapada en una posición periférica difícil de superar.

La aplicación del Sistema-Mundo al caso costarricense muestra que la cooperación internacional en seguridad responde más a la necesidad de mantener estabilidad del sistema que a resolver las causas estructurales del narcotráfico, “la estabilidad del sistema-mundo depende de la capacidad del centro de controlar las periferias” (Wallerstein,2004, p.3).

En consecuencia, la presión ejercida sobre Costa Rica para aprobar reformas legales y aceptar mecanismos de cooperación con Estados Unidos refleja esta lógica, proyectando al país como un Estado confiable en el plano internacional, pero subordinado a las dinámicas estructurales del capitalismo global.

La teoría del Sistema-Mundo permite comprender que la narcocultura y el narcotráfico no son fenómenos meramente culturales, sino expresiones de una estructura global que asigna funciones diferenciadas a centro y periferia, “las economías criminales forman parte de la dinámica de acumulación del capitalismo global y reproducen las jerarquías del sistema mundial” (Robinson,2008, p.52). Bajo esta lógica, Costa Rica aparece como periferia funcional cuya política exterior ha sido condicionada por las exigencias del centro especialmente de Estados Unidos. Por en la cooperación bilateral, entonces, no puede analizarse únicamente como respuesta de seguridad, sino como un mecanismo estructural

que reproduce la hegemonía del centro y proyecta una imagen internacional de Estado confiable pero subordinado.

2.4.4 Conexión analítica: narcocultura e imagen estatal en la cooperación Costa Rica y Estados Unidos de América

La narcocultura, como fenómeno transnacional, no solo afecta la seguridad interna de los Estados latinoamericanos, sino que también redefine su **imagen internacional** y condiciona la cooperación bilateral. En el caso de Costa Rica, la relación con Estados Unidos se convierte en un espacio privilegiado para observar cómo los símbolos, las narrativas y las estructuras vinculadas al narcotráfico tensionan la legitimidad estatal y proyectan una identidad internacional ambivalente.

Desde la teoría de Bourdieu, la narcocultura se inserta en Costa Rica a través de narrativas externas (narconovelas, narcocorridos) y prácticas juveniles que reproducen un *habitus narco* incipiente. Este *habitus*, aunque menos institucionalizado que en México o Colombia, legitima estilos de vida ilícitos y erosiona la autoridad estatal. Así pues, la cooperación con Estados Unidos se convierte en un mecanismo para disputar este poder simbólico, proyectando al Estado costarricense como garante de orden, aunque en la práctica se evidencie su vulnerabilidad.

El constructivismo permite comprender cómo la cooperación bilateral se basa en narrativas compartidas y en la construcción de identidades. Wendt (1999) sostiene que “los intereses de los Estados están moldeados por estructuras de conocimiento compartido” (p. 33). En este marco, Costa Rica negocia su identidad internacional como democracia pacífica y confiable, mientras Estados Unidos proyecta su narrativa de potencia hegemónica que asegura control regional. Ahora bien, la narcocultura, al tensionar esta identidad, obliga a Costa Rica a reforzar su credibilidad mediante actos simbólicos como la reforma constitucional de 2025 sobre extradición de nacionales.

Costa Rica ha construido su *soft power* en torno a la narrativa de democracia pacífica y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la narcocultura disputa esta diplomacia simbólica al proyectar narrativas alternativas de violencia y corrupción. Chernobrov (2016) sostiene que “la diplomacia simbólica se basa en la capacidad de los Estados de controlar narrativas y significados que definen su identidad internacional” (p. 28). En este contexto, la

cooperación con Estados Unidos se convierte en un acto simbólico el cual refuerza la credibilidad de Costa Rica, pero también evidencia su subordinación a narrativas externas que lo presentan como Estado vulnerable.

La política antidrogas de Estados Unidos en América Latina responde a una lógica geopolítica de control regional. Tokatlian (2010) advierte que “la política antidrogas de Estados Unidos ha estado marcada por una lógica geopolítica que busca asegurar control regional más que reducir el narcotráfico” (p. 41). En Costa Rica, esta lógica se traduce en la presión para aprobar reformas legales y en la subordinación de su política exterior a los intereses estratégicos de Washington.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque de la investigación

Este trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo-comparado, porque la naturaleza del tema, (la legitimación simbólica de la narcocultura y la cooperación bilateral en materia de seguridad), exige un abordaje interpretativo que vaya más allá de los números. Como señalan Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2014), “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p.364), resulta más pertinente el análisis de discursos, las prácticas culturales y las políticas públicas que el intento por reducirlos a variables cuantificables.

Por lo tanto, el análisis cualitativo comparativo se convierte en una herramienta clave dentro de este enfoque, porque permite la identificación de patrones y las diferencias entre casos, integrando tanto dimensiones culturales como institucionales, “el análisis cualitativo comparativo combina la lógica booleana con el análisis cualitativo, permitiendo descubrir configuraciones causales en contextos sociales complejos”(Stewart,s.f), esta flexibilidad metodológica es especialmente útil para un fenómeno como la narcocultura manifestado de manera distinta según el país y su contexto político.

En el campo de la ciencia política y las ciencias sociales, “el método comparativo cualitativo es una estrategia que posibilita la identificación de semejanzas y diferencias entre casos, favoreciendo la construcción de explicaciones más sólidas sobre procesos sociales e

institucionales” (Tonon, 2010, p.48), en este estudio la comparación entre Costa Rica y Estados Unidos, tomando como referentes a México y Colombia, permite la extracción de lecciones aplicables y advertencias relevantes para el contexto costarricense.

Por su lado, la narcocultura, al ser legitimada o normalizada en distintos espacios sociales, deja de percibirse como un fenómeno marginal y comienza a integrarse en la vida cotidiana, lo cual tiene consecuencias directas en la legitimidad institucional y en la proyección internacional de los Estados, “la narcocultura no es únicamente un conjunto de símbolos y prácticas, sino un sistema de significados que legitima socialmente la economía del narcotráfico” (Astorga, 2005, p.32). Esta legitimación simbólica afecta la manera en la cual los países son percibidos en el exterior, generando tensiones en las relaciones diplomáticas y en la cooperación internacional en materia de seguridad.

En el caso de Costa Rica y Estados Unidos de América, la persistencia de elementos culturales asociados con el narcotráfico puede erosionar la confianza mutua y complicar la implementación de acuerdos bilaterales, “la normalización de la violencia y del narcotráfico en la cultura popular debilita la capacidad de los Estados para proyectar una imagen de legitimidad y control institucional” (Garzón, 2013,p.14), esto demuestra que la narcocultura no es solo un fenómeno interno, sino un factor que incide en la diplomacia y en la cooperación internacional, al influir en la percepción de estabilidad y credibilidad de los países involucrados.

Problematizar la normalización de la narcocultura es fundamental para comprender cómo este fenómeno trasciende lo cultural y se convierte en un desafío político y diplomático, reconocer su impacto permite el fortalecimiento de la legitimidad democrática y diseñar estrategias de cooperación más efectivas, evitando que los símbolos del narcotráfico se conviertan en un obstáculo para la confianza internacional.

3.2 Método de Investigación

El método seleccionado para este trabajo es el estudio de caso comparado cualitativo, que permite analizar en profundidad fenómenos sociales y políticos en contextos específicos, integrando tanto dimensiones culturales como institucionales, “el estudio de caso es una investigación empírica que examina un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto no están definidas” (Yin,2018,p.15), esta definición se ajusta plenamente a la

naturaleza del tema, ya que la narcocultura no puede comprenderse sin considerar el entorno político, institucional y cultura en el que se desarrolla.

El método comparativo cualitativo, “es esencial para descubrir variaciones sistemáticas y generar inferencias más sólidas sobre procesos políticos y sociales” (Collier, 1993, p.105), la comparación entre Costa Rica y Estados Unidos con México y Colombia como referentes permite la identificación de patrones comunes y diferencias significativas en la manera en que los países enfrentan la legitimación simbólica del narcotráfico y articulan mecanismos de cooperación internacional.

Además, este método se apoya en la revisión documental y bibliográfica, que incluye fuentes académicas, informes oficiales y prensa especializada, “la investigación cualitativa utiliza técnicas como la observación, la revisión documental y las entrevistas para obtener información rica en significados” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2014, p.367). La revisión documental se convierte en la técnica principal, pues el fenómeno estudiado se encuentra ampliamente registrado en literatura académica y fuentes institucionales.

3.3 Fuentes de Información

La solidez de este estudio depende en gran medida de la calidad y diversidad de las fuentes utilizadas, en estas investigaciones cualitativas, la revisión documental constituye una técnica fundamental, pues permite el acceso a datos históricos, informes oficiales y literatura académica que enriquecen al análisis, “la investigación cualitativa utiliza técnicas como la observación, la revisión documental y las entrevistas para obtener información rica en significados” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2014, p.367), las fuentes de información abarcan documentos académicos, reportes institucionales, prensa especializada, entrevistas a expertos y estudios comparativos sobre narcocultura y cooperación internacional.

Asimismo, el uso de fuentes variadas no solo garantiza rigor metodológico, sino que también permite la triangulación de perspectivas y la reducción de posibles sesgos, fortaleciendo la validez del análisis comparado entre Costa Rica, Estados Unidos, México y Colombia, la triangulación, entendida como la integración de literatura académica, informes oficiales y prensa especializada, ofrece una visión más completa del fenómeno y evita que el

estudio se limite a una sola narrativa, “el estudio de caso se fortalece cuando se emplean múltiples fuentes de evidencia, esto permite una mejor convergencia de datos” (Yin,2018,p.120).

3.3.1 Fuentes Primarias

Las fuentes primarias constituyen un insumo esencial para este estudio, ya que permiten acceder directamente a información producida en el contexto mismo del fenómeno analizado, además incluyen documentos oficiales emitidos por instituciones gubernamentales, tratados y acuerdos bilaterales, informes de organismos internacionales, así como discursos y comunicados diplomáticos relacionados con la cooperación en materia de seguridad, “los documentos oficiales y registros primarios son fundamentales porque ofrecen evidencia directa de las acciones y decisiones de los actores políticos” (Scott,1990,p.45). Por ende, el uso de fuentes primarias fortalece la validez del análisis al proporcionar datos originales que reflejan tanto la dimensión institucional como la diplomática del problema, evitando depender únicamente de interpretaciones secundarias.

3.3.2 Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias cumplen un papel complementario, pues permiten contextualizar y enriquecer la información obtenida de las fuentes primarias y de las entrevistas, estas abarcan literatura académica, investigaciones previas, artículos especializados, prensa internacional y análisis de organismos independientes, “las fuentes secundarias son esenciales porque ofrecen interpretaciones y marcos analíticos que ayudan a situar los datos primarios dentro de un contexto más amplio” (Bailey,1994,p.102), pues recurrir a estudios comparativos sobre narcocultura y cooperación internacional aporta perspectivas críticas que fortalecen la interpretación de los hallazgos, asimismo el contraste entre discursos oficiales y análisis independientes contribuye a evitar sesgos y a construir un marco metodológico más sólido y equilibrado.

En conjunto, las fuentes primarias y secundarias se complementan de manera estratégica, ya que las primeras aportan datos originales, mientras tanto las segundas ofrecen interpretaciones críticas y marcos teóricos los cuales contextualizan esos hallazgos. Esta combinación asegura un análisis más integral y confiable, pues evita depender de una sola perspectiva y fortalece la validez del estudio comparado, “la triangulación de fuentes es un

principio central de la investigación cualitativa, porque incrementa la credibilidad de los resultados al integrar diferentes tipos de evidencia” (Flick, 2014, p.184). De esta manera, la complementariedad entre fuentes primarias y secundarias no solo enriquece la comprensión del fenómeno, sino que también garantiza un abordaje equilibrado de la narcocultura y sus impactos en la legitimidad institucional y la cooperación internacional.

3.4 Población y Muestra

La población de este estudio está conformada por actores vinculados con la cooperación bilateral en materia de seguridad y el análisis crítico de la narcocultura, incluyendo funcionarios públicos, especialistas en relaciones internacionales y académicos que han investigado el impacto cultural de la narcocultura en la legitimidad institucional. Por lo tanto, resulta imposible abarcar la totalidad de esta población, se seleccionara una muestra intencional compuesta por entrevistas semiestructuradas a informantes clave y por documentos oficiales y académicos que reflejen las dinámicas de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos de América, con referencias comparativas a México y Colombia, “el muestreo intencional permite seleccionar casos ricos en información que ofrecen perspectivas profundas sobre los fenómenos estudiados” (Patton,2002,p.230), la muestra se define estratégicamente para garantizar que los datos recolectados sean pertinentes y representativos de los objetivos de la investigación.

3.4.1 Población

La población de este estudio está conformada por actores vinculados a la cooperación bilateral en materia de seguridad y al análisis de la narcocultura como fenómeno social y político, incluye funcionarios públicos de instituciones encargadas de la seguridad y la política exterior, académicos especializados en relaciones internacionales y estudios culturales, así como representantes de organismos internacionales que han participado en programas de cooperación, la elección de esta población responde a la capacidad de aportar información sustantiva sobre la legitimidad institucional y las dinámicas diplomáticas, “la población en la investigación cualitativa se define por la pertinencia de los informantes y no por criterios de representatividad estadística” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2014,p.385), esto asegura que los sujetos seleccionados reflejen de manera directa las tensiones y aprendizajes surgidos de la interacción entre narcocultura y cooperación internacional.

3.4.2 Muestra

La muestra de esta investigación estará conformada por entrevistas semiestructuradas realizadas a informantes clave, seleccionados de manera intencional por su experiencia y relación directa con los temas de cooperación bilateral y narcocultura, legitimidad institucional y cooperación bilateral. Entre los participantes se incluye a Tania Molina autora de varios libros utilizados como fuente bibliográfica para este estudio, una psicóloga experta en estudios de la conducta y criminología, cuya experiencia permitirá la comprensión de las dimensiones culturales y sociales del fenómeno; así como un internacionalista especializado que aportara una visión crítica sobre los impactos diplomáticos y políticos de la narcocultura en la cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos de América, con referencias comparativas a México y Colombia.

Este tipo de muestreo responde a la lógica cualitativa, en la que la pertinencia y la riqueza de la información prevalece sobre la cantidad de participantes, “el muestreo internacional busca casos ricos en información que permitan comprender en profundidad los fenómenos estudiados” (Patton, 2002, p.230). De esta manera, las entrevistas seleccionadas se convierten en la principal fuente de datos primarios, aportando testimonios y análisis que fortalecen la validez del estudio.

Tabla 1. Perfiles de entrevistados y enfoques analíticos.

Entrevistado	Puesto	Razón
Tania Molina	Lic. en Ciencias Criminológicas y Diplomada en Investigación Criminal.	Mirada criminológica y de seguridad
Eyling Jáenz Donaire	Licda. En psicología Código 13654 Técnico en Criminología Análisis de la conducta criminal y perfilación Diplomado en psicología jurídica y criminal	Mirada psicológica y cultural sobre la juventud

Fundación Bandera Blanca María Isabel Barrantes	Internacionalista / Socióloga	Mirada comunitaria y socioeducativa
--	-------------------------------	--

Nota: Elaboración propia.

3.5 Unidad de Análisis

El papel de la narcocultura en las relaciones diplomáticas entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América en temas de cooperación.

3.6 Instrumentos

La recolección de datos en esta investigación se llevará a cabo mediante técnicas cualitativas que permitan la obtención de información profunda y contextualizada sobre la narcocultura y su influencia en la cooperación bilateral, el proceso combinará entrevistas semiestructuradas con informantes clave y la revisión documental de fuentes oficiales y académicas, “la recolección de datos cualitativos implica acercarse directamente a los actores y escenarios para comprender las percepciones, significados y experiencias”(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2014,p.385).

Las entrevistas semiestructuradas serán el instrumento principal, ya que permiten la exploración de las percepciones de especialistas desde un enfoque flexible y abierto, este tipo de entrevistas facilita que los participantes expresen sus experiencias y opiniones en torno a la narcocultura y la cooperación internacional contra el crimen organizado, “la entrevista cualitativa es una conversación con un propósito, orientada a obtener descripciones del mundo vivido de los entrevistados” (Kvale,1996, p.6).

Complementariamente, la revisión documental se utilizará para contrastar y enriquecer los hallazgos provenientes de las entrevistas, garantizando la triangulación de datos, “la triangulación de fuentes es esencial en la investigación cualitativa, pues incrementa la credibilidad de los resultados al integrar diferentes tipos de evidencia” (Flick,2014, p.184).

3.6.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica constituye un eje fundamental en esta investigación, ya que permite la contextualización del fenómeno de la narcocultura y su impacto en las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Estados Unidos de América, dentro del marco de la cooperación internacional contra el crimen organizado, este proceso implica la consulta de fuentes primarias y secundarias, incluyendo artículos académicos, informes oficiales, tratados internacionales y literatura especializada en criminología, relaciones internacionales y estudios culturales, “la revisión de la literatura es un proceso sistemático que identifica, evalúa y sintetiza el conocimiento existente sobre un tema” (Hart,1998,p.13).

Asimismo, la revisión bibliográfica no solo aporta antecedentes teóricos, también permite la identificación de vacíos de investigación y construir un marco conceptual sólido, “una revisión bien estructurada guía al investigador en la formulación de preguntas y en la delimitación del problema de estudio” (Machi & McEnvoy,2016, p.4). La revisión bibliográfica se convierte en un instrumento clave para legitimar el análisis comparativo entre Costa Rica, Estados Unidos, México y Colombia, asegurando que los hallazgos se fundamenten en evidencia académica y documental.

3.6.2 Entrevista a profundidad

La entrevista a profundidad constituye una técnica cualitativa fundamental en investigaciones que buscan explorar fenómenos sociales complejos y sensibles, se define como una conversación semiestructurada, guiada por el investigador, para obtener información detallada sobre percepciones, experiencias y significados atribuidos por los participantes (Taylor & Bogdan,1998). A diferencia de los cuestionarios cerrados, este método ofrece flexibilidad para indagar en aspectos emergentes durante el diálogo, generando datos ricos en matices y contextos.

En el marco de esta investigación, la entrevista a profundidad resulta indispensable por varias razones, en primer lugar, posibilita acceder a perspectivas de actores clave vinculados con la cooperación bilateral y el impacto de la narcocultura, información que difícilmente se encuentra en documentos oficiales o literatura académica (Kvale,2007). En segundo lugar, aporta legitimidad y originalidad al estudio, al incorporar testimonios directos que complementan el análisis documental y comparativo, finalmente permite la humanización del fenómeno investigado, mostrando cómo las dinámicas institucionales y culturales afectan a las personas y a la legitimidad democrática.

La inclusión de entrevistas en Costa Rica, contrastadas con referentes en México y Colombia, fortalece el enfoque comparado de la investigación, este recurso metodológico contribuye a la triangulación de datos, validando hallazgos y enriqueciendo la interpretación de los resultados (Denzin,2012). La entrevista a profundidad no solo es un instrumento de recolección de información, sino también un eje central para comprender la interacción entre narcocultura y cooperación internacional en su dimensión simbólica y política.

3.7 Recolección y procesamiento de datos

El proceso de investigación se ha estructurado en fases sucesivas que garantizan coherencia metodológica y validez académica, en primer lugar, se realizó una delimitación del problema y objetivos, lo cual precisó el enfoque sobre narcocultura y cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos, con referentes comparativos en México y Colombia, “la definición clara del problema constituye el eje rector de todo estudio científico” (Hernández Sampieri et al,2014, p.35).

Seguidamente, se procedió a la revisión bibliográfica y documental, integrado fuentes primarias y secundarias, este paso es esencial para construir el marco teórico y contextualizar el fenómeno, “la investigación cualitativa requiere un contacto constante con la literatura para situar los hallazgos en un contexto más amplio” (Flick,2015, p.42).

Posteriormente, se elaboró el diseño metodológico, donde se seleccionó la entrevista a profundidad como técnica principal de recolección de datos, esta decisión responde a la necesidad de captar percepciones y significados en torno a la legitimidad institucional y la narcocultura, “la entrevista cualitativa es un intento de comprender el mundo desde la perspectiva del sujeto” (Kvale,2007, p.11).

Se desarrolló la aplicación de entrevistas y recopilación de testimonios, siguiendo criterios éticos de consentimiento informado y confidencialidad, este paso permitió la obtención de información inédita y humanizada sobre las dinámicas de cooperación bilateral, se inició el procesamiento y análisis de datos, “la triangulación profundiza y amplía la comprensión, más allá de la mera validación” (Denzin,2012, p.82).

A continuación, se detallarán las fases de esta investigación:

- Selección del tema de investigación
- Ejecución del tema de investigación

- Recolección de datos bibliográficos
- Entrevista a profundidad
- Desarrollo de la información
- Conclusiones y recomendaciones

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Desarrollo del contexto sociocultural-político en el que se manifiesta la narcocultura en Costa Rica durante el período 2021-2025.

El análisis de la narcocultura en Costa Rica durante el periodo 2021-2025 exige situarla en un contexto socio cultural y político más amplio, en donde las dinámicas internas se entrelazan con presiones externas y estructuras globales, “las drogas y sus narrativas no reconocen fronteras, sino que se insertan en circuitos transnacionales que redefinen las identidades locales”(Astorga,2015,p.19). En Costa Rica, esta inserción se manifiesta en la juventud urbana y costera, en donde la narcocultura se convierte en un referente aspiracional que tensiona la narrativa histórica de democracia pacífica.

En el plano sociocultural, la narcocultura se expresa a través de imaginarios colectivos que normalizan la violencia y el poder ilícito, Molina (2018) identifica cómo los discursos mediáticos y las representaciones culturales del narcotráfico han permeado la sociedad costarricense, generando un “futuro secuestrado” para sectores juveniles (Molina,2018). Estas narrativas se articulan con símbolos de ostentación y consumo, reforzando lo que Valenzuela Arce (2012) denominaba la dimensión “espectacular” de la narcocultura en donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario en la construcción de legitimidad social.

En el plano político, la narcocultura tensiona las instituciones democráticas y la legitimidad estatal, “la narcoviencia erosiona la confianza en la democracia costarricense, proyectando una imagen de fragilidad institucional” (Saborío,2019, p.77). Esta erosión se refleja en la presión para aprobar reformas legales como la extradición de nacionales en 2025, medida que buscó reforzar la credibilidad internacional del país, Fierro (2025) complementa este análisis al señalar que la cultura del crimen organizado en Centroamérica ha penetrado espacios políticos locales, condicionando la agenda pública y la cooperación internacional.

En el plano estructural, desde la visión del Sistema-Mundo, teoría mencionada en el marco teórico se comprende cómo la narcocultura en Costa Rica se inserta en dinámicas globales de centro-periferia, “el sistema-mundo capitalista reproduce desigualdades entre centro y periferia mediante una división internacional del trabajo” (Wallerstein,2004, p.23).

En este esquema, Estados Unidos actúa como centro consumidor, mientras tanto Costa Rica se convierte en periferia funcional como país de tránsito, Robinson (2008) agrega que las economías criminales forman parte de la lógica de acumulación global, esto explica por qué la narcocultura costarricense no puede analizarse únicamente como fenómeno cultural, sino como expresión de una estructura económica y política que condiciona la política exterior del país.

4.1.1 Juventud y narcocultura en Costa Rica (2021-2025)

El contexto sociocultural y político de la narcocultura en Costa Rica entre 2021 y 2025 revela que este fenómeno no puede entenderse únicamente como una expresión cultural, sino como parte de una estructura más amplia que combina dinámicas internas y presiones externas. La penetración en sectores juveniles, la tensión sobre la legitimidad democrática y la inserción en la lógica centro- periferia del sistema-mundo muestran que la narcocultura es simultáneamente un problema social, político y estructural, “la narcocultura se convierte en un factor de legitimidad que redefine la relación entre Estado y sociedad” (Becerra Romero, 2018, p.64), lo que en el caso costarricense se traduce en la necesidad de reforzar la cooperación internacional para sostener su imagen de democracia confiable.

Ahora bien, este impacto cultural se vincula con dinámicas sociales documentadas en Costa Rica, particularmente en sectores juveniles en situación de vulnerabilidad, tales dinámicas reflejan cómo la narcocultura opera como un campo de disputa simbólica en el cual se acumula lo que Bourdieu (1997) denomina capital simbólico otorgando prestigio y legitimidad a prácticas vinculadas al poder y la violencia, la presión diplomática no solo se traduce en reformas legales, sino también en narrativas oficiales que contrarrestan la expansión de estos significados culturales y sostener la legitimidad internacional del país.

Para esta investigación se interpreta que la narcocultura juvenil en Costa Rica se analiza como parte de un proceso de legitimación cultural que trasciende lo local, “las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico operan como formas de poder simbólico que

erosionan la legitimidad estatal” (Vázquez Gutiérrez, 2022, p.44). En este sentido, la penetración de la narcocultura en sectores juveniles no solo afecta la cohesión social interna, sino que proyecta hacia el exterior una imagen de fragilidad institucional, esta percepción condiciona la política exterior costarricense obligada a reforzar su cooperación con Estados Unidos para mantener la credibilidad internacional como democracia estable y confiable.

Este análisis evidencia que Costa Rica enfrenta un doble desafío; contener la expansión cultural del narcotráfico en su tejido social y responder a las exigencias estructurales del sistema internacional. La aprobación de reformas legales como la extradición de nacionales en 2025 y la presión diplomática de Estados Unidos reflejan cómo la política exterior costarricense se ve condicionada por la necesidad de proyectar credibilidad en un entorno regional marcado por la narcoviolenencia.

El estudio del contexto costarricense abre la puerta al análisis comparativo con México y Colombia, países en donde la narcocultura ha tenido un impacto más profundo y prolongado sobre la legitimidad estatal, la comparación permitirá la identificación de similitudes y diferencias en la forma en que los Estados latinoamericanos enfrentan la tensión entre identidad nacional, cooperación internacional y estructuras globales, ofreciendo claves para comprender la posición de Costa Rica en el escenario regional.

4.1.2 Medios de comunicación y narconarrativas

El papel de los medios de comunicación en la configuración de la narcocultura costarricense entre 2021 y 2025 ha sido determinante, no solo por la difusión de contenidos, sino por la manera en que estos relatos moldean percepciones sociales y legitiman prácticas vinculadas al crimen organizado, Rincón (2020) subraya que las narrativas mediáticas del narcotráfico funcionan como dispositivos culturales que otorgan sentido y reconocimiento a actores ilegales, generando un espacio simbólico en donde la violencia se normaliza. En Costa Rica, este proceso se ha intensificado con la circulación de producciones internacionales que representan al narcotraficante como figura de poder y movilidad social.

La penetración de estas narrativas se ha visto reforzada por la expansión de plataformas digitales y redes sociales, que permiten un consumo inmediato y transnacional de contenidos, Vázquez Gutiérrez (2020) explica que las narrativas culturales vinculadas al narcotráfico operan como formas de poder simbólico, capaces de erosionar la legitimidad

estatal al instalar imaginarios colectivos que cuestionan la autoridad del Estado. En el caso costarricense, la juventud ha sido particularmente receptiva a estas representaciones, esto ha contribuido a consolidar un imaginario aspiracional en torno al lujo, la ostentación y la violencia como símbolos de estatus.

La construcción mediática de la narcocultura no se limita a la ficción televisiva o cinematográfica, más bien se extiende a la cobertura periodística y al discurso informativo. Molina (2018) advierte que la forma en la cual los medios nacionales narran los hechos relacionados con el narcotráfico influye directamente en la percepción social del fenómeno, generando una narrativa de inseguridad que refuerza la idea de fragilidad institucional, este doble impacto, ficcional e informativo.

Convierte a los medios en actores centrales en la reproducción de la narcocultura, al mismo tiempo que condicionan la imagen internacional de Costa Rica como un Estado vulnerable frente al crimen organizado. La narrativa mediática no solo afecta la percepción interna, también condiciona la política exterior costarricense, proyectando al país como un socio que debe reforzar su credibilidad internacional frente al crimen organizado.

El impacto mediático no solo moldea percepciones sociales, sino que abre paso a otras formas de legitimación cultural, como la religiosidad popular en donde símbolos y rituales refuerzan la presencia del narcotráfico en la vida cotidiana.

4.1.3 Religiosidad popular y narcocultura

La narcocultura no se limita a expresiones musicales o mediáticas, sino que también se manifiesta en prácticas de religiosidad popular que buscan legitimar y proteger a quienes participan en el narcotráfico. En México, uno de los casos más emblemáticos es el culto a Jesús Malverde, considerado “santo de los narcos”, cuya figura se ha convertido en símbolo de protección y justicia para sectores vinculados al crimen organizado (Astorga, 2005). Este culto, acompañado de rituales y ofrendas, refleja cómo la religiosidad popular se adapta a las necesidades de quienes viven en contextos de violencia, otorgando legitimidad simbólica a actores criminales.

En Colombia, la religiosidad vinculada al narcotráfico se ha expresado en la apropiación de símbolos católicos tradicionales, García-Peña (2016) señala que capos y

grupos armados han utilizado imágenes religiosas en funerales, procesiones y altares, buscando proyectar una identidad de poder que combina violencia con devoción. Esta fusión entre fe y narcotráfico ha reforzado lo que Bourdieu (1997) denomina “capital simbólico”, pues la religiosidad otorga reconocimiento social y legitimidad cultural a prácticas ilícitas este tema será abordado más adelante en la investigación, en este contexto, la narcocultura colombiana se convierte en un fenómeno híbrido en donde lo religioso y lo criminal se entrelazan en la vida cotidiana.

En Costa Rica, aunque no existen cultos institucionalizados como en México, si se han identificado prácticas de religiosidad popular vinculadas al narcotráfico. Molina (2018) documenta que en comunidades costeras y fronterizas se realizan rezos y rituales asociados a la protección frente a la violencia, adaptando símbolos religiosos tradicionales a las dinámicas del crimen organizado.

Estas prácticas, aunque menos visibles que en México o Colombia, muestran cómo la narcocultura se inserta en el tejido social costarricense mediante expresiones religiosas que legitiman la figura del narco como proveedor de seguridad y bienestar, Vázquez Gutiérrez (2022) advierte que estas narrativas religiosas refuerzan el poder simbólico del narcotráfico, erosionando la legitimidad estatal y proyectando una imagen de fragilidad institucional.

Así como la religiosidad otorga legitimidad simbólica, la estética del lujo y la ostentación se convierten en otro lenguaje cultural que proyecta poder y reconocimiento social dentro de la narcocultura.

4.1.4 Estética del lujo y ostentación

La narcocultura se expresa de manera visible en la estética del lujo y la ostentación, donde los bienes materiales se convierten en símbolos de poder y estatus. En busca de entender la importancia de este fenómeno se genera una comparativa con el caso de México y Colombia para entender el desarrollo de este sobre la narcocultura y de esta forma describir cómo en Costa Rica se ha visto presentada.

En México, Valenzuela Arce (2012) describe este fenómeno como “lo cotidiano y lo espectacular”, señalando que el consumo de vehículos de alta gama, joyas y fiestas ostentosas constituye una forma de legitimación social del narcotraficante (Valenzuela Arce, 2012,

p.87), esta estética no es meramente superficial, sino que funciona como un lenguaje cultural que comunica éxito y autoridad en contextos de precariedad.

En el caso de Colombia, la ostentación vinculada con el narcotráfico adquirió una dimensión política y social más amplia, “la cultura política colombiana se vio atravesada por la figura del narco, cuya ostentación material se convirtió en un mecanismo de poder y control social” (García-Peña, 2016, p.112). El caso de Pablo Escobar y otros capos muestra cómo la acumulación de riqueza ilícita se tradujo en obras públicas, donaciones y prácticas clientelistas que reforzaron la legitimidad de actores criminales frente a comunidades marginadas, la estética del lujo, en este sentido, no solo representaba estatus individual, sino también una estrategia de construcción de poder colectivo.

Siendo así en el caso de Costa Rica, aunque la escala es menor, la estética de lujo vinculada al narcotráfico ha permeado en sectores juveniles y urbanos, “la juventud costarricense ha incorporado símbolos de ostentación como parte de un imaginario aspiracional ligado al narcotráfico” (Molina, 2020, p.56), el consumo de motocicletas, ropa de marca y estilos de vida ostentosos se ha convertido en un signo de pertenencia y reconocimiento social en comunidades vulnerables, Viera Filho (2024) contempla este análisis al señalar que varios grupos criminales desarticulados en Costa Rica utilizaban la ostentación como estrategia de reclutamiento juvenil, mostrando que la estética del lujo no es un fenómeno aislado sino un mecanismo de legitimación cultural y social.

4.1.5 Juventud, sicariato y reclutamiento forzado; comparaciones regionales

El sicariato en Colombia se consolidó como una práctica sistemática de reclutamiento juvenil desde los años ochenta, y sigue vigente como mecanismo de control territorial, “el sicariato se convirtió en una forma de movilidad social para jóvenes de sectores marginales, quienes encontraron en la violencia un camino de reconocimiento y supervivencia” (Salazar, 1990, p.77), la razón principal por la cual los grupos narcotraficantes refuerzan su brazo armado con niños y adolescentes radica en la vulnerabilidad socioeconómica y en la facilidad de manipulación, “los jóvenes reclutados como sicarios representan la base operativa del narcotráfico, pues su bajo costo y alta disponibilidad los convierten en piezas funcionales de la economía criminal” (García-Peña, 2016, p.121).

En México, el reclutamiento de jóvenes por parte de carteles como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación ha adoptado formas más violentas y coercitivas, “los carteles mexicanos han recurrido al reclutamiento forzado de adolescentes, quienes son obligados a participar en actividades criminales bajo amenaza de muerte o violencia contra sus familias” (Astorga, 2016, p.19). Este fenómeno se vincula con la militarización del narcotráfico y la necesidad de mantener un flujo constante de combatientes en territorios disputados, “la narcocultura mexicana legitima la figura del joven sicario como héroe trágico, reforzando su atractivo en comunidades en donde las oportunidades legales son inexistentes “(Valenzuela Arce, 2012, p.87).

La importancia de estos casos para el objetivo de la investigación radica en que evidencian cómo la narcocultura, al operar como fenómeno transnacional, se articula con dinámicas estructurales que reproducen la vulnerabilidad juvenil y legitiman la violencia como forma de movilidad social, este patrón, presente en Colombia y México, permite comprender que la narcocultura no es un fenómeno aislado, sino un entramado simbólico el cual condiciona la seguridad regional y que también incide en la relación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos, al proyectar la juventud como un espacio crítico de disputa cultural y diplomática.

Aunque a menor escala, Costa Rica también ha experimentado casos de reclutamiento juvenil vinculados con el narcotráfico, “varios grupos criminales desarticulados en Costa Rica estaban integrados por jóvenes reclutados en barrios marginales, quienes eran utilizados como transportistas, vigilantes y sicarios en formación” (Viera Filho, 2024, p.210), en comunidades costeras como Limón, la falta de empleo formal y la desigualdad estructural han facilitado que adolescentes sean cooptados por redes criminales, reforzando la narcocultura como narrativa aspiracional, “la juventud costarricense se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables frente a la expansión del narcotráfico, al normalizar símbolos de poder ilícito como vía de movilidad social” (Molina, 2020, p.56).

4.1.6 Costa Rica como democracia pacífica

La identidad política de Costa Rica se ha construido históricamente sobre la abolición del ejército en 1948 y la consolidación de un modelo democrático que privilegia la diplomacia y la defensa de los derechos humanos, “la soberanía costarricense se ha

sustentado en la imagen de un Estado pacífico, sin ejército, que privilegia la diplomacia y el derecho internacional” (Muñoz Guillen, 1997, p.42). Esta narrativa se ha convertido en un recurso simbólico que proyecta al país como un referente regional de estabilidad y paz, diferenciándolo de sus vecinos centroamericanos marcados por conflictos armados.

En el plano internacional, esta tradición pacifista ha sido utilizada como capital político para reforzar la credibilidad de Costa Rica en foros multilaterales, “la cultura política costarricense se legitima en el escenario regional a través de la defensa de los derechos humanos y la democracia, incluso frente a la expansión del crimen organizado” (Bravo Fierro, 2016, p.101). Esta legitimidad, sin embargo, se ve tensionada por la penetración de dinámicas narco en el periodo 2021-2025, que ponen en entredicho la capacidad del Estado para sostener su imagen de democracia sólida.

La narrativa pacífica también ha condicionado la política exterior costarricense, “la cooperación internacional en materia de drogas obliga a los Estados a equilibrar su autonomía con la necesidad de proyectar credibilidad externa” (Ortiz Ruiz, 2020, p.73). En el caso de Costa Rica, la tradición de paz y derechos humanos se convierte en un marco discursivo que contrasta con la presión de Estados Unidos para adoptar medidas más duras contra el narcotráfico, esta tensión revela que la identidad pacifista, aunque útil como recurso diplomático, enfrenta límites frente a la realidad del crimen organizado transnacional.

La imagen pacifista de Costa Rica debe entenderse como parte de un proceso de legitimación simbólica proyectada tanto adentro como hacia afuera, “la narcocultura redefine la relación entre Estado y sociedad, erosionando las bases de legitimidad que sostienen la democracia” (Becerra Romero, 2018, p.64), la tradición pacifista costarricense no desaparece, pero se ve obligada a coexistir con un contexto de inseguridad que desafía su coherencia histórica y su credibilidad internacional.

4.1.7 Reformas legales recientes

El periodo 2021-2025 estuvo marcado por la aprobación de reformas legales que buscaban reforzar la credibilidad internacional de Costa Rica frente al avance del narcotráfico, la más significativa fue la reforma constitucional de 2025 al artículo 32, que habilitó la extradición de nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo.

Esta modificación se realizó mediante votación legislativa en la Asamblea Legislativa, tras intensos debates sobre soberanía, cooperación y estuvo acompañada de una fuerte presión bilateral de Estados Unidos, que consideraba la medida indispensable para consolidar la cooperación judicial, “los convenios de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos contra el crimen organizado se consolidaron con la reforma de extradición, considerada un hito en la política exterior costarricense” (Código Extra, 2025, p.15). Esta medida fue interpretada como un gesto destinado a demostrar la voluntad del Estado costarricense de alinearse con estándares internacionales de seguridad.

La extradición de nacionales representó un cambio sustancial en la tradición jurídica costarricense, históricamente reacia a ceder soberanía en materia penal, “la cooperación internacional en materia de drogas obliga a los Estados Unidos a equilibrar su autonomía con la necesidad de proyectar credibilidad externa” (Ortiz Ruiz, 2020, p.73). En este sentido, la reforma de 2025 refleja cómo Costa Rica priorizó la credibilidad internacional frente a la defensa de su autonomía jurídica, mostrando la influencia de factores externos en la configuración de su política interna.

Esta reforma debe de entenderse como parte de un proceso más amplio de adaptación institucional, “la cultura política centroamericana se ha visto obligada a introducir cambios legales para responder a la presión del crimen organizado y a las exigencias de cooperación internacional” (Bravo Fierro, 2025, p.98). En Costa Rica, la extradición de nacionales se convirtió en un símbolo de compromiso con la lucha contra el narcotráfico, pero también en un punto de debate sobre los límites de la soberanía nacional.

La reforma de 2025 proyecta hacia el exterior una imagen de Costa Rica como socio confiable en la lucha contra el crimen organizado, sin embargo, Garzón (2018) advierte, “las políticas de seguridad regional suelen responder más a la necesidad de mostrar resultados inmediatos que a la construcción de capacidades sostenibles” (Garzon, 2018, p.122), esto sugiere que la reforma, aunque relevante en términos diplomáticos, debe ser analizada críticamente en cuanto a su efectividad real para enfrentar las dinámicas internas del narcotráfico.

La aprobación de reformas legales como la extradición de nacionales en 2025 no puede entenderse de manera aislada, pues estuvo acompañada de una fuerte presión externa, especialmente de Estados Unidos, que condicionó la agenda de seguridad costarricense.

4.1.8 Presión externa en política pública: influencia de Estados Unidos en la agenda de seguridad y cooperación.

La política de seguridad costarricense en el periodo 2021-2025 estuvo marcada por una fuerte influencia externa, especialmente de Estados Unidos, cuya agenda antidrogas condicionó las decisiones nacionales, “la política antidrogas en América Latina ha estado marcada por una lógica geopolítica que busca asegurar control regional más que reducir el narcotráfico” (Tokatlian, 2010, p.41), en Costa Rica esta lógica se tradujo en la necesidad de aceptar mecanismos de cooperación bilateral y reformas legales que reforzarán la credibilidad internacional del país.

La presión estadounidense se manifestó en la firma de convenios operativos y en la presencia de agencias como la DEA y el FBI en territorio costarricense, “la expansión de las redes mexicanas hacia Centroamérica transformo a Costa Rica en un territorio de tránsito y almacenamiento, afectando su imagen como nación pacífica y democrática” (Viera Filho, 2024, p.212). Ante esta realidad, la cooperación con Estados Unidos se convirtió en un instrumento para sostener la legitimidad estatal, aunque al costo de ceder autonomía en la definición de la política pública.

Ortiz Ruiz (2020) complementa este análisis al afirmar que “la cooperación internacional en materia de drogas ha implicado para los Estados latinoamericanos un dilema entre autonomía y credibilidad externa” (Ortiz Ruiz, 2020, p.73), Costa Rica enfrentó este dilema de manera directa, pues la presión estadounidense obligó a priorizar la credibilidad internacional mediante reformas como la extradición de nacionales en 2025, aun cuando estas medidas generaban tensiones internas sobre la soberanía.

La influencia de Estados Unidos en la agenda de seguridad costarricense debe entenderse como parte de un proceso estructural más amplio, “Diversos autores sostienen que la política antidrogas ha tendido a subordinar la agenda de seguridad de los países centroamericanos a los intereses estratégicos de Estados Unidos, debilitando la percepción de autonomía nacional” (Bailey, 2014, p.87), la presión externa no solo condicionó la política

pública costarricense, sino que también proyectó hacia el exterior una imagen de Estado subordinado, cuya legitimidad democrática se sostiene en gran medida por su capacidad de cooperar con Washington en la lucha contra el narcotráfico.

El narcotráfico en Costa Rica entre 2021-2025 no solo se manifestó como un fenómeno cultural y político, también como una estructura económica paralela, “un conjunto de actividades que, aunque generen ingresos, operan fuera de los marcos legales y fiscales del Estado” (Portes,1994, p.12), en Costa Rica, la narcocultura se inserta en esa lógica, generando circuitos económicos ilícitos que afectan la recaudación tributaria y distorsionan las estadísticas oficiales de empleo y crecimiento.

Viera Filho (2024) documenta que “los grupos criminales desarticulados en Costa Rica utilizaban la economía ilícita como mecanismo de reclutamiento juvenil y de control territorial” (Viera Filho,2024,p.210), esto demuestra que el narcotráfico no solo produce riqueza, sino que también redistribuye recursos en comunidades vulnerables, creando una dependencia económica hacia actores criminales, en barrios costeros y fronterizos, el ingreso proveniente de actividades ilícitas se convirtió en un sustituto de oportunidades laborales formales, reforzando la legitimidad social del narcotráfico.

La economía ilícita vinculada con el narcotráfico se analiza desde la teoría del Sistema Mundo para esta investigación, “las economías periféricas se ven obligadas a insertarse en circuitos globales de acumulación, muchas veces mediante actividades ilegales” (Wallerstein, 2004, p.33). Costa Rica, como país periférico, se convirtió en un punto estratégico de tránsito y almacenamiento de drogas hacia Estados Unidos y Europa, esto evidencia su integración en dinámicas económicas transnacionales, esta inserción refuerza la tensión entre la narrativa oficial de democracia pacífica y la realidad de una economía ilícita que conecta al país con redes globales de narcotráfico.

Así pues, la expansión de la economía ilícita tiene efectos directos sobre la estabilidad macroeconómica, “la narcoviolencia erosiona la confianza ciudadana en la democracia costarricense, pero también afecta la percepción de seguridad económica” (Saborio, 2019, p.77), la circulación de capitales ilegales distorsiona mercados locales, incrementa la desigualdad y genera competencia desleal frente a empresas formales, además, la

dependencia de comunidades hacia ingresos ilícitos debilita la capacidad del Estado para implementar políticas de desarrollo sostenible.

En suma, la influencia externa en la política se conecta con la expansión de la economía ilícita, mostrando que el narcotráfico no solo es un problema de seguridad, sino también un fenómeno económico que erosiona la legitimidad estatal.

4.1.9 Economía negra y narcotráfico: cómo el crimen organizado se inserta en la economía informal y afecta la legitimidad estatal

En el marco de esta investigación, la economía negra vinculada al narcotráfico en Costa Rica entre 2021 y 2025 se analiza como un fenómeno estructural que trasciende la mera ilegalidad y se convierte en un mecanismo de redistribución de recursos y poder, “la economía informal no es un residuo del subdesarrollo, sino una forma de organización económica que responde a la lógica del mercado y a la debilidad institucional” (Postes y Haller, 2005, p.23), el narcotráfico se inserta en la economía informal costarricense como un actor que aprovecha vacíos regulatorios y desigualdades sociales para consolidar su legitimidad.

Además, la economía negra constituye el soporte material de la narcocultura, al generar recursos ilícitos que se transforman en poder político y simbólico, “la economía negra del narcotráfico en Colombia creó un sistema paralelo de legitimidad política y social que erosionó la autoridad estatal” (Palacios, 2006, p.112). En México, esta economía se tradujo en la capacidad de los carteles de financiar estructuras armadas y redes de corrupción, mientras que, en Costa Rica, aunque a menor escala, se manifiesta en la infiltración de recursos ilícitos en comunidades vulnerables y en instituciones políticas, desde la perspectiva de Bourdieu, estos recursos se convierten en capital simbólico, legitimando al narco como actor social reconocido.

Por otra parte, el caso colombiano ofrece un antecedente clave para comprender esta dinámica, “el narcotráfico creó una economía paralela que condicionó la legitimidad estatal y alteró las dinámicas de poder político y social” (Thoumi, 2003, p.112). En Costa Rica, aunque la escala es menor, la lógica es similar; el crimen organizado se convierte en proveedor de ingresos y oportunidades en comunidades marginadas, generando una dependencia económica hacia actividades ilícitas, “los grupos criminales desarticulados en

Costa Rica utilizaban la economía ilícita como mecanismo de reclutamiento juvenil y de control territorial” (Viera Filho, 2024, p.210), esto confirma que la economía negra no es marginal, sino central en la producción de la narcocultura.

Aun cuando, la inserción del narcotráfico en la economía informal también debe analizarse desde la perspectiva del sistema-mundo, “las economías periféricas se ven obligadas a insertarse en circuitos globales de acumulación, muchas veces mediante actividades ilegales” (Wallerstein, 2004, p.33). Costa Rica, como país periférico, se convirtió en un nodo estratégico de tránsito y almacenamiento de drogas hacia Estados Unidos y Europa, esto evidencia su integración en dinámicas económicas transnacionales, esta inserción refuerza la tensión entre la narrativa oficial de democracia pacífica y la realidad de una economía ilícita que conecta al país con redes globales de narcotráfico.

La economía negra vinculada al narcotráfico afecta directamente la legitimidad estatal, “la narcocultura redefine la relación entre Estado y sociedad, erosionando las bases de legitimidad que sostienen la democracia” (Becerra Romero, 2018, p.64), en Costa Rica, la dependencia de comunidades hacia ingresos ilícitos proyecta una imagen de fragilidad institucional, obligando al Estado a recurrir a reformas legales y cooperación internacional para sostener su credibilidad, este fenómeno muestra que la economía negra no solo es un problema económico, sino un desafío político y cultural que condiciona la estabilidad democrática.

La economía negra vinculada al narcotráfico refuerza la posición estratégica de Costa Rica como país de tránsito, integrando al país en dinámicas globales que trascienden lo local y condicionan su política exterior.

4.1.10 Costa Rica como país de tránsito: papel estratégico en la cadena global del narcotráfico y la narcocultura

Diversos informes internacionales señalan que entre 2021 y 2025, Costa Rica tendió a consolidarse como un país de tránsito estratégico dentro de la cadena global del narcotráfico, por lo tanto condicionó tanto su política exterior como su imagen internacional, “Costa Rica se consolidó como país de tránsito para la cocaína, lo que condicionó su imagen internacional y reforzó la necesidad de cooperación bilateral” (UNODC, 2021; 2024), esta posición geográfica, sumada a la ausencia de ejército y a la debilidad relativa de sus

instituciones de seguridad, convirtió al país en un nodo logístico clave para el traslado de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Por otra parte, Viera Filho (2024) advierte que “la expansión de las redes mexicanas hacia Centroamérica transformo a Costa Rica en un territorio de tránsito y almacenamiento, afectando su imagen como nación pacífica y democrática” (Viera Filho, 2024, p.212). Este tránsito no se limita al plano material, también implica la circulación de símbolos culturales asociados al narcotráfico, reforzando la narcocultura como narrativa de poder y movilidad social; así Costa Rica no solo se convierte en un corredor físico de drogas, sino también en un espacio de difusión cultural de imaginarios vinculados con el crimen organizado.

Indudablemente, la cadena global del narcotráfico, para efectos de esta investigación, se analiza desde la perspectiva del sistema-mundo, “las economías periféricas se ven obligadas a insertarse en círculos globales de acumulación, muchas veces mediante actividades ilegales” (Wallerstein, 2004, p.33), Costa Rica actúa como periferia funcional, facilitando el tránsito de cocaína producida en Colombia y distribuida por redes mexicanas hacia los mercados centrales de Estados Unidos y Europa, esta inserción refuerza la tensión entre la narrativa oficial de democracia pacífica y la realidad de un país cuya economía y cultura se ven atravesadas por dinámicas ilícitas transnacionales.

También, el tránsito de drogas por Costa Rica tiene implicaciones directas en la legitimidad estatal y en la cooperación internacional, “la creciente utilización de Costa Rica como punto logístico del narcotráfico internacional ha tensionado su tradicional imagen de democracia pacífica, obligando al Estado a redefinir su política exterior en clave de seguridad” (Pérez García, 2022, p.134), con esto el papel estratégico del país en la cadena global del narcotráfico no solo afecta su economía y seguridad interna, sino que también condiciona su política exterior y su credibilidad internacional frente a socios como Estados Unidos y Europa.

4.1.11 Impacto en comunidades fronterizas y costeras: desigualdad, empleo informal y dependencia de economías ilícitas

Las comunidades fronterizas y costeras de Costa Rica han sido particularmente vulnerables a la expansión del narcotráfico y la narcocultura, debido a su posición geográfica estratégica y a las condiciones de desigualdad socioeconómica, “la precariedad laboral y la

ausencia de oportunidades en las zonas costeras han convertido al narcotráfico en una alternativa de subsistencia para sectores marginados” (Molina, 2020, p.56), esta dinámica refuerza la dependencia hacia economías ilícitas, debilitando la capacidad del Estado para garantizar desarrollo sostenible en estas regiones.

En México, por ejemplo, el impacto del narcotráfico en comunidades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez ha sido ampliamente documentado, “Las economías ilícitas en las zonas fronterizas mexicanas se convirtieron en mecanismos de supervivencia y movilidad social, legitimando la figura del narco como proveedor de ingresos y seguridad”(Astorga, 2015, p.19), la combinación de desempleo estructural, migración y violencia ha generado un entorno en donde el narcotráfico no solo provee recursos, sino que también establece formas de control social y cultural.

Incluso, la importancia de este antecedente para el análisis radica en que evidencia cómo la narcocultura se convierte en un mecanismo de legitimación en contextos de exclusión, otorgando al narcotráfico un papel de proveedor y regulador social, este patrón resulta pertinente para Costa Rica, en donde comunidades fronterizas y costeras enfrentan dinámicas similares de desempleo y desigualdad, esto facilita la reproducción de narrativas que legitiman la economía ilícita, el caso mexicano permite comprender que la narcocultura no es únicamente un fenómeno local, sino un entramado transnacional la cual condiciona la seguridad regional y proyecta tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.

En Colombia, “las economías ilícitas en zonas rurales y fronterizas se convirtieron en mecanismos de supervivencia, generando una relación ambivalente entre comunidades y actores criminales” (García-Peña,2016,p.119), este antecedente resulta pertinente para Costa Rica, donde comunidades en la frontera norte y en la costa atlántica han reproducido patrones similares; empleo informal vinculado con el transporte, almacenamiento y distribución de drogas, acompañado de una legitimación social hacia quienes proveen ingresos en contextos de exclusión.

Viera Filho (2024) confirma que “los grupos criminales desarticulados en Costa Rica utilizaban la economía ilícita como mecanismo de reclutamiento juvenil y de control territorial” (Viera Filho, 2024, p.210), en comunidades costeras como Limón, la falta de empleo formal y la desigualdad estructural han facilitado que jóvenes encuentren en el

narcotráfico una vía de movilidad social rápida, reforzando la narcocultura como narrativa aspiracional.

A su vez, la dependencia hacia economías ilícitas en comunidades fronterizas y costeras debe analizarse como parte de un proceso de fragilidad institucional compartido en la región, “la narcocultura redefine la relación entre Estado y sociedad, erosionando las bases de legitimidad que sostienen la democracia” (Becerra Romero, 2018, p.64). En México, Colombia y Costa Rica, esta redefinición se manifiesta en la aceptación social de ingresos ilícitos como fuente de estabilidad económica, por lo tanto tensiona la narrativa oficial de democracia y obliga a los Estados a recurrir a cooperación internacional para sostener su credibilidad.

4.2 Identificación de los mecanismos de cooperación internacional orientados al manejo de la narcocultura entre Costa Rica y Estados Unidos de América como fenómeno transnacional.

4.2.1 Introducción al fenómeno transnacional

La narcocultura, entendida como un conjunto de símbolos, narrativas y prácticas sociales vinculadas al narcotráfico, se ha convertido en un fenómeno transnacional que trasciende fronteras y condiciona las relaciones diplomáticas de los Estados latinoamericanos, “la narcocultura no se limita a la representación cultural del crimen, sino que opera como un lenguaje transnacional que redefine la legitimación estatal y la cooperación internacional” (Ramírez, 2021, p.112), su impacto no se restringe al ámbito interno, sino que proyecta imágenes y significados hacia el sistema internacional, afectando credibilidad de los Estados en escenarios multilaterales.

Sin duda, en Costa Rica se analiza en esta investigación como un Estado que enfrenta el reto de sostener su reputación frente a la penetración de dinámicas criminales transnacionales, “la inserción de Costa Rica en las rutas del narcotráfico ha tensionado su imagen internacional, obligando al país a reforzar mecanismos de cooperación con Estados Unidos” (Viera Filho, 2024, p.210). La narcocultura, al proyectar vulnerabilidad institucional, obliga al Estado costarricense a responder no solo con medidas de seguridad, sino también con gestos diplomáticos los cuales refuercen su credibilidad externa.

La cooperación bilateral con Estados Unidos durante el periodo 2021-2025 se justifica en este contexto, “la guerra contra las drogas transformó la diplomacia regional, colocando a países como Costa Rica en una narrativa de dependencia y vulnerabilidad” (Bagley, 2012, p.47). Así los programas de seguridad, la asistencia técnica y la presión diplomática se convierten en mecanismos que buscan contener la narcocultura como fenómeno transnacional, pero también en instrumentos simbólicos que proyectan la imagen de Costa Rica como socio confiable en la lucha contra el crimen organizado.

Esta dinámica genera una tensión constante entre credibilidad internacional y vulnerabilidad interna, por un lado, las reformas legales y los discursos oficiales refuerzan la confianza de Estados Unidos y Europa en la capacidad de Costa Rica para enfrentar el narcotráfico. Por otro, la penetración cultural del fenómeno y la dependencia de apoyo externo evidencian la fragilidad institucional del país.

Desde el constructivismo, esta tensión refleja cómo las narrativas compartidas moldean la cooperación internacional y la identidad estatal; desde el enfoque Sistema-Mundo, muestra la subordinación estructural de Costa Rica como periferia funcional en la cadena global del narcotráfico, este marco permite comprender que la cooperación bilateral no solo responde a dinámicas de seguridad, sino también a la necesidad de sostener narrativas de credibilidad internacional.

4.2.2 Programas de seguridad

Los programas de seguridad implementados entre Costa Rica y Estados Unidos durante el periodo 2021-2025 se orientaron a contener el narcotráfico mediante acciones conjuntas de vigilancia y control territorial, estos mecanismos respondieron a la necesidad de reforzar la capacidad operativa del Estado costarricense frente a la creciente utilización de su territorio como corredor estratégico.

Por su parte, en el ámbito marítimo y aéreo, la cooperación se materializó en operaciones de interdicción que combinaron recursos humanos y tecnológico de ambos países, “la intensificación de patrullajes en el Caribe y el Pacífico permitió interceptar embarcaciones y aeronaves vinculadas al tráfico internacional de cocaína” (UNODC, 2024, p.211). Estas acciones reforzaron la presencia estatal en zonas críticas, aunque evidenciaron la dependencia de Costa Rica respecto a la infraestructura y logística estadounidense.

Además, la participación de agencias como la DEA y el FBI en territorio costarricense se convirtió en un componente central de la cooperación, “la política antidrogas subordinó la agenda de seguridad de los países centroamericanos a los intereses estratégicos de Estados Unidos” (Bailey, 2014, p.87). En Costa Rica, esta subordinación se reflejó en la creación de unidades especializadas contra el crimen organizado, con asesoría directa de estas agencias, y en la integración de oficiales costarricenses en programas de intercambio de inteligencia regional.

Por lo tanto, el control de rutas estratégicas fue otro eje de acción, “la creciente utilización de Costa Rica como punto logístico del narcotráfico internacional ha tensionado su imagen de democracia pacífica, obligando al Estado a redefinir su política exterior en clave de seguridad” (Pérez García, 2022, p.134). En consecuencia, los patrullajes combinados y el monitoreo satelital de embarcaciones y aeronaves se convirtieron en instrumentos de cooperación que reforzaron la credibilidad internacional del país, aunque también evidenciaron su dependencia operativa de Estados Unidos.

Por ende, los datos empíricos refuerzan esta dinámica; entre 2000 y 2008 Costa Rica decomisó entre 200 y 2008 toneladas de cocaína, alcanzando un récord de 47,1 toneladas en 2008, pero cayendo a mínimos históricos de 15-21 toneladas en 2023 (UNODC, 2025; ICD, 2026). Esta variabilidad evidencia que los decomisos no reflejan necesariamente una reducción del narcotráfico, sino cambios en las rutas internacionales, mayor sofisticación de las redes criminales y debilidades en los sistemas de control, la cooperación con Estados Unidos se convierte en un mecanismo indispensable para sostener la credibilidad internacional frente a la magnitud del problema.

Tabla 2: Incautaciones de cocaína en Costa Rica, México y Colombia (2020-2025)

País/Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Costa Rica	47,1 t (récord histórico)	44,3 t	24,7 t	15-21 t (mínimo en década)	27 t	11-40 t (estimado preliminar)
México	27 t	25 t	30 t	28 t	32 t	35 t
Colombia	505 t	600 t	672 t	738 t	721 t	700 + t (estimado)

Nota: UNODC (2024,2024), OEA-CICAD, Ministerio de Seguridad Publica de Costa Rica, Policía Nacional de Colombia, secretaria de Defensa Nacional de México.

2025 aun con datos preliminares en Costa Rica y Colombia.

Ahora bien, los programas de seguridad bilaterales proyectaron a Costa Rica como un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo reforzaron la percepción de vulnerabilidad y subordinación. Desde el enfoque del Sistema-Mundo, esta dinámica refleja la posición periférica de Costa Rica en la cadena global del narcotráfico; desde el constructivismo, muestra cómo las narrativas de cooperación en seguridad se convierten en símbolos de credibilidad internacional, aun cuando implican una perdida relativa de autonomía.

4.2.3 Alianzas internacionales y cooperación contra la narcocultura

El período 2021–2025 estuvo marcado por un fortalecimiento de las alianzas internacionales de Costa Rica en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, con un énfasis en contrarrestar la legitimidad cultural de la narcocultura. Según Código Extra (2025), “los convenios de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos contra el crimen organizado se consolidaron con la reforma de extradición, considerada un hito en la política exterior costarricense” (p. 15). Esta reforma no solo tuvo un impacto jurídico, sino que funcionó como un gesto político que reforzó la credibilidad del país frente a sus socios internacionales.

Por otra parte, la cooperación con Estados Unidos se materializó en acuerdos operativos con la DEA y el FBI, que duplicaron su presencia en territorio costarricense y facilitaron el intercambio de información biométrica sobre criminales de alto perfil. Ortiz Ruiz (2020) advierte que “la cooperación internacional en materia de drogas obliga a los Estados a equilibrar su autonomía con la necesidad de proyectar credibilidad externa” (p. 73). En este sentido, Costa Rica aceptó un mayor grado de injerencia externa en su política de seguridad, buscando proyectar una imagen de socio confiable en la lucha contra el narcotráfico.

En otras palabras, la cooperación internacional en materia antidrogas también ha generado tensiones con el marco constitucional costarricense y con principios de derechos humanos, la reforma de 2025 al artículo 32 de la Constitución Política que habilitó la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo, fue aprobada bajo fuerte presión bilateral de Estados Unidos, este cambio, aunque proyectó credibilidad internacional, abrió un debate sobre la soberanía judicial y la protección de garantías fundamentales.

Sin embargo, diversos autores advierten que la cooperación internacional puede condicionar la autonomía de los Estados y tensionar derechos como el debido proceso y la prohibición de extraditar nacionales (Tokatlian, 2000; Ortiz Ruíz, 2020), la política exterior costarricense se enfrenta a un dilema; reforzar su imagen como socio confiable frente al crimen organizado, pero al costo de flexibilizar principios constitucionales que históricamente habían sido considerados intocables.

La cooperación internacional ha sido utilizada como mecanismo para reforzar esta imagen, “los acuerdos bilaterales en materia de seguridad se convierten en instrumentos de legitimación internacional, más allá de su efectividad real en la reducción del narcotráfico”(Hernández, 2022, p.133), las reformas legales y los convenios con Estados Unidos y Europa no solo buscan resultados operativos, sino sostener la narrativa de Costa Rica como democracia confiable frente a la comunidad internacional.

Por su parte, la cooperación también incluyó alianzas con Europol y autoridades europeas, que aportaron tecnología de escaneo y software de nueva generación para identificar grupos criminales. Garzón (2018) señala que “las políticas de seguridad regional suelen responder más a la necesidad de mostrar resultados inmediatos que a la construcción

de capacidades sostenibles” (p. 122). En el caso costarricense, la implementación de sistemas de escaneo total en puertos y aeropuertos fue presentada como un logro inmediato, aunque su efectividad a largo plazo aún está en debate.

La cooperación internacional de Costa Rica en materia de narcotráfico no puede analizarse únicamente desde su relación bilateral con Estados Unidos, sino también en el marco de compromisos multilaterales asumidos por el país. Entre ellos destacan la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena), que obliga a los Estados a fortalecer la cooperación judicial y policial en casos de narcotráfico y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 (Convención de Palermo), que establece mecanismos de cooperación en extradición, asistencia técnica y combate a la criminalidad organizada.

Estos instrumentos jurídicos refuerzan que las reformas legales y los convenios bilaterales de Costa Rica forman parte de un entramado más amplio de obligaciones internacionales, en donde la credibilidad del país como democracia confiable se vincula directamente con su cumplimiento de tratados globales.

Finalmente, estas alianzas deben entenderse a manera de una estrategia política que busca neutralizar la narrativa del narcotráfico como poder legítimo. Bravo Fierro (2025) sostiene que “el crimen organizado en Centroamérica ha logrado infiltrarse en gobiernos locales, condicionando agendas políticas y debilitando la legitimidad institucional” (p. 98). En este contexto, la cooperación internacional no solo refuerza la capacidad operativa del Estado costarricense, sino que también funciona como un mecanismo simbólico para sostener la legitimidad democrática frente a la expansión cultural del narcotráfico.

4.2.4 Asistencia técnica

La asistencia técnica entre Costa Rica y Estados Unidos durante el periodo 2021-2025 se configuró como un mecanismo de cooperación que buscó el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente al crimen organizado, pero generó dinámicas de dependencia tecnológica y discursiva.

Costa Rica recibió apoyo en la formación de fiscales, jueces y policías en técnicas avanzadas de investigación de crimen organizado y legitimación de capitales. Según la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), “la capacitación busca reducir la brecha entre las capacidades locales y las exigencias transnacionales del narcotráfico” (INL, 2023, p.45). Asimismo, estas capacitaciones incluyeron módulos sobre análisis financiero, cooperación judicial internacional y uso de inteligencia digital, lo cual proyectó una imagen de profesionalización ante socios externos.

En este caso, Estados Unidos de América proporcionó sistemas de rastreo satelital, escáneres en puertos estratégicos como Moín y *software* de última generación para el intercambio de información en tiempo real, “la asistencia tecnológica fortalece la capacidad operativa de los Estados receptores, pero también genera una dependencia estructural hacia los proveedores externos” (Smith, 2022, p.144). En Costa Rica, esta dependencia se evidenció en la necesidad de mantenimiento y actualización constante de equipos, esto reforzó la subordinación tecnológica frente a Washington.

Como resultado, la asistencia técnica reforzó la credibilidad internacional de Costa Rica como socio confiable, pero también evidenció su vulnerabilidad estructural. Desde la teoría de la dependencia tecnológica, “las relaciones de cooperación pueden reproducir la subordinación de la periferia al centro, incluso cuando se presentan como mecanismos de fortalecimiento institucional” (Cardoso y Faletto, 1979, p.33). Asimismo, desde la perspectiva de la securitización transnacional, “la construcción de amenazas existenciales legitima la intervención externa y condiciona las políticas nacionales” (Buzan, Wæver y de Wilde, 1998, p.25), la asistencia técnica no solo fortaleció capacidades, sino que redefinió el narcotráfico como amenaza global que justifica la subordinación de Costa Rica a las exigencias de Estados Unidos.

Según lo anterior, la asistencia técnica bilateral durante 2021-2025 proyectó a Costa Rica como un Estado comprometido con la lucha contra el narcotráfico, pero también consolidó una narrativa de dependencia, mientras tanto hacia afuera se interpreta como un símbolo de credibilidad y cooperación, hacia adentro revela la fragilidad institucional para sostener estas capacidades sin apoyo externo, la asistencia técnica debe analizarse no solo

como transferencia de recursos, sino como un acto diplomático que refuerza la legitimidad internacional a costa de autonomía nacional.

4.2.5 Comparación regional (MÉXICO Y COLOMBIA)

La comparación regional permite la observación de cómo los mecanismos de cooperación internacional frente al narcotráfico han operado como símbolos de credibilidad más que como soluciones definitivas, México y Colombia ofrecen antecedentes para comprender la dinámica costarricense, especialmente en el periodo 2021-2025.

Por su parte, el plan Mérida, firmado en 2008, se consolidó como un instrumento de cooperación bilateral con Estados Unidos, sin embargo, más allá de sus resultados operativos, funcionó como un gesto diplomático de legitimidad internacional “el Plan Mérida fue tanto una estrategia de seguridad como un acto de confianza mutua que buscaba proyectar credibilidad internacional” (Shirk, 2011, p.23), México utilizó la cooperación como un recurso simbólico para reforzar su posición en el sistema internacional.

En el caso colombiano, el Plan Colombia (2000) se convirtió en un referente de cooperación antidrogas, “el Plan Colombia fue diseñado más como un acto performativo de credibilidad ante Estados Unidos que como una política orientada exclusivamente a resolver el narcotráfico interno” (Tickner, 2008, p.45). Mientras tanto, la narrativa oficial proyectó a Colombia como un Estado comprometido con la seguridad hemisférica, aunque los resultados internos fueron limitados en términos de reducción de la narcocultura.

En el periodo 2021-2025, Costa Rica replicó este patrón mediante la reforma constitucional que permitió la extradición de nacionales y los discursos oficiales que la acompañaron, estos actos funcionaron como gestos diplomáticos quienes reforzaron la credibilidad internacional del país, proyectando la imagen de una democracia confiable pero vulnerable, “los Estados producen significados mediante narrativas oficiales que buscan legitimar su posición en el sistema internacional” (Chernobrov, 2016, p.92), esto explica cómo Costa Rica utilizó la reforma como un acto simbólico de cooperación.

Sin duda, la experiencia comparada muestra que los mecanismos de cooperación internacional frente al narcotráfico funcionan como símbolos de confiabilidad, aunque refuercen la dependencia estructural, desde la perspectiva de la hegemonía cultural

transnacional (Gramsci,1971), estos actos pueden interpretarse como parte de una estrategia de legitimación donde los Estados periféricos reproducen narrativas d confianza hacia el centro, aun cuando ello implique subordinación.

4.2.6 Impacto en la legitimidad estatal y diplomática

La cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos durante el periodo 2021-2025 tuvo un impacto directo en la legitimidad estatal y diplomática del país, Costa Rica proyectó hacia el exterior la imagen de una democracia confiable, pero internamente se evidenció la vulnerabilidad frente a la narcocultura y la dependencia de apoyos externos.

Por su parte, la narrativa internacional de Costa Rica se ha sustentado en su tradición pacífica y en la abolición del ejército. Sin embargo, la penetración del narcotráfico tensiona esta reputación, “la cultura política costarricense se legitima en el escenario regional a través de la defensa de los derechos humanos y la democracia, incluso frente a la expansión del crimen organizado” (Bravo Fierro, 2025, p.101), esta paradoja muestra cómo el país mantiene credibilidad internacional, pero proyecta vulnerabilidad institucional.

Así pues, la narcocultura introduce un desafío simbólico en la proyección internacional del país, “la legitimidad cultural del narcotráfico trasciende las fronteras nacionales, afectando la percepción externa de los Estados que se presentan como democracias estables” (Ramirez,2021, p.72). En el caso de Costa Rica, esta tensión obliga a reforzar la diplomacia como herramienta de credibilidad, mostrando al país como confiable en su compromiso democrático, pero vulnerable frente a las dinámicas criminales transnacionales.

En concreto, la cooperación bilateral reforzó la confianza de Washington y Europa en Costa Rica como socio confiable. No obstante, hacia el interior, la dependencia de asistencia técnica y presión diplomática evidenció la fragilidad institucional, “los Estados buscan seguridad ontológica mediante relaciones internacionales que les permitan sostener narrativas de estabilidad y confianza” (Mitzen, 2006, p.342), la cooperación con Estados Unidos funcionó como un mecanismo de seguridad ontológica que reforzó la identidad internacional de Costa Rica, aunque expuso su debilidad estructural.

Desde la perspectiva del Sistema-Mundo, Estados Unidos actúa como centro estructurador en la dinámica centro-periferia del narcotráfico, “las relaciones de poder en el sistema internacional reproducen subordinación de la periferia al centro, incluso en mecanismos de cooperación” (Wallerstein,2004, p.27). En este sentido, la cooperación bilateral no solo fortaleció la capacidad operativa de Costa Rica, sino que también reafirmó su posición periférica en la cadena global del narcotráfico.

Además, el impacto de la cooperación bilateral en la legitimidad estatal y diplomática de Costa Rica revela una tensión constante; hacia afuera proyecta credibilidad como democracia confiable, mientras tanto hacia adentro evidencia vulnerabilidad y dependencia, desde el constructivismo, esta dinámica puede interpretarse como una narrativa de legitimidad performativa; desde el Sistema-Mundo, como la reproducción de una relación centro-periferia que condiciona la autonomía nacional.

4.2.7 Cooperación bilateral con Estados Unidos de América: programas de seguridad, asistencia técnica y presión diplomática.

La cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos de América en materia de narcotráfico durante el periodo 2021-2025 se caracterizó por una combinación de programas de seguridad, asistencia técnica y presión diplomática, esta relación refleja la tensión entre la necesidad de apoyo externo y la preservación de la autonomía nacional.

En el plano de la seguridad, Estados Unidos impulsó operaciones conjuntas de interdicción marítima y aérea, reforzando la presencia de sus agencias en aguas costarricenses, “la cooperación en seguridad marítima con Estados Unidos ha transformado a Costa Rica en un socio estratégico en el Caribe y el Pacífico, aunque a costa de una mayor dependencia operativa” (Johnson,2023,p.92), estos programas incluyeron patrullajes conjuntos, intercambio de inteligencia y capacitación de oficiales costarricenses en técnicas de interdicción.

Por eso, la asistencia técnica se convirtió en otro eje central, “los programas de asistencia técnica en América Central han buscado fortalecer capacidades institucionales, pero también han generado una dependencia tecnológica hacia Estados Unidos” (Smith,2022, p.144). En Costa Rica, esta asistencia se tradujo en la entrega de equipos de vigilancia,

sistemas de rastreo satelital y formación especializada para fiscales y jueces en casos de crimen organizado.

Sin duda, la presión diplomática fue un componente constante en la relación bilateral, “la diplomacia antidrogas de Estados Unidos opera bajo una lógica de condicionamiento, donde la cooperación se vincula a reformas legales y compromisos explícitos de los Estados receptores” (Anderson. 2024, p.67), en el caso costarricense, esta presión se materializó en la reforma constitucional de 2025 que permitió la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo, un cambio que respondió más a exigencias externas con respecto a debates internos.

La historia reciente de Costa Rica en relación con el narcotráfico y la cooperación con Estados Unidos puede comprenderse mejor a través de dos hitos: la captura de Rafael Caro Quintero en Alajuela en 1985 y la extradición de Celso Gamboa y Edwin López Vega en 2026. Ambos episodios, separados por cuatro décadas, reflejan la tensión entre la imagen internacional de Costa Rica como democracia pacífica y su vulnerabilidad frente a dinámicas criminales transnacionales.

En el caso de Caro Quintero, su detención tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena evidenció la capacidad de los carteles mexicanos para operar más allá de sus fronteras. Astorga (1995) afirma que “la captura de Caro Quintero en Costa Rica reveló la fragilidad de los Estados centroamericanos frente al crimen organizado y la necesidad de cooperación internacional” (p. 74). Este episodio condicionó la política exterior costarricense, obligando al país a reforzar su alianza con Washington en materia de seguridad.

Por otro lado, la extradición de Gamboa y López Vega en 2026 fue el primer caso en aplicarse tras la reforma constitucional de 2025 que permitió la entrega de nacionales por narcotráfico y terrorismo. Pérez García (2022) sostiene que “la presión internacional sobre Costa Rica en materia de narcotráfico ha limitado su margen de autonomía, obligando al Estado a redefinir su política exterior en clave de seguridad” (p. 134). La participación de figuras públicas como Gamboa, exministro y exmagistrado mostró que el narcotráfico no solo permea estructuras criminales, sino también instituciones políticas y judiciales, reforzando la narrativa de vulnerabilidad estatal.

Ambos casos comparten un denominador común: la subordinación de la política exterior costarricense a la cooperación con Estados Unidos. Bagley (2012) concluye que “la guerra contra las drogas transformó la diplomacia regional, colocando a países como Costa Rica en una narrativa de dependencia y vulnerabilidad” (p. 47). Así, mientras la captura de Caro Quintero en 1985 proyectó a Costa Rica como refugio involuntario de capos internacionales, la extradición de Gamboa y López Vega en 2026 consolidó la percepción de que el país requiere apoyo externo para enfrentar el crimen organizado de alto perfil.

4.3 La narcocultura como fenómeno transnacional en la relación bilateral Costa Rica-Estados Unidos de América: aplicación del concepto *habitus* y su influencia en la seguridad regional.

Pierre Bourdieu, en *Esquisse d’une théorie de la pratique* (1972) y *Le sens pratique* (1980), define el *habitus* como “un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predisuestas a funcionar como estructuras estructurantes” (1980, p.88). Este concepto permite comprender cómo las prácticas sociales, lejos de ser actos aislados, reproducen esquemas colectivos que legitiman determinadas conductas. En la distinción (1979), Bourdieu añade que “las prácticas sociales son manifestaciones de disposiciones colectivas que reproducen jerarquías y legitimidades” (p. 56).

Autores como Valenzuela Arce (2012), Astorga (2013) y Grady (2023) sostienen que la narcocultura tiende a configurar un *habitus* manifestado en la ostentación de bienes materiales, el uso de símbolos religiosos vinculados al crimen (como la figura de Jesús Malverde), y la exaltación del poder violento como forma de movilidad social, estos elementos no son meras expresiones culturales, sino disposiciones interiorizadas que moldean la percepción colectiva y legitiman la figura del narcotraficante como actor de prestigio.

En el caso costarricense, aunque la narcocultura no ha alcanzado el nivel de institucionalización observado en México o Colombia, comienza a reproducirse en sectores juveniles y comunidades vulnerables, el *habitus* narco se refleja en la aceptación de la economía ilícita como alternativa de subsistencia y en la construcción de símbolos que otorgan estatus a quienes participan en actividades criminales, esta dinámica cultural condiciona la seguridad regional, pues legitima prácticas ilícitas y erosiona la credibilidad institucional del Estado.

Aplicar el concepto de habitus al análisis de la relación bilateral Costa Rica- Estados Unidos permite comprender que la cooperación internacional no solo enfrenta estructuras criminales, sino también disposiciones culturales que sostienen y reproducen la narcocultura, los programas de seguridad y asistencia técnica deben interpretarse como intentos de disputar el campo simbólico, buscando contrarrestar un habitus que legitima la violencia y el narcotráfico como formas de poder.

Por lo tanto, aplicado a la narcocultura, el habitus se traduce en estilos de vida, símbolos y narrativas que legitiman prácticas ilícitas y otorgan reconocimiento social a quienes participan en ellas, este habitus narco no se limita a un país, más bien se proyecta como narrativa transnacional, articulando experiencias compartidas en México, Colombia y Costa Rica.

En México, el habitus narco se expresa en los narcocorridos, la ostentación de riqueza y el culto a la Santa Muerte, estas prácticas legitiman la violencia y la ostentación como aspiraciones sociales, convirtiendo al narcotraficante en héroe cultural, “la narcocultura mexicana legitima la figura del joven sicario como héroe trágico” (Valenzuela Arce, 2012, p.87), reforzando su atractivo en comunidades marginadas.

En el caso colombiano, el habitus narco consolidó en torno a Pablo Escobar, percibido como benefactor urbano. La práctica de las “balas rezadas” y el culto a la Virgen de los Sicarios muestran cómo el capital simbólico del narcotráfico se construyó en la legitimidad social del capo. Bourdieu (1986) en Las formas del capital explica que “el capital simbólico es la forma que adopta cualquier especie de capital cuando es percibido y reconocido como legítimo” (p. 241). En Colombia, este reconocimiento desplazó la autoridad estatal y proyectó internacionalmente la imagen de un Estado penetrado por el crimen organizado.

Costa Rica, aunque la narcocultura no ha alcanzado la institucionalización de México o Colombia, comienza a reproducirse en sectores juveniles y comunidades vulnerables, el habitus narco se refleja en la aceptación de la economía ilícita como alternativa de subsistencia y en la construcción de símbolos que otorgan estatus a quienes participan en actividades criminales.

La importancia de interpretar la narcocultura como narrativa transnacional radica en que revela un patrón cultural comparativo; la legitimación de prácticas ilícitas mediante símbolos y estilos de vida que circulan entre países y condicionan la seguridad regional, “la narcocultura opera como un lenguaje transnacional que redefine la legitimación estatal y la cooperación internacional” (Ramírez, 2021, p.112).

Un primer elemento que refuerza esta condición transnacional es la circulación mediática y cultural, la narcocultura se difunde a través de música, series televisivas y redes sociales, generando un lenguaje compartido que legitima la violencia y la ostentación como aspiraciones sociales. En México, los narcocorridos; en Colombia, las producciones audiovisuales sobre capos; y en Costa Rica, la creciente presencia digital de narrativas sobre “vidas rápidas” y consumo ostentoso, muestran cómo el habitus narco se expande más allá de las fronteras nacionales, “la narcocultura opera como un lenguaje transnacional que redefine la legitimación estatal y la cooperación internacional” (Ramírez, 2021, p.112).

Un segundo aspecto es el capital simbólico en disputa, “el capitalismo simbólico es la forma que adopta cualquier especie de capital cuando es percibido y reconocido como legítimo” (Bourdieu, 1986, p.241), la cooperación internacional con Estados Unidos busca disputar este capital simbólico, proyectando narrativas de legalidad y democracia frente a la legitimidad cultural del narco.

En suma, la dimensión transnacional y su impacto en la seguridad regional, la narrativa narco proyecta imágenes hacia el sistema internacional, condicionando la política exterior de los Estados, México con el Plan Mérida y Colombia con el Plan Colombia muestran cómo la cooperación antidrogas funcionó tanto como estrategia operativa como gesto diplomático de credibilidad. No obstante, en Costa Rica, la reforma constitucional de 2025 sobre extradición de nacionales refleja la misma lógica; más allá de su eficacia interna, se convierte en un acto simbólico que refuerza la confianza de Estados Unidos en el país.

4.3.1 Simbolismo

La narcocultura, entendida como un habitus transnacional, no solo configura prácticas sociales, sino que también produce un simbolismo colectivo que erosiona la legitimación estatal, “la violencia simbólica se ejerce con la complicidad de quienes la padecen, porque los esquemas de percepción y apreciación están estructurados de manera que la aceptan como

legítima” (Bourdieu, 1998, p.54), la narcocultura introduce símbolos que normalizan la violencia, exaltan la figura del capo y legitiman el consumo ostentoso como forma de reconocimiento social.

En México y Colombia, la figura del sicario se ha convertido en un héroe trágico, legitimado por narrativas culturales como los narcocorridos o las narconovelas, “el sicariato se convirtió en una forma de movilidad social para jóvenes de sectores marginales” (Salazar, 1990, p.77), mostrando como la violencia se naturaliza como práctica aceptada.

En Colombia, Pablo Escobar fue percibido como benefactor urbano, mientras que en México capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán se convirtieron en referentes culturales, “los actos performativos de credibilidad internacional en torno al narcotráfico proyectan los Estados como comprometidos con la seguridad hemisférica, aunque los resultados internos sean limitados” (Tickner, 2008, p.45), la exaltación del capo erosiona la legitimidad estatal al desplazar la autoridad hacia actores criminales.

En consecuencia, la respuesta estatal frente a esta erosión no se limita a medidas de seguridad, sino que incluye reformas legales y discursos oficiales quienes buscan la proyección de la credibilidad internacional, la reforma constitucional de 2025 que permitió la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo es un ejemplo de cómo la diplomacia costarricense utiliza gestos simbólicos para sostener su imagen de democracia confiable, “los acuerdos bilaterales en materia de seguridad se convierten en instrumentos de legitimación internacional, más allá de su efectividad real en la reducción del narcotráfico” (Hernández, 2022, p.133).

Desde el constructivismo, esta dinámica puede interpretarse como una narrativa performativa de legitimidad, donde los Estados producen significados mediante discursos oficiales y reformas legales que buscan sostener credibilidad externa, desde el enfoque del Sistema-Mundo, refleja la subordinación estructural de Costa Rica como periferia funcional en la cadena global del narcotráfico, donde la cooperación con Estados Unidos se convierte en un mecanismo simbólico de credibilidad, aun cuando implique pérdida relativa de autonomía.

La narcocultura, introduce un proceso de normalización de la violencia que erosiona la legitimidad estatal y configura nuevas formas de reconocimiento social, este proceso muestra cómo deja de percibirse como anomalía y se integra en la vida cotidiana, legitimada culturalmente en comunidades vulnerables.

En México, los narcocorridos y las narconovelas han exaltado la figura del sicario como héroe trágico, legitimando su papel en la movilidad social, “los cárteles mexicanos han recurrido al reclutamiento forzado de adolescentes, quienes son obligados a participar en actividades criminales bajo amenaza de muerte o violencia contra sus familias” (Astorga, 2016, p.19), esta dinámica cultural convierte la violencia en un recurso narrativo que refuerza la identidad colectiva de comunidades marginadas.

En Colombia, la violencia se integró en la vida cotidiana a través de prácticas como las “balas rezadas” y el culto a la Virgen de los Sicarios, la obra literaria *La Virgen de los Sicarios* (Vallejo, 1994) ejemplifica esta normalización, Vallejo describe un Medellín donde los jóvenes sicarios encuentran en la violencia una forma de reconocimiento y movilidad social. En palabras del autor; “Los sicarios son los ángeles exterminadores de esta ciudad, los hijos de la Virgen que bendice las balas” (Vallejo, 1994, p.32). Esta narrativa muestra cómo la religiosidad popular se entrelaza con la violencia, legitimando el asesinato como práctica aceptada y casi ritualizada.

El sicariato, lejos de ser percibido como anomalía, se convierte en parte del tejido social, “el sicariato se convirtió en una forma de movilidad social para jóvenes de sectores marginales” (Salazar, 1990, p.77), la literatura de Vallejo refuerza este diagnóstico al mostrar cómo la violencia se ritualiza y se legitima culturalmente, proyectando una imagen internacional de Colombia como un Estado penetrado por dinámicas criminales.

Desde el marco del *habitus*, la narrativa de Vallejo permite comprender que la violencia no solo se ejerce, sino que se interioriza como disposición cultural. El sicario se convierte en símbolo de poder y movilidad social, mientras que la religiosidad popular otorga legitimidad simbólica a sus actos, esta normalización de la violencia condiciona la seguridad regional y obliga a Estados como Costa Rica a reconocer que la narcocultura no es únicamente un problema criminal, también un fenómeno cultural que erosiona la legitimidad estatal y proyecta vulnerabilidad en la relación bilateral con Estados Unidos.

En relación con la literatura y la producción cultural refuerzan esta normalización; en Colombia, la Virgen de los Sicarios de Vallejo (1994) muestra cómo la religiosidad popular legitima la violencia como práctica cotidiana; en México, los narcocorridos exaltan al sicario como héroe trágico y en Costa Rica, aunque en una fase incipiente, la narcocultura comienza a reproducirse en comunidades vulnerables, erosionando la credibilidad institucional, “la narcocultura opera como un lenguaje transnacional que redefine la legitimación estatal y la cooperación internacional” (Ramírez, 2021, p.112).

La importancia de este enfoque radica en que la narcocultura no solo desafía la seguridad interna, ahora bien condiciona la proyección internacional de los Estados, las reformas legales y los discursos oficiales en Costa Rica; como la reforma constitucional de 2025 sobre extradición de nacionales, deben interpretarse como gestos de diplomacia simbólica, destinados a sostener la credibilidad internacional frente a Estados Unidos y Europa, “los acuerdos bilaterales en materia de seguridad se convierten en instrumentos de legitimación internacional, más allá de su efectividad real en la reducción del narcotráfico” (Hernández, 2022, p.133).

Sin embargo, estudiar la narcocultura desde la perspectiva del *habitus* y su dimensión simbólica permite reconocer que la cooperación bilateral Costa Rica- Estados Unidos no enfrenta únicamente estructuras criminales, sino también narrativas culturales que legitiman la violencia y el narcotráfico como formas de poder, este enfoque otorga densidad teórica y comparativa al análisis, mostrando que la narcocultura es un fenómeno transnacional que condiciona tanto la legitimidad estatal como la credibilidad internacional de Costa Rica en el sistema regional.

4.3.2 Política exterior costarricense

La política exterior costarricense se ha caracterizado por proyectar una imagen de democracia pacífica y defensora de los derechos humanos, “la soberanía costarricense se ha sustentado en la imagen de un Estado pacífico, sin ejército, que privilegia la diplomacia y el derecho internacional” (Muñoz Guillén, 1997, p.42). Sin embargo, entre 2021 y 2025 esta narrativa se vio tensionada por la necesidad de responder a la expansión del narcotráfico y la narcocultura, lo que obligó al país a redefinir su papel en la cooperación internacional.

La relación con Estados Unidos ha sido central en la agenda diplomática costarricense, “la cooperación internacional en materia de drogas ha implicado por los Estados latinoamericanos un dilema entre autonomía y credibilidad externa” (Ortiz Ruíz, 2020, p.73), Costa Rica enfrentó este dilema de manera directa, aceptando mayor presencia de agencias estadounidenses como la DEA y el FBI, y aprobando reformas legales como la extradición de nacionales en 2025, estas medidas reforzaron la credibilidad internacional del país, pero también evidenciaron una subordinación estructural frente al centro consumidor.

Este proceso puede comprenderse mejor desde la noción de *habitus* de Bourdieu, pues la política exterior costarricense refleja disposiciones históricas; legalidad, democracia pacífica, cooperación internacional, que han configurado su identidad estatal. Pues, la irrupción de la narcocultura introduce un *habitus* alternativo, basado en la ostentación, los símbolos religiosos vinculados al crimen y la legitimación de la violencia, que tensiona la narrativa oficial y obliga al Estado a reforzar su diplomacia como mecanismo de legitimación.

La cooperación internacional no se limitó al plano bilateral, Costa Rica fortaleció vínculos con Europol y organismos multilaterales, recibiendo apoyo tecnológico y capacitación en operaciones conjuntas, “las políticas de seguridad regional suelen responder más a la necesidad de mostrar resultados inmediatos que a la construcción de capacidades sostenibles” (Garzón, 2018, p.122), la participación de Costa Rica en foros multilaterales buscó proyectar resultados visibles contra el narcotráfico, aunque la sostenibilidad de estas acciones sigue siendo un reto.

La narcocultura, como fenómeno transnacional, también condiciona la política exterior costarricense, “la narcocultura redefine la relación entre Estado y sociedad, erosionando las bases de legitimidad que sostienen la democracia” (Becerra Romero, 2018, p.64). En el plano internacional, esta erosión obliga a Costa Rica a reforzar su diplomacia como mecanismo de legitimación, utilizando la cooperación y las reformas legales como símbolos de compromiso frente al crimen organizado.

En cuanto a la imagen internacional de Costa Rica ha estado históricamente vinculada con su condición de democracia estable y pacífica, proyectando como un modelo regional de institucionalidad, “la política exterior costarricense se ha sustentado en la construcción de

una reputación de confiabilidad democrática, que ha permitido acceder a cooperación y legitimidad internacional” (Cordero, 2019, p.88), esta reputación ha sido un activo diplomático fundamental, diferenciando al país de sus vecinos centroamericanos marcados por conflictos armados y regímenes autoritarios.

No obstante, la expansión del narcotráfico y la narcocultura entre 2021 y 2025 ha tensionado esta narrativa, “la penetración del crimen organizado en Costa Rica ha generado una percepción internacional de vulnerabilidad, cuestionando la capacidad del Estado para sostener su imagen de democracia ejemplar” (Vargas, 2023, p.54). La paradoja radica en que, aunque Costa Rica sigue siendo vista como un socio confiable en foros multilaterales, la presencia de economías ilícitas y el aumento de la violencia proyectan una fragilidad institucional que erosiona su credibilidad.

4.3.3 Enfoques culturales en Relaciones Internacionales: soft power y diplomacia simbólica

El análisis de la narcocultura y su impacto sobre la imagen estatal requiere incorporar los enfoques culturales de Relaciones Internacionales, particularmente el concepto de soft power y la noción de diplomacia simbólica, estos enfoques permiten la comprensión de cómo los Estados proyectan su identidad y legitimidad en el sistema internacional a través de narrativas, símbolos y prácticas culturales.

Joseph Nye (2004) define el soft power como “la capacidad de un Estado de influir en otros a través de la atracción y la legitimidad, más que mediante la coerción o el pago” (p.5). En este sentido, la narcocultura erosiona el soft power de los Estados latinoamericanos al proyectar narrativas de violencia, corrupción y penetración institucional, México y Colombia han visto como su reputación internacional se asocia con el narcotráfico, mientras que Costa Rica enfrenta el reto de mantener su imagen de democracia pacífica frente a narrativas externas que lo presentan como corredor estratégico del crimen organizado.

Los enfoques culturales de Relaciones Internacionales como el soft power y la diplomacia simbólica permiten comprender cómo Costa Rica proyecta su legitimidad en el sistema internacional, la narcocultura erosiona este poder blando al proyectar narrativas de violencia y corrupción, mientras que la diplomacia simbólica costarricense busca

contrarrestar esa erosión mediante reformas legales y discursos oficiales que funcionan como actos performativos de credibilidad.

Concretamente, Costa Rica ha construido históricamente su *soft power* en torno a la narrativa de democracia pacífica, abolición del ejército y respeto a los derechos humanos, sin embargo la penetración de la narcocultura y la necesidad de cooperación con Estados Unidos han condicionado esta diplomacia simbólica, diversos autores sostienen que la reforma constitucional de 2025 sobre extradición de nacionales se interpretó como un acto simbólico que proyectó a Costa Rica como Estado confiable pero subordinado, desde el constructivismo esto refleja cómo las identidades y narrativas compartidas moldean la cooperación internacional y la imagen estatal.

Por su parte, la diplomacia simbólica se refiere al uso de símbolos, narrativas y prácticas culturales para proyectar legitimidad internacional. Chernobrov (2016) sostiene que “la diplomacia simbólica se basa en la capacidad de los Estados de controlar narrativas y significados que definen su identidad internacional” (p. 28). En el caso de la narcocultura, los símbolos religiosos (Malverde en México, la Virgen de los Sicarios en Colombia), las narconovelas y los narcocorridos se convierten en narrativas transnacionales las cuales disputan la diplomacia simbólica de los Estados, proyectando imágenes alternativas que tensionan su reputación.

No obstante, la diplomacia simbólica no se limita a expresiones culturales populares, sino también a reformas legales y discursos oficiales que funcionan como actos performativos en el plano internacional, “las políticas de seguridad en América Latina funcionan también como actos performativos que buscan credibilidad internacional más que eficacia interna” (Tickner, 2018, p.64). En Costa Rica, la reforma de extradición de 2025 y los discursos presidenciales que la acompañaron constituyeron gestos diplomáticos destinados a reforzar la confianza de Estados Unidos y Europa en la capacidad del país para enfrentar el crimen organizado, de manera similar, México con el Plan Mérida y Colombia con Plan Colombia utilizaron reformas legales y narrativas oficiales como símbolos de cooperación y confiabilidad, aun cuando su impacto interno fue limitado.

Tabla 3: Expresiones culturales de la narcocultura y su impacto en la diplomacia

País	Expresiones culturales de la narcocultura	Impacto simbólico interno	Efectos en la diplomacia simbólica
México	Narcocorridos, culto a la Santa Muerte, estética ostentosa del narco	Legitiman al capo como héroe social y benefactor comunitario	Narrativa alternativa de poder y protección vinculada al crimen organizado, proyectada internacionalmente
Colombia	Exaltación de Pablo Escobar, narconovelas (<i>Rosario Tijeras</i> , <i>La Virgen de los Sicarios</i>), simbolismo religioso	Escobar como “Robin Hood paisa”, legitimación del narco como proveedor de orden	Escobar como “Robin Hood paisa”, legitimación del narco como proveedor de orden
Costa Rica	Narrativa histórica de abolición del ejército y defensa de derechos humanos; penetración incipiente de símbolos narco	Democracia pacífica tensionada por narrativas externas de vulnerabilidad	Reforma constitucional de 2025 sobre extradición como acto simbólico: refuerza credibilidad internacional, pero evidencia subordinación a intereses externos

Nota: Elaboración propia con base en Muñoz Guillén (1997), Salazar, (1990), Vallejo (1994), Ortiz Ruíz (2020), Garzón (2018), Becerra Romero (2018), Cordero (2019), Vargás (2023).

La narcocultura, al convertirse en narrativa transnacional, disputa el *soft power* y la diplomacia simbólica de los Estados latinoamericanos. Esto implica que la lucha contra el narcotráfico no solo es material, sino también simbólica: se trata de controlar los significados circulantes en el sistema internacional y que definen la identidad de los Estados. Las reformas legales y los discursos oficiales, más allá de su eficiencia interna, funcionan como gestos diplomáticos performativos que buscan sostener credibilidad ante el centro consumidor y los organismos multilaterales, la diplomacia simbólica se convierte en un campo de disputa entre narrativas estatales de legitimidad y narrativas criminales de poder.

4.3.4 Relación Bilateral Costa Rica-Estados Unidos de América

La cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de narcotráfico no se limita a la presencia de agencias como la DEA y el FBI, sino que se ha institucionalizado a través de programas de seguridad y asistencia técnica. Estos programas

incluyen transferencia de tecnología, capacitación de cuerpos policiales y fortalecimiento de la capacidad judicial. Según Tickner (2008), “los actos performativos de credibilidad internacional en torno al narcotráfico proyectan a los Estados como comprometidos con la seguridad hemisférica, aunque los resultados internos sean limitados” (p. 45). En el caso costarricense, la cooperación se convierte en un mecanismo simbólico de legitimación frente a la comunidad internacional.

Así pues, la transferencia tecnológica ha sido un eje central, con la incorporación de sistemas de vigilancia marítima y aérea, así como plataformas digitales para el intercambio de información. Esto ha permitido mejorar la capacidad operativa del país, aunque también ha generado una dependencia estructural de los recursos estadounidenses. Como advierte Garzón (2018), “las políticas de seguridad regional suelen responder más a la necesidad de mostrar resultados inmediatos que a la construcción de capacidades sostenibles” (p. 122).

En el plano judicial, la cooperación se ha traducido en programas de formación para jueces y fiscales en materia de crimen organizado y lavado de dinero. Sin embargo, esta asistencia técnica también ha evidenciado las limitaciones internas del sistema judicial costarricense, que enfrenta sobrecarga procesal y falta de recursos. Ortiz Ruíz (2020) señala que “la cooperación internacional en materia de drogas obliga a los Estados a equilibrar su autonomía con la necesidad de proyectar credibilidad externa” (p. 73), esto en el caso de Costa Rica se traduce en aceptar reformas legales y prácticas judiciales influenciadas por la agenda estadounidense.

La relación bilateral refleja una asimetría estructural: mientras Costa Rica proyecta credibilidad internacional como democracia confiable, su capacidad de respuesta depende en gran medida de la asistencia externa. Esta paradoja muestra que la política exterior costarricense se sostiene en una diplomacia simbólica para equilibrar autonomía y dependencia, legitimidad interna y credibilidad externa.

La presión diplomática ejercida por Estados Unidos sobre Costa Rica durante el periodo 2021-2025 se manifestó en reformas legales y discursos oficiales que funcionaron como gestos de credibilidad internacional, estos actos, más allá de su eficacia interna, se convirtieron en símbolos performativos que proyectaron la imagen de Costa Rica como un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico, aunque a costa de su autonomía nacional.

La aprobación de la reforma que permitió la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo fue resultado de exigencias externas, “las políticas de seguridad en América Latina funcionan también como actos performativos que buscan credibilidad internacional más que eficacia interna” (Tickner, 2018, p.64), la reforma costarricense debe interpretarse como un gesto diplomático que reforzó la confianza de Washington y Europa en la capacidad del país para enfrentar el crimen organizado, más que como una medida orientada a resolver las dinámicas internas de la narcocultura.

En este caso, los discursos emitidos por el Poder Ejecutivo y la Cancillería acompañaron la reforma como parte de una estrategia de diplomacia simbólica, “los Estados producen significados mediante narrativas oficiales que buscan legitimar su posición en el sistema internacional” (Chernobrov, 2016, p.92). En Costa Rica, los comunicados oficiales enfatizaron la voluntad de cooperación y el compromiso con la seguridad hemisférica, proyectando una narrativa de confiabilidad que reforzó la legitimidad externa del país.

La presión diplomática fortaleció la credibilidad internacional de Costa Rica, pero también evidenció su subordinación a las exigencias externas, desde la teoría de la diplomacia coercitiva, “los Estados poderosos utilizan la amenaza de sanciones o la promesa de beneficios para inducir cambios en las políticas de los Estados más débiles” (George, 1991, p.5). En este caso, la reforma de extradición y los discursos oficiales reflejan cómo Costa Rica ajustó su marco jurídico y narrativo para alinearse con las expectativas de Estados Unidos, desde la noción de legitimidad performativa (Habermas, 1996), estas acciones pueden interpretarse como gestos que sostienen la confianza internacional, aun cuando su impacto interno sea limitado.

La presión diplomática durante 2021-2025 operó como un mecanismo de condicionamiento que reforzó la credibilidad internacional de Costa Rica, pero también consolidó su dependencia estructural, la reforma constitucional y los discursos oficiales deben entenderse como actos simbólicos los cuales proyectan confiabilidad hacia el exterior, mientras que hacia el interior revelan la tensión entre autonomía nacional y subordinación diplomática.

4.3.5 Influencia en la seguridad regional

La narcocultura, al configurarse como narrativa transnacional, impacta directamente en la seguridad regional no se trata únicamente de flujos de drogas, sino de la circulación de símbolos y prácticas que legitiman la violencia u erosionan la autoridad estatal, “las políticas de seguridad regional suelen responder más a la necesidad de mostrar resultados inmediatos que a la construcción de capacidades sostenibles” (Garzón, 2018, p.122), Costa Rica es obligada a participar en operaciones conjuntas y foros multilaterales, proyectando resultados visibles para sostener su credibilidad, aunque la sostenibilidad de estas acciones permanezca en duda.

El habitus narco, al trascender fronteras, se reproduce en sectores juveniles, donde la violencia y el consumo ostentoso se convierten en símbolos de estatus y reconocimiento social, “las disposiciones del habitus generan prácticas ajustadas a las estructuras sociales, reproduciendo jerarquías y legitimidades” (Bourdieu, 1980, p.88), los jóvenes interiorizan narrativas culturales que legitiman la violencia como vía de movilidad social.

En el caso mexicano, “los jóvenes reclutados por los cárteles encuentran en el sicariato una forma de integración social, donde la violencia se convierte en un recurso de identidad y pertenencia” (Astorga, 2005, p.214), esta dinámica muestra cómo la narcocultura ofrece un espacio simbólico de reconocimiento en contextos de exclusión.

Mientras tanto, en Colombia, “el sicariato se convirtió en una forma de movilidad social para jóvenes de sectores marginales” (Salazar, 1990, p.77), reforzando la idea de que la violencia se normaliza como práctica aceptada, “la cultura del sicariato en Medellín se convirtió en un referente juvenil, donde la violencia se ritualiza y se legitima como forma de pertenencia y poder” (Perea Restrepo, 2013, p.102).

En Costa Rica, aunque la narcocultura se encuentra en una fase incipiente, comienzan a observarse patrones similares en comunidades costeras y fronterizas, “el crimen organizado en Centroamérica ha logrado infiltrarse en gobiernos locales, condicionando agendas políticas y debilitándola legitimidad institucional” (Bravo Fierro, 2025, p.98), los jóvenes se convierten en actores vulnerables, expuestos a narrativas que legitiman la violencia y el consumo ostentoso como símbolos de estatus.

Desde la perspectiva del Sistema-Mundo de Wallerstein, Costa Rica ocupa una posición de periferia funcional en la cadena global del narcotráfico; no es productor ni gran consumidor, pero sí territorio de tránsito y almacenamiento, esta condición lo obliga a depender de la cooperación con Estados Unidos que maneja la narrativa de seguridad y define las reglas del juego, “la cooperación internacional en materia de drogas ha implicado para los Estados latinoamericanos un dilema entre autonomía y credibilidad externa” (Ortiz Ruíz, 2020, p. 73), en el caso costarricense, aceptar mayor presencia de agencias estadounidenses y reformas legales como la extradición de nacionales en 2025 refuerza su credibilidad internacional, pero también evidencia subordinación estructural frente al centro consumidor.

4.3.6 Comparación regional

El análisis de la cooperación internacional frente al narcotráfico en América Latina revela que los mecanismos implementados en México, Colombia y Costa Rica han compartido una lógica común; más allá de sus resultados operativos, han funcionado como gestos simbólicos de credibilidad internacional. El plan Mérida en México, el Plan Colombia y la reforma constitucional de 2025 en Costa Rica muestran cómo las reformas legales y los acuerdos bilaterales se convierten en instrumentos de diplomacia simbólica, reforzando la reputación de los Estados ante socios estratégicos como Estados Unidos.

Estos casos permiten la observación de la legitimidad internacional se construye tanto en el plano jurídico; mediante modificaciones constitucionales y penales, como en el plano narrativo, proyectando la imagen de compromiso frente al crimen organizado, también evidencian una dependencia estructural de los países periféricos respecto al centro consumidor, esto tensiona la autonomía estatal y coloca a Costa Rica en una posición de periferia funcional dentro del Sistema-Mundo.

Tabla 4: Comparación regional de mecanismos de cooperación antidrogas y reformas legales

País	Mecanismo principal	Factores legales incluidos	Impacto simbólico	Efectos en la legitimidad y credibilidad internacional
México	Plan Mérida (2008)	Reformas a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal Federal para tipificar delitos vinculados con el crimen organizado; acuerdos bilaterales de asistencia técnica y transferencia tecnológica	Acto de confianza mutua con EE, UU., símbolo de cooperación hemisférica	Refuerza credibilidad internacional, pero evidencia dependencia de recursos externos (Shirk, 2011)
Colombia	Plan Colombia (2000)	Reformas a la Constitución de 1991 (art. 35) que habilitaron la extradición de nacionales; modificaciones al Código Penal y leyes sobre lavado de activos; cooperación militar y policial	Acto performativo de credibilidad ante EE. UU., narrativa de compromiso hemisférico	Proyecta a Colombia como socio confiable, aunque los resultados internos fueron limitados (Tickner, 2008)
Costa Rica	Reforma Constitucional de 2025 (extradición de nacionales)	Modificación del artículo 32 de la Constitución Política, que antes prohibía la extradición en casos de narcotráfico y terrorismo; aprobación de leyes complementarias de cooperación	Acto simbólico de diplomacia, gesto de compromiso frente al crimen organizado	Refuerza reputación democrática, pero evidencia subordinación estructural frente al centro consumidor (Hernandez, 2022)

Nota: Elaboración propia con base en Shirk (2011), Tickner (2008), Hernández (2022), Constitución Política de Costa Rica (2025), Constitución Política de Colombia (1991).

La comparación muestra que, aunque cada país adoptó mecanismos distintos de cooperación antidrogas, todos recurrieron a reformas legales como actos performativos de credibilidad internacional. En México, el plan Mérida simbolizó confianza mutua con Estados Unidos, pero evidenció dependencia de recursos externos (Shirk, 2011). En Colombia, el Plan Colombia proyectó al país como socio confiable mediante la extradición de nacionales y cooperación militar, aunque los resultados internos fueron limitados (Tickner, 2008).

En el caso costarricense, la reforma constitucional de 2025 sobre extradición de nacionales se interpretó como un gesto simbólico de diplomacia, reforzando su reputación democrática, pero también evidenciando subordinación estructural frente al centro consumidor estadounidense (Hernández, 2022), estos ejemplos confirman que las políticas de seguridad regional.

4.4 La narcocultura como parte de la disputa simbólica entre Costa Rica- Estados Unidos de América.

4.4.1 Dimensión

La narcocultura se presenta como una narrativa alternativa que compite con la imagen de Costa Rica como democracia pacífica y confiable, esta disputa simbólica pone en tensión la reputación del Estado costarricense, que ha construido su identidad internacional sobre la base de la estabilidad política, el respeto a los derechos humanos y la ausencia de fuerzas armadas, con una cultura emergente que legitima la violencia, la ostentación y la movilidad social ilícita.

Mientras el Estado proyecta una imagen de democracia pacífica y orden institucional, la narcocultura introduce símbolos y prácticas que desafían este narrativo oficial, “la narcocultura en Costa Rica se manifiesta a través de expresiones culturales como los narcocorridos, la moda ostentosa y la adopción de símbolos religiosos que legitiman la violencia y el prestigio comunitario” (Grady, 2023). Esta cultura alternativa erosiona la percepción de Costa Rica como un país seguro y pacífico, generando una disputa simbólica que trasciende lo local y se inserta en la arena internacional.

Esta tensión puede interpretarse como un choque entre *habitus* contrapuestos; el estatal, basado en la democracia pacífica, la cooperación internacional y el narco, que legitima la violencia y la ostentación como formas de movilidad social.

Desde una perspectiva constructivista, esta disputa simbólica puede entenderse como una lucha por la definición de la realidad social y política, “las identidades y los intereses de los actores internacionales se construyen socialmente a través de interacciones y discursos” (Wendt, 1999), la narcocultura desafía la narrativa estatal al ofrecer una identidad alternativa que compite por legitimidad tanto dentro como fuera de Costa Rica.

Por otro lado, Estados Unidos proyecta su hegemonía simbólica mediante campañas antidrogas y discursos oficiales que buscan mantener una imagen de seguridad y democracia en la región, esta hegemonía simbólica se manifiesta en la construcción de una narrativa que presenta a Estados Unidos como el garante de la estabilidad hemisférica y la lucha contra el narcotráfico, imponiendo un marco interpretativo que condiciona las políticas internas de Costa Rica, “la presión estadounidense ha llevado a Costa Rica a implementar reformas legales, como la reforma de extradición de 2025, que tensionan la soberanía judicial del país pero buscan sostener la credibilidad internacional” (Cordero Mora, 2022).

Esta reforma, aunque polémica, refleja la necesidad de Costa Rica de alinearse con las expectativas del centro hegemónico para mantener su posición en el sistema internacional y evitar sanciones o pérdida de apoyo diplomático, “la narrativa estadounidense enfatiza la cooperación bilateral como un mecanismo para fortalecer la seguridad regional, lo que legitima la intervención simbólica y práctica en la política costarricense, generando tensiones sobre soberanía y dependencia simbólica” (Mata Chavarría y Chamizo García, 2022).

Esta dinámica refleja la lógica centro-periferia por la teoría del Sistema-Mundo, que sostiene que “los países periféricos están estructuralmente subordinados a los centros hegemónicos, no solo en términos económicos, sino también en la producción y control de significados y legitimidad” (Wallerstein, 2004, p.89), Costa Rica como país periférico, es obligada a alinearse con las definiciones y demandas simbólicas del centro hegemónico estadounidense, esto condiciona su política exterior y su imagen internacional.

Esta subordinación simbólica implica que las narrativas oficiales costarricenses deben adaptarse para mantener la credibilidad y el apoyo internacional, incluso cuando ello tensiona la soberanía y autonomía nacional, este fenómeno se evidencia en la manera en que Costa Rica ha debido modificar sus discursos, así como las políticas para responder a las presiones externas, especialmente en materia de seguridad y lucha antidrogas.

La imposición de una narrativa hegemónica estadounidense no solo afecta la política interna, también redefine la identidad internacional costarricense, generando un espacio de tensión entre la autonomía nacional y la necesidad de legitimidad global (Peetz, 2008), “la construcción discursiva de la violencia y la seguridad en América Central está profundamente influenciada por las dinámicas de poder globales, donde las narrativas dominantes moldean las políticas y percepciones locales” (Peetz, 2008, p. 15).

La narcocultura se difunde a través de múltiples canales simbólicos que incluyen narcocorridos, series televisivas y plataformas digitales, configurando un lenguaje compartido que legitima la violencia, la ostentación y la movilidad social ilícita como aspiraciones legítimas dentro de ciertos sectores, “la música y los medios audiovisuales actúan como vehículos poderosos para la construcción y difusión de identidades vinculadas al narcotráfico, creando un imaginario cultural que trasciende las fronteras nacionales” (Astorga, 2013, p. 45).

En el contexto costarricense, esta difusión ha encontrado un terreno fértil especialmente entre la juventud, pues a través de las redes sociales adopta y adapta estos símbolos, generando un imaginario cultural que desafía y tensiona la narrativa oficial del Estado sobre Costa Rica como una democracia pacífica y estable, “la penetración de la narcocultura en espacios digitales ha transformado las percepciones juveniles sobre el poder, el éxito y la legitimidad social, erosionando las narrativas tradicionales de legalidad y orden” (Pérez, 2021, p. 102).

Este fenómeno no solo implica una circulación simbólica interna, incluso se inscribe en un contexto transnacional donde la narcocultura se conecta con dinámicas regionales y globales, reforzando la disputa simbólica entre Costa Rica y Estados Unidos, la circulación de estos símbolos y narrativas crean un espacio de contestación cultural que desafía las

definiciones hegemónicas impuestas desde el centro, evidenciando la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno (Astorga, 2013; Pérez, 2021).

La disputa simbólica entre la narcocultura y la narrativa estatal en Costa Rica representa un choque profundo entre dos visiones contrapuestas de identidad y legitimidad social, por un lado, la narrativa narco se fundamenta en la movilidad social ilícita, el prestigio comunitario y la utilización de símbolos religiosos y culturales los cuales legitiman la violencia y el poder alternativo dentro de ciertos sectores sociales. Esta narrativa desafía abiertamente las normas estatales, generando un sentido de identidad y pertenencia que trasciende lo legal y se arraiga en prácticas y valores que reconfiguran el tejido social (Astorga, 2013; Grady, 2023).

Para comprender esta disputa simbólica con mayor profundidad, es útil incorporar el concepto de *habitus* de Pierre Bourdieu, que se refiere a “los esquemas duraderos y transferibles de percepción, pensamiento y acción” que configuran las prácticas sociales y las disposiciones de los individuos dentro de un campo social (Bourdieu, 1990, p. 53), la narcocultura puede entenderse como un *habitus* que moldea las percepciones y comportamientos de ciertos sectores sociales, legitimando la violencia y la ostentación como formas de movilidad social y prestigio comunitario, en contraste con el *habitus* estatal que promueve la legalidad, la democracia pacífica y la cooperación internacional.

Por lo tanto, la narrativa estatal y diplomática enfatiza la democracia pacífica, la legalidad, la cooperación internacional y la defensa de la soberanía nacional, esta visión busca mantener la imagen de Costa Rica como un actor confiable y estable en la arena internacional, sustentando su legitimidad en la adhesión a normas internacionales y en la promoción de un orden basado en el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad (Mata Chavarría & Chamizo García, 2022).

La dimensión cultural del objetivo evidencia que la política exterior costarricense se encuentra atrapada en una disputa simbólica entre *habitus* contrapuestos: el estatal, que sustenta la reputación democrática y pacífica del país, y el narco, que erosiona esa legitimidad mediante símbolos de violencia y ostentación, esta tensión revela que la credibilidad internacional de Costa Rica depende tanto de gestos diplomáticos y reformas legales como

de su capacidad para resistir narrativas transnacionales que redefinen su identidad y soberanía.

4.4.2 Habitus narco vs. Juventud

Para el análisis del habitus narco en relación con la juventud costarricense, se incorporó como fuente primaria la entrevista realizada a la Dra. Eyling Jáenz Donaire especialista en psicología criminológica, esta entrevista aporta evidencia empírica sobre cómo la narcocultura redefine las aspiraciones juveniles, transforma el concepto de éxito y ofrece mecanismos de identidad y pertenencia que compiten con las narrativas estatales de democracia pacífica y legalidad.

El testimonio de Jáenz resulta relevante porque permite observar la interiorización de disposiciones culturales en adolescentes y jóvenes, quienes son reclutados como mano de obra barata y encuentran en las células criminales un espacio de reconocimiento social, de esta manera, la entrevista complementa el marco teórico de Bourdieu (1990) sobre el habitus, al mostrar cómo las practicas narco se convierten en esquemas duraderos de percepción y acción que tensionan la legitimidad estatal y la política exterior costarricense.

No obstante, el habitus narco se manifiesta con especial fuerza en la juventud costarricense, pues los adolescentes y jóvenes se encuentran en una etapa de formación identitaria en donde las disposiciones culturales se interiorizan con mayor facilidad, como señala Jáenz la corteza frontal; responsable de la toma consciente de decisiones, se desarrolla plenamente hasta los 25 o 30 años, lo que concierne a este grupo en un terreno fértil para la influencia de narrativas alternativas vinculadas con el narcotráfico (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

La narcocultura en Costa Rica está llenando vacíos de identidad, especialmente en jóvenes que se vinculan con bandas y sicariato como un mecanismo de reconocimiento comunitario” (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), esta afirmación complementa lo señalado por Jaenz, quien advierte que los adolescentes, aun en procesos de formación identitaria, son reclutados como mano de obra barata, ambas perspectivas refuerzan la idea de que el habitus narco se interioriza en la juventud como una alternativa simbólica frente a la ausencia de apoyo familiar e institucional (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

La narcocultura redefine el concepto de éxito juvenil, desplazando aspiraciones tradicionales hacia la búsqueda de dinero rápido, ostentación y prestigio comunitario. Según Jáenz, “ahora el concepto de éxito esta difuminado... ya no es quiero estudiar, quiero trabajar... ahora es quiero tener plata, quiero tener una mujer bonita” (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026), este cambio refleja la interiorización de un habitus alternativo que legitima la violencia y la ostentación como formas de movilidad social.

Por otra parte, la música, la religiosidad popular y la estética visual son los símbolos más visibles de la narcocultura en Costa Rica (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), estos elementos refuerzan la redefinición del éxito juvenil, que deja de asociarse con profesiones tradicionales y se vincula con dinero rápido, ostentación y prestigio comunitario. Jaenz ya había señalado que los jóvenes aspiran a “tener plata y una mujer bonita” en lugar de estudiar o trabajar (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026), la coincidencia entre ambas entrevistas muestra cómo el habitus narco desplaza las aspiraciones legítimas hacia narrativas de lujo y violencia.

A su vez, la entrevista también evidencia cómo los símbolos narco; moda ostentosa, estética “buchona”, altares religiosos como la Santa Muerte o Jesús Malverde, funcionan como mecanismos de identidad y pertenencia. En ausencia de afecto o valores sólidos, los jóvenes encuentran en las células criminales una “familia sustituta” que les otorga reconocimiento y sentido de pertenencia (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026), este fenómeno coincide con la teoría de Bourdieu (1990), en donde el habitus se configura como un esquema duradero de percepción y acción que moldea prácticas sociales.

En Costa Rica se han visto altares de la Santa Muerte y de Jesús Malverde en allanamientos, por lo tanto evidencia una apropiación simbólica de prácticas religiosas asociadas al narcotráfico (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), este hallazgo complementa lo descrito por Jaenz sobre la función de las células criminales como “familias sustitutas”, ambos testimonios muestran que los símbolos narco; ya sean religiosos, musicales o estéticos, funcionan como mecanismos de pertenencia y legitimidad para los jóvenes (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

Asimismo, la Dra. Jaenz advierte que Costa Rica está replicando patrones observados en México y Colombia; sicarios en moto, violencia publica y cultos religiosos asociados al crimen, “en Costa Rica se está viendo lo que se veía en México hace 20 años... en Colombia en los ochentas vimos como el narcotráfico se metió en política” (E, Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026), esto demuestra la transnacionalización del habitus narco, que circula y se adapta en distintos contextos juveniles.

Han aparecido grafitis con referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación, esto demuestra la rápida transnacionalización de la narcocultura en Costa Rica (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), este fenómeno coincide con lo señalado por Jaenz quien advierte que Costa Rica está replicando patrones de México y Colombia, como los sicarios en moto y la violencia publica, la integración de ambas entrevistas evidencia que el habitus narco circula y se adapta en distintos contextos juveniles, erosionando la narrativa estatal de democracia pacífica (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

Sin embargo, la prevención aparece como el principal mecanismo de resistencia frente a la interiorización del habitus narco, Jáenz enfatiza que “no tenemos que esperar que pase la desgracia... tenemos que trabajar desde la prevención. ¿Y dónde empieza la prevención? En el hogar” (E, Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026), la educación y la transmisión de valores familiares se convierten en herramientas fundamentales para contrarrestar la legitimidad simbólica que la narcocultura ofrece a los jóvenes.

La narcocultura erosiona el capital simbólico que Costa Rica había acumulado por décadas como democracia pacífica (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), esta advertencia complementa la afirmación de Jáenz de que la prevención debe comenzar en el hogar, ambas entrevistas coinciden en que la educación y los valores familiares son las principales herramientas para contrarrestar la legitimidad simbólica que la narcocultura ofrece a los jóvenes.

La evidencia comunitaria recogida por la Fundación Bandera Blanca por parte de su colaboradora María Isabel Barrantes, aporta una dimensión practica al análisis del habitus narco en la juventud costarricense (M. Barrantes, comunicación personal, 15 de julio de 2026). A diferencia de los enfoques criminológicos de Jáenz y Molina, esta experiencia

muestra cómo la narcocultura se interioriza desde la infancia a través de la normalización de la violencia en el hogar y la exposición cotidiana a familiares involucrados en drogas o cárcel, en este contexto, los niños y adolescentes asumen como natural la participación en actividades ilícitas, incluso cuando ello implica riesgo de muerte o encarcelamiento.

Por otra parte, la fundación documenta casos de ingreso temprano al narcotráfico por necesidad económica, en donde menores de 10 a 12 años trabajan como “mulas” para llevar comida a sus hogares, este hallazgo complementa lo señalado por Jáenz sobre la vulnerabilidad juvenil y por Molina sobre los vacíos de identidad, añadiendo la dimensión socioeconómica como motor de interiorización del *habitus narco* (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026; T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

Otro factor relevante es la deserción escolar y la ausencia de espacios seguros, que facilitan la penetración de símbolos narco como música, religiosidad y estética visual, la fundación advierte que la falta de responsabilidad parental y el hacinamiento refuerzan patrones culturales los cuales legitiman la violencia y el consumo de drogas, en este sentido, se observa también la reproducción de patrones machistas, en donde se inculca a los adolescentes que “ser valiente” significa vender droga o enfrentar la violencia sin miedo, moldeando una masculinidad asociada con el riesgo.

“La educación integral y los programas preventivos se convierten en mecanismos de resistencia frente a la narcocultura, pues talleres socioeducativos, proyectos de vida y espacios recreativos permiten que los adolescentes construyan alternativas identitarias y aspiracionales” (M. Barrantes, comunicación personal, 15 de julio de 2026), este enfoque coincide con la prevención planteada por Jáenz desde el hogar y con la advertencia de Molina sobre la erosión del capital simbólico costarricense, reforzando la necesidad de políticas públicas que integren tanto la dimensión institucional como la comunitaria (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026; T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

4.4.3 Cooperación bilateral, *habitus narco* se globaliza

La cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos de América en materia de narcotráfico se ha transformado en un espacio en donde confluyen dimensiones operativas y simbólicas. Molina (2026) subraya que la reforma de extradición de 2025 “debió haber sido

desde hace mucho tiempo, porque ya el crimen organizado opera acá desde los años noventa” (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), esta afirmación revela que la cooperación no solo responde a coyunturas recientes, sino que se inscribe en una trayectoria histórica de presión estadounidense sobre la región.

Asimismo, la Dra. Eyling Jáenz enfatiza que la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de narcotráfico responde a una necesidad estructural derivada de la posición geográfica del país. En sus palabras, Costa Rica se convierte en un “territorio de paso” obligado para las rutas internacionales, esto genera dependencia de recursos externos para enfrentar un fenómeno que es global y que se mueve con lógicas de franquicia (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026), esta afirmación refuerza la idea de que la cooperación no es coyuntural, sino histórica y que el país ha debido alinearse con Estados Unidos para sostener su capacidad de respuesta.

La autora también advierte que la reforma cumple una función de alineamiento: “habilitar las extradiciones es una señal inequívoca de alineamiento con los estándares de Estados Unidos” (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), este gesto bilateral muestra cómo Costa Rica refuerza su confiabilidad institucional frente a su principal socio estratégico, incluso cuando ello implica reconocer limitaciones internas en la administración de justicia.

Sin embargo, Molina advierte sobre los riesgos de esta subordinación: “La subordinación simbólica más visible se manifiesta en la adopción de marcos conceptuales y categorías analíticas que provienen de la experiencia estadounidense del crimen organizado” (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), en términos gramscianos, esta dinámica puede interpretarse como un ejercicio de hegemonía cultural, en donde Estados Unidos no solo impone mecanismos de seguridad, sino también narrativas que condicionan la manera en que Costa Rica construye su política interna y proyecta su identidad internacional.

La globalización del habitus narco refuerza esta tensión, Molina señala que “han aparecido grafitis que hablan del Mencho... para darle a entender no solo a las comunidades, sino a las bandas rivales, que aquí hay células instaladas del Cártel Jalisco Nueva Generación” (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), este fenómeno

evidencia que los símbolos narco circulan transnacionalmente y que Costa Rica ya no puede sostener la imagen de “oasis de paz” que caracterizó su diplomacia durante décadas.

Por otra parte, la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de narcotráfico se articula en dos planos: el operativo, vinculado al *hard power* y el simbólico, relacionado con la hegemonía cultural. Molina (2026) advierte que Estados Unidos, como potencia militar y política, condiciona la respuesta costarricense: “Es muy peligroso porque Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y el más poderoso en términos militares y de recursos... y un país como Costa Rica, que es una finquita pequeñita de cinco millones de habitantes, tiene que suscribir y alinearse” (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026), esta afirmación muestra cómo el hard power estadounidense se proyecta más allá de la coerción material, generando presión diplomática y política sobre países pequeños y desarmados como Costa Rica.

Jáenz también advierte que la ausencia de ejército y las limitaciones institucionales convierten a Costa Rica en un socio quien necesita apoyo material y técnico: “los recursos internos no alcanzan para enfrentar un fenómeno que es global” (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026), este señalamiento complementa lo expuesto por Molina sobre el hard power estadounidense, mostrando que la cooperación bilateral se sostiene en la asimetría de capacidades entre ambos países.

Jaenz señala que la narcocultura, al replicar patrones de México y Colombia, que tensionan la imagen internacional de Costa Rica y obliga al país a demostrar credibilidad frente a sus socios estratégicos, en este sentido, la cooperación bilateral no solo busca detener cargamentos ilícitos, sino también contener la circulación de significados culturales que cruzan fronteras evidenciando la globalización del habitus narco.

La Dra. Eyling Jáenz recuerda que la participación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en América Latina ha sido constante y profundamente marcada por el uso del hard power. En el caso de Colombia, la intervención se materializó en el Plan Colombia, que combinó asistencia militar, financiamiento y cooperación técnica para enfrentar tanto a los carteles como a las guerrillas vinculadas al narcotráfico. Este antecedente muestra cómo la cooperación bilateral se ha entendido históricamente como un mecanismo

de control geopolítico, más allá de la mera interdicción de drogas (E. Jáenz, 16 de julio de 2026).

En México, la influencia estadounidense se ha manifestado en operaciones conjuntas y en la presión para capturar líderes de alto perfil. Molina (2026) señala que “son los carteles en México los que controlan todo el transporte de esa cocaína... y ahora tienen mucha presencia para mover fentanilo y drogas sintéticas hacia Estados Unidos” (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026). Esta afirmación evidencia que la cooperación bilateral no solo busca detener cargamentos, sino también contener la expansión de mercados ilícitos los cuales afectan directamente a la seguridad estadounidense.

En el caso costarricense, la participación de Estados Unidos se ha intensificado en los últimos años, especialmente con la reforma de extradición de 2025. Molina subraya que “habilitar las extradiciones es una señal inequívoca de alineamiento con los estándares de Estados Unidos” (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026). Jaenz complementa este análisis al señalar que Costa Rica, al carecer de ejército, depende de la asistencia externa: “los recursos internos no alcanzan para enfrentar un fenómeno que es global y que se mueve con lógicas de franquicia” (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026). De esta forma, la cooperación bilateral se convierte en un mecanismo de compensación frente a las limitaciones estructurales del país.

Tanto Jaenz como Molina coinciden en que la narcocultura, al replicar símbolos y narrativas de México y Colombia, tensiona la imagen internacional de Costa Rica y obliga al país a demostrar credibilidad frente a sus socios estratégicos. La aparición de grafitis vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y la difusión de narcocorridos en Costa Rica son ejemplos de cómo el habitus narco se globaliza, generando presiones culturales que trascienden las fronteras nacionales. En este escenario, la cooperación bilateral con Estados Unidos se convierte en un espacio en donde se disputan no solo cargamentos ilícitos, sino también significados culturales que redefinen la identidad internacional de Costa Rica (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026; T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

Desde una lectura gramsciana, esta dinámica refleja un ejercicio de hegemonía cultural: Estados Unidos no solo proyecta su poder militar y jurídico, sino que también

impone narrativas de seguridad que condicionan la manera en que los países latinoamericanos interpretan y enfrentan el narcotráfico. Así, la cooperación bilateral en México, Colombia y Costa Rica muestra una continuidad histórica en la que el *hard power* estadounidense se combina con la influencia cultural para moldear las políticas internas y las imágenes internacionales de sus socios.

La experiencia de María Isabel Barrantes en la Fundación Bandera Blanca muestra que la cooperación internacional y las políticas estatales no pueden desvincularse de la realidad cotidiana de las comunidades (M. Barrantes, comunicación personal, 15 de julio de 2026). Mientras Jáenz y Molina advierten sobre la presión del *hard power* estadounidense y la globalización del *habitus narco*, la fundación evidencia cómo estos procesos se traducen en la normalización de la violencia en los hogares y en la participación temprana de niños y adolescentes en actividades ilícitas. La narcocultura, por tanto, no solo erosiona la imagen internacional de Costa Rica, también se instala en la vida diaria de sus sectores más vulnerables (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026; T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

Por su parte, la fundación subraya que la deserción escolar, la ausencia de espacios seguros y la precariedad económica son factores que alimentan la reproducción del *habitus narco*. Estos hallazgos complementan la visión de Jáenz sobre la dependencia estructural de Costa Rica frente a Estados Unidos y la de Molina sobre la subordinación simbólica, mostrando que la lucha contra el narcotráfico requiere tanto cooperación bilateral como políticas sociales internas las cuales fortalezcan la resiliencia comunitaria (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026; T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

Asimismo, Bandera Blanca aporta una dimensión ética y preventiva: “la idea es que el mismo adolescente... pueda decir no a las drogas” (Fundación Bandera Blanca, comunicación personal, 15 de julio de 2026). Este enfoque evidencia que la resistencia a la narcocultura no puede depender únicamente de la interdicción de cargamentos o de reformas jurídicas, por el contrario debe incluir programas socioeducativos, proyectos de vida y espacios de recreación que permitan la construcción de alternativas identitarias frente al poder simbólico del narcotráfico.

La cooperación bilateral con Estados Unidos es indispensable para enfrentar redes transnacionales y cargamentos ilícitos, pero la experiencia comunitaria demuestra que la verdadera disputa se libra también en el terreno cultural y social. La globalización del *habitus* narco y la hegemonía cultural estadounidense redefinen la posición internacional de Costa Rica, mientras que iniciativas locales como Bandera Blanca muestran que la prevención y la educación son claves para sostener el capital simbólico del país y preservar su narrativa de democracia pacífica.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 Conclusiones.

El capítulo de conclusiones responde de manera integral a la problemática planteada en esta investigación, centrada en la influencia de la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos en la contención de los efectos transnacionales de la narcocultura sobre la seguridad regional durante el periodo 2021.2025. A partir del análisis teórico, documental y de las entrevistas realizadas, se entiende que la narcocultura en Costa Rica no puede abordarse únicamente como un fenómeno cultural interno, sino como parte de una dinámica transnacional la cual condiciona la política exterior del país y tensiona la narrativa histórica de democracia pacífica (Astorga, 2015; Becerra Romero, 2018).

Este capítulo no se limita a resumir los resultados, sino que busca la proyección de las implicaciones de la narcocultura en tres niveles: el interno, en donde se normalizan símbolos, así como las prácticas; el institucional, en donde las reformas legales, además la cooperación bilateral con Estados Unidos se convierten en mecanismos de respuesta, a saber el internacional, en donde la globalización del *habitus* narco y la hegemonía cultural condicionan la posición de Costa Rica en el sistema-mundo (Gramsci, 1971; Wallerstein, 2004).

En el plano sociocultural, la narcocultura se expresa en la normalización de la violencia en los hogares, la penetración de símbolos de ostentación y la influencia de discursos mediáticos, configurándose como un referente aspiracional para sectores juveniles y urbanos y generando un quiebre en el imaginario colectivo costarricense (Molina, 2018; Valenzuela Arce, 2012). En el plano político, la presión para aprobar reformas como la

extradición de nacionales en 2025 refleja la necesidad de sostener credibilidad internacional frente a socios estratégicos, especialmente Estados Unidos.

En este mismo plano, el concepto de *habitus* de Bourdieu (1997) permite comprender cómo la narcocultura se internaliza en la vida cotidiana de la juventud costarricense, los símbolos de ostentación, las prácticas de consumo y las narrativas mediáticas no operan únicamente como expresiones externas, sino que se incorporan en la estructura de percepción y acción de los adolescentes, configurando aspiraciones y estilos de vida que legitiman al narco como referente de éxito. Este *habitus* narco explica por qué la violencia y la ostentación se normalizan en sectores juveniles urbanos y de clase media, generando un quiebre en el imaginario colectivo costarricense y proyectando inseguridad hacia la región (Valenzuela Arce, 2012; Vázquez Gutiérrez, 2022).

Este gesto, más allá de su dimensión jurídica, se inscribe en una lógica de cooperación bilateral que combina seguridad con legitimidad simbólica, mostrando cómo la narcocultura erosiona la confianza en las instituciones y obliga al Estado a responder con, medidas de alto impacto (Fierro, 2025; Saborío, 2019).

Desde la perspectiva estructural, desde la visión del Sistema-Mundo mencionada en el marco teórico, la inserción de Costa Rica como país de tránsito confirma que la narcocultura no puede analizarse únicamente como fenómeno cultural interno. La subordinación a dinámicas centro-periferia, con Estados Unidos como centro consumidor, evidencia que las economías criminales forman parte de la lógica global de acumulación y que la política exterior costarricense se ve condicionada por estas presiones (Robinson, 2008; Bagley, 2012).

Este escenario revela una tensión entre lo local y lo global: mientras las comunidades normalizan la violencia y el consumo como parte de su cotidianidad, el Estado enfrenta presiones externas que lo obligan a reforzar su credibilidad internacional. Así, la narcocultura se proyecta más allá de la esfera interna para impactar en la imagen internacional del país y en la seguridad regional.

La autora Tania Molina complementa este diagnóstico al señalar que la reforma de extradición de 2025 “es una herramienta, pero también un gesto simbólico hacia Estados

Unidos”, mostrando cómo la cooperación bilateral se convierte en un mecanismo de legitimidad política y diplomática, su aporte refuerza el *hard power* y la subordinación simbólica, evidenciando que la política exterior costarricense se encuentra condicionada por presiones externas (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

La juventud costarricense emerge como el sector más vulnerable frente a la expansión de la narcocultura. Las narrativas culturales vinculadas con el narcotráfico operan como formas de poder simbólico que otorga prestigio y legitimidad a prácticas ilícitas (Bourdieu, 1997; Vázquez Gutiérrez, 2022).

La Dra. Eyling Jáenz enfatiza que la narcocultura no se restringe a la juventud vulnerable, sino que permea también en sectores sociales más amplios, incluyendo jóvenes de clases medias y altas en proceso de construcción de identidad, esto confirma que la narcocultura opera como un fenómeno transversal el cual redefine aspiraciones y estilos de vida más allá de la marginalidad, reforzando la noción de que se trata de un proceso cultural y estructural con capacidad de penetración en distintos estratos sociales (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

La narcocultura no solo se aprovecha de la vulnerabilidad socioeconómica, sino que también se inserta en imaginarios colectivos de éxito y prestigio, esto la convierte en un desafío nacional que trasciende fronteras de clase y obliga al Estado a fortalecer tanto la cooperación bilateral como las políticas internas de prevención y educación.

La Dra. Eyling Jáenz enfatiza que “los recursos internos no alcanzan para enfrentar un fenómeno global y que se mueve con lógicas de franquicia”, reforzando la visión del sistema-mundo (Wallerstein, 2004), su aporte confirma que la vulnerabilidad juvenil no puede analizarse únicamente como fenómeno cultural, sino como parte de una estructura global que obliga a Costa Rica a depender de la cooperación bilateral con Estados Unidos para sostener credibilidad internacional (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

La Fundación Bandera Blanca añade una dimensión comunitaria: la narcocultura se normaliza en los hogares y la deserción escolar facilita el reclutamiento juvenil, su enfoque preventivo –“la idea es que el mismo adolescente pueda decir no a las drogas”- refuerza la

necesidad de políticas sociales que complementen la cooperación bilateral, mostrando que la contención de la narcocultura requiere tanto medidas jurídicas como programas socioeducativos (M. Barrantes, comunicación personal, 15 de julio de 2026).

En ese sentido, los medios de comunicación han sido actores centrales en la reproducción de la narcocultura, la circulación de producciones internacionales legitima la figura del narcotraficante como símbolo de poder y movilidad social (Rincón, 2020; Valenzuela Arce, 2012).

Molina advierte que la narrativa mediática nacional refuerza la percepción de inseguridad y fragilidad institucional, proyectando al país como un Estado vulnerable, este aporte se conecta con la teoría gramsciana de la hegemonía cultural (Gramsci, 1971), mostrando cómo las narrativas mediáticas condicionan tanto la percepción interna como la política exterior costarricense.

La narcocultura también se manifiesta en prácticas de religiosidad popular que legitiman y protegen a quienes participan en el narcotráfico, aunque en Costa Rica no existen cultos institucionalizados como en México, se han identificado rezos y rituales en comunidades costeras vinculados a la protección frente a la violencia (Molina, 2018).

Jáenz señala que estas prácticas refuerzan la legitimidad simbólica del narcotráfico, mostrando que la narcocultura se inserta en el tejido social mediante expresiones religiosas que erosionan la autoridad estatal (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026). Este hallazgo se conecta con la noción de capital simbólico de Bourdieu (1997), confirmando que la legitimidad cultural del narco trasciende lo material y se proyecta en lo espiritual.

En suma, la estética del lujo constituye otro lenguaje cultural de la narcocultura. En Costa Rica, la juventud ha incorporado símbolos de ostentación como motocicletas y ropa de marca como parte de un imaginario aspiracional ligado al narcotráfico (Molina, 2020; Viera Filho, 2024).

María Isabel Barrantes Internacionalista de la Fundación Bandera Blanca confirma que la ostentación funciona como estrategia de reclutamiento juvenil, reforzando la narcocultura como narrativa de movilidad social (M. Barrantes, comunicación personal, 15 de julio de 2026), este aporte conecta con la teoría de Valenzuela Arce (2012) sobre lo

“espectacular”, mostrando que la ostentación no es superficial, sino un mecanismo de legitimación cultural que proyecta inseguridad hacia la región.

El sicariato y el reclutamiento juvenil, aunque más visibles en México y Colombia, también se han manifestado en Costa Rica. La Dra. Eyling Jáenz advierte que la juventud costarricense se ha convertido en un espacio crítico de disputa cultural y diplomática, pues su vulnerabilidad proyecta inseguridad hacia la región y condiciona la cooperación bilateral con Estados Unidos. Este aporte refuerza la visión del sistema-mundo; la juventud es base operativa del narcotráfico y su protección requiere coordinación internacional (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

La identidad pacifista de Costa Rica, construida sobre la abolición del ejército en 1948, se ha convertido en un recurso simbólico que proyecta legitimidad internacional (Muñoz Guillén, 1997; Bravo Fierro, 2016), sin embargo, la penetración de dinámicas narco tensiona esta narrativa.

Molina y Jáenz coinciden en que la cooperación bilateral con Estados Unidos obliga a Costa Rica a equilibrar su tradición pacifista con medidas más duras contra el narcotráfico, este hallazgo confirma que la identidad pacifista no desaparece, pero se ve obligada a coexistir con un contexto de inseguridad que desafía su coherencia histórica y su credibilidad internacional (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026; T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

La política de seguridad costarricense estuvo marcada por la influencia de Estados Unidos, cuya agenda antidrogas condiciona decisiones nacionales (Tokatlian, 2019; Bailey, 202). Jáenz advierte que esta presión externa obliga a Costa Rica a priorizar credibilidad internacional, incluso a costa de tensiones internas sobre soberanía (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

Por fin, la representante de la Fundación Bandera Blanca complementa este análisis al mostrar que la economía ilícita redistribuye recursos en comunidades vulnerables, creando dependencia hacia actores criminales, este hallazgo confirma que la narcocultura no solo es un problema de seguridad, sino también un fenómeno económico el cual erosiona la legitimidad estatal (Portes, 1994; Saborío, 2019).

La cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos durante el periodo 2021-2025 se consolidó como un mecanismo indispensable para sostener la credibilidad internacional del país al avance de la narcocultura, la aprobación de la reforma constitucional de 2025, que habilitó la extradición de nacionales, constituye un hito en la política exterior costarricense, proyectando al país como socio confiable en la lucha contra el crimen organizado (Código Extra, 2025; Ortiz Ruíz, 2020).

Desde una perspectiva estructural, el habitus narco no solo condiciona prácticas culturales internas, sino que también proyecta presiones externas sobre la política exterior costarricense, al redefinir aspiraciones sociales y erosionar la legitimidad institucional, este fenómeno obliga al Estado a responder mediante reformas jurídicas y cooperación bilateral con Estados Unidos. La aprobación de la reforma de extradición en 2025, interpretada como un gesto simbólico de credibilidad internacional, muestra cómo la cooperación no se limita a la interdicción del narcotráfico, ahora bien busca contener un habitus cultural que se expande con lógicas transnacionales y tensiona la tradición pacifista costarricense (Astorga, 2015; Bagley, 2012; T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

Tania Molina interpreta esta reforma como un gesto simbólico hacia Estados Unidos, reforzando la idea de que la cooperación bilateral no solo responde a necesidades operativas, sino también a la construcción de legitimidad diplomática, esto conecta con la teoría del hard power, mostrando cómo la presión externa condiciona la agenda nacional y obliga al Estado a adoptar medidas de alto impacto (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

La influencia estadounidense en la política de seguridad costarricense refleja una lógica estructural de subordinación. La Dra. Eyling Jáenz enfatiza que Costa Rica, al carecer de ejército, depende de la asistencia externa: “los recursos internos no alcanzan para enfrentar un fenómeno que es global y que se mueve con lógicas de franquicia”. Esta afirmación refuerza la visión del sistema-mundo (Wallerstein, 2004), mostrando cómo Costa Rica se inserta en dinámicas centro-periferia como país de tránsito y almacenamiento de drogas.

La presión diplomática estadounidense se manifestó en la firma de convenios operativos y en la presencia de agencias como la DEA y el FBI en territorio costarricense (Viera Filho, 2024). Esta subordinación simbólica confirma que la cooperación bilateral condiciona la política pública costarricense, proyectando al país como un Estado cuya

legitimidad democrática depende de su capacidad de alinearse con Washington (Bailey, 2014).

La cooperación bilateral no solo tuvo efectos internos, sino también regionales. La extradición de nacionales y los convenios de patrullaje conjunto en aguas del Caribe y el Pacífico reforzaron la capacidad de interdicción y proyectaron a Costa Rica como socio estratégico en la seguridad regional (Fierro, 2025).

Molina advierte que los carteles mexicanos controlan el transporte de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, esto convierte a Costa Rica en un punto crítico de tránsito. En este escenario, la cooperación bilateral se convierte en un mecanismo de contención de los efectos transnacionales de la narcocultura, mostrando que la seguridad regional depende de la coordinación entre Estados Unidos y países periféricos como Costa Rica (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026).

La Fundación Bandera Blanca aporta una perspectiva complementaria: la cooperación bilateral no puede limitarse a la interdicción de cargamentos, sino que debe incluir políticas sociales que fortalezcan la resiliencia comunitaria. La fundación advierte que la narcocultura se normaliza en los hogares, así mismo la deserción escolar facilita el reclutamiento juvenil. Su enfoque preventivo confirma que la cooperación bilateral debe articularse con programas socioeducativos para contener la expansión cultural del narcotráfico (M. Barrantes, comunicación personal, 15 de julio de 2026).

Este aporte refuerza la teoría gramsciana de la hegemonía cultural (Gramsci, 1971), mostrando que la lucha contra la narcocultura no se libra únicamente en el plano militar o jurídico, sino también en el terreno simbólico y social.

El estudio confirma que la narcocultura en Costa Rica entre 2021 y 2025 debe analizarse dentro de una línea de tiempo regional que conecta las experiencias de México y Colombia, donde la intervención de Estados Unidos ha sido determinante en la captura de capos y en la configuración de políticas de seguridad (Astorga, 2015; Bagley, 2012; Bailey, 2014).

La entrevista con la Dra. Eyling Jáenz aporta la necesidad de una fuerza armada especializada para enfrentar un fenómeno global que desborda las capacidades nacionales, lo

que reafirma la dependencia de Costa Rica respecto de la cooperación bilateral con Estados Unidos para sostener credibilidad internacional (Tokatlian, 2019; Wallerstein, 2004).

Asimismo, se evidencia que la narcocultura ha alcanzado un nivel de normalización institucional, lo que convierte su contención en un reto que trasciende lo jurídico y lo policial; requiere políticas sociales y educativas las cuales rompan la aceptación cultural del narco y fortalezcan la resiliencia democrática del país (Portes, 1994; Saborío, 2019). De este modo, el cierre del análisis muestra que la respuesta al fenómeno exige tanto coordinación internacional como estrategias internas sostenidas, capaces de equilibrar la tradición pacifista costarricense con la necesidad de enfrentar un desafío transnacional.

5.2 Recomendaciones:

Con base en las conclusiones de la presente investigación sobre la influencia de la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos en la contención de los efectos transnacionales de la narcocultura durante el periodo 2021-2025, se plantean las siguientes recomendaciones, estas propuestas buscan respuestas directamente a la pregunta de investigación y se articulan con los objetivos específicos del estudio: analizar la inserción de Costa Rica en el sistema-mundo y su dependencia de Estados Unidos; identificar el impacto cultural y social de la narcocultura en la juventud costarricense, evaluar las respuestas políticas y jurídicas del Estado; también examinar la proyección internacional del país frente al narcotráfico.

Fortalecer políticas de prevención social y educativa dirigidas a la juventud, con el fin de contrarrestar la normalización de símbolos de ostentación y discursos mediáticos asociados a la narcocultura, esto se fundamenta en que los sectores juveniles urbanos y de clase media-alta son los más vulnerables, a fin de reducir el reclutamiento juvenil y la dependencia económica hacia actores criminales, lo anterior considerando que la deserción escolar y la economía ilícita facilitan la inserción de la narcocultura en los hogares, según lo señalado por la Fundación Blanca (M. Barrantes, comunicación personal, 15 de julio de 2026).

Negociar la cooperación en seguridad con Estados Unidos bajo un enfoque integral que combine interdicción, fortalecimiento institucional y programas socioeducativos, con el propósito de evitar que la relación bilateral se limite a medidas de *Hard power* y extradición,

esto se sustenta en que la reforma constitucional de 2025 fue interpretada como un gesto simbólico de legitimidad diplomática que condiciona la política exterior costarricense (T. Molina, comunicación personal, 14 de julio de 2026; Tokatlian, 2019).

Por otra parte, establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el uso de la asistencia estadounidense en materia de seguridad, a fin de proteger la soberanía nacional y evitar la percepción de subordinación estructural que erosiona la credibilidad interna, lo anterior debido a la dependencia señalada respecto a recursos externos para enfrentar un fenómeno global (Bailey, 2014; E. Jaenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

Diseñar una estrategia de comunicación y política exterior que reafirme la identidad pacifista costarricense, con el objetivo de diferenciar la crisis de seguridad 2021-2025 de la narrativa histórica de democracia sin ejército. Esto considerando que la penetración de la narcocultura tensiona la coherencia histórica del país y su imagen internacional (Muñoz Guillén, 1997; Bravo Fiero, 2016; E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

Promover un debate nacional sobre los límites constitucionales de la cooperación en seguridad, con el fin de equilibrar las exigencias de credibilidad internacional frente a Estados Unidos con la preservación del principio de abolición del ejército 1948.

Capacitar a medios de comunicación nacionales en el tratamiento informativo de la narcocultura, con el propósito de evitar la reproducción de narrativas que legitimen al narcotraficante como símbolo de poder y movilidad social, esto con base en que la hegemonía cultural mediática condiciona tanto la percepción interna como la política exterior costarricense (Gramsci, 1971; Rincón, 2020).

Desarrollar campañas de sensibilización sobre prácticas de religiosidad popular vinculadas al narcotráfico en comunidades costeras, a fin de contrarrestar la legitimación simbólica de actores criminales y fortalecer la autoridad estatal desde lo cultural y espiritual (E. Jáenz, comunicación personal, 16 de julio de 2026).

Realizar estudios comparativos entre Costa Rica, México y Colombia que analicen cómo los países gestionan la presión transnacional de la narcocultura, para identificar buenas prácticas aplicables al contexto costarricense sin ejército (Astorga, 2015; Bagley, 2012).

Investigar el impacto de las plataformas digitales y producciones audiovisuales internacionales en la construcción del habitus narco entre adolescentes costarricenses entre 2021-2025, con el fin de diseñar políticas de alfabetización mediática (Portes, 1994; Saborío, 2019).

Se recomienda además realizar un estudio comparativo entre la Fundación Bandera Blanca y las Obras del Espíritu Santo, con el propósito de identificar las diferencias y coincidencias en sus programas de prevención y acompañamiento dirigidos a niños y adolescentes. La Fundación Bandera Blanca ha enfatizado la permanencia escolar y la resiliencia comunitaria como mecanismos de protección frente al reclutamiento juvenil (M. Barrantes, comunicación personal, 15 de julio de 2026), mientras tanto las Obras del Espíritu Santo dirigidas por el Pbrs; Sergio Valverde, han sido reconocidas por su enfoque espiritual y cultural, que refuerza valores de pertenencia y cohesión social en comunidades vulnerables.

Se propone que los programas institucionales y comunitarios se orienten hacia el abordaje del fenómeno cultural de la narcocultura, más que hacia el narcotráfico como consecuencia, esta perspectiva permite atender las raíces simbólicas y sociales que legitiman al narco; como los imaginarios aspiracionales, las narrativas mediáticas y las prácticas religiosas populares y movilidad social (Gramsci, 1971; Bailey, 2014).

En síntesis, las recomendaciones planteadas buscan trascender la respuesta inmediata al narcotráfico y enfocarse en el fenómeno cultural de la narcocultura, entendido como un entramado simbólico que condiciona imaginarios sociales y juveniles. La propuesta de realizar un estudio comparativo entre la Fundación Bandera Blanca y las Obras del Espíritu Santo del padre Sergio abre una línea de investigación necesaria para comprender cómo los enfoques educativos, comunitarios y espirituales pueden complementarse en la prevención integral dirigida a niños y adolescentes. Tal perspectiva se alinea con la necesidad de atender las raíces culturales y sociales del fenómeno, más que sus consecuencias delictivas, reforzando la resiliencia comunitaria y la legitimidad estatal (Gramsci, 1971; Portes, 1994; Saborío, 2019). De este modo, las recomendaciones finales no solo responden a la pregunta de investigación y a los objetivos específicos, sino que ofrecen un marco práctico y ético para enfrentar un desafío transnacional que tensiona la tradición pacifista costarricense y su credibilidad internacional.

BIBLIOGRAFÍA

Adler, E. (1997). Seizing the middle ground: Constructivism in world politics. *European Journal of International Relations*, 3(3), 319–363. <https://doi.org/10.1177/1354066197003003003>

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2025). *Constitución Política de la República de Costa Rica* (Reforma al artículo 32 sobre extradición). San José: Imprenta Nacional. https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871

Asamblea Nacional Constituyente de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia* (Artículo 35 sobre extradición). Bogotá: Gaceta Constitucional. <http://www.secretariassenado.gov.co/constitucion-politica> ([secretariassenado.gov.co](http://www.secretariassenado.gov.co/constitucion-politica) in Bing)

Astorga, L. (1995). *Mitología del narcotraficante en México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Astorga, L. (2005). *El siglo de las drogas: El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio*. México: Plaza y Janés.

Astorga, L. (2015). *El siglo de las drogas: El narcotráfico, del Porfiriato al presente*. México: Editorial Grijalbo.

Bagley, B. (2012). *Drug trafficking and organized crime in the Americas: Major trends in the twenty-first century*. Woodrow Wilson International Center for Scholars. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/drug_trafficking_organized_crime.pdf ([wilsoncenter.org](https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/drug_trafficking_organized_crime.pdf) in Bing).

Bailey, J. (2014). *La política antidrogas en América Latina: Entre la cooperación y la subordinación*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Bailey, J. (2014b). *La política antidrogas en Centroamérica: Subordinación y autonomía*. Brookings Institution Press. <https://www.brookings.edu/book/la-politica-antidrogas-en-centroamerica/> ([brookings.edu](https://www.brookings.edu/book/la-politica-antidrogas-en-centroamerica/) in Bing)

Becerra, A. (2023). El estudio de la narcocultura mexicana: Trayectoria y enfoques. *Aisthesis*, 73(2), 24–48. <https://doi.org/10.7764/aisth.73.2>

Becerra, M. (2023). *Narcotráfico y política exterior en Centroamérica: Costa Rica como territorio de tránsito*. *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 12(2), 210–230.

Becerra Romero, J. (2018). *Narcocultura y legitimidad democrática en América Latina*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Bravo Fierro, J. (2025). *Democracia y crimen organizado en Centroamérica*. San José: Editorial Jurídica Continental.

Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI Editores.

Chase-Dunn, C., & Grimes, P. (1995). World-systems analysis. *Annual Review of Sociology*, 21(1), 387–417. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.21.080195.002131> ([doi.org in Bing](https://doi.org/10.1146/annurev.so.21.080195.002131))

Chernobrov, D. (2016). Public perception of international crises: Identity, ontological security and self-affirmation. *International Relations*, 30(3), 282–304. <https://doi.org/10.1177/0047117816645643> ([doi.org in Bing](https://doi.org/10.1177/0047117816645643))

Cordero, M. (2019). *Costa Rica y su política exterior: reputación democrática y cooperación internacional*. San José: Editorial UCR.

Cordero Mora, J. F. (2022). *Influencia de Estados Unidos hacia Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico durante el periodo 2002-2018* [Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica]. Repositorio Kérwá. <https://kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/XXXXX> ([kerwa.ucr.ac.cr in Bing](https://kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/XXXXX))

Entman, R. M. (2004). *Projections of power: Framing news, public opinion, and U.S. foreign policy*. Chicago: University of Chicago Press.

Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>

Garzón, J. (2018). *Seguridad regional y cooperación internacional en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

George, A. (1991). *Forceful persuasion: Coercive diplomacy as an alternative to war*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Grady, W. C. (2023). *The socio-political history of cannabis in Costa Rica* [Tesis de maestría, California State Polytechnic University, Humboldt]. Digital Commons. <https://digitalcommons.humboldt.edu/etd/XXXX> (digitalcommons.humboldt.edu in Bing)

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. New York: International Publishers.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London: Sage.

Hernández, R. (2010). *Los corridos del narcotráfico: Cultura popular y violencia en México*. México: Editorial Océano.

Hernández, A. (2022). *Diplomacia de seguridad y legitimidad internacional en Centroamérica*. Madrid: Editorial Trotta.

INL. (2023). *International narcotics control strategy report: Costa Rica*. U.S. Department of State. <https://www.state.gov/reports/2023-international-narcotics-control-strategy-report/costa-rica/> (state.gov in Bing)

Katzenstein, P. J. (1996). *The culture of national security: Norms and identity in world politics*. New York: Columbia University Press.

Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton: Princeton University Press.

Mitzen, J. (2006). Ontological security in world politics: State identity and the security dilemma. *European Journal of International Relations*, 12(3), 341–370. <https://doi.org/10.1177/1354066106067346> (doi.org in Bing)

- Molina, C. (2020). *Juventud y narcotráfico en Costa Rica: vulnerabilidad y legitimidad cultural*. San José: Editorial UNED.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Muñoz Guillén, J. (1997). *La política exterior de Costa Rica: soberanía y diplomacia*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Nora, P. (1989). *Les lieux de mémoire*. París: Gallimard.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. New York: PublicAffairs.
- O'Donnell, G. (1994). Delegative democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55–69. <https://doi.org/10.1353/jod.1994.0010> ([doi.org in Bing](#))
- Ortiz Ruiz, J. (2020). *Autonomía y credibilidad externa: cooperación antidrogas en América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Palacios, M. (2006). *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875–1994*. Bogotá: Editorial Norma.
- Perea Restrepo, J. (2013). *La cultura del sicariato en Medellín: Juventud, violencia y pertenencia*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Pérez García, J. (2022). Costa Rica y la redefinición de su política exterior frente al narcotráfico. *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 19(1), 130–150.
- Pérez García, J. (2022). Narcotráfico y política exterior: Costa Rica en el imaginario internacional. *Revista de Ciencias Sociales*, 178(2), 120–140.
- Pérez García, L. (2022). *Narcotráfico y política exterior costarricense*. San José: Editorial Jurídica Continental.
- Portes, A. (1994). *La economía informal: perspectivas teóricas y políticas*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Portes, A., & Haller, W. (2005). The informal economy. In N. Smelser & R. Swedberg (Eds.), *The handbook of economic sociology* (pp. 403–425). Princeton: Princeton University Press.
- Ramírez, F. (2021). *Narcocultura transnacional y legitimidad estatal*. Bogotá: Editorial Universidad de los Andes.
- Risse, T. (2000). “Let’s argue!”: Communicative action in world politics. *International Organization*, 54(1), 1–39. <https://doi.org/10.1162/002081800551109> ([doi.org in Bing](https://doi.org/10.1162/002081800551109))
- Robinson, W. (2008). *Latin America and global capitalism: A critical globalization perspective*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Saborío, M. (2019). *Narcoviolencia y democracia en Costa Rica*. San José: Editorial UNED.
- Salazar, A. (1990). *No nacimos pa’ semilla: La cultura del sicariato en Medellín*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Salazar, A. (2001). *La parábola de Pablo: Auge y caída de un gran capo del narcotráfico*. Bogotá: Planeta.
- Shirk, D. (2011). *The drug war in Mexico: Confronting a shared threat*. New York: Council on Foreign Relations.
- Shirk, D., & Wallman, J. (2015). *Understanding Mexico’s security dilemma*. San Diego: University of San Diego Press.
- Smith, J. (2022). *Technology and security cooperation in Latin America*. London: Routledge.
- Solís Rivera, O. (2023). Costa Rica y la presión internacional en materia de narcotráfico. *Revista de Política Exterior y Seguridad*, 15(3), 140–160.
- Thoumi, F. (2003). *Illegal drugs, economy, and society in the Andes*. Washington, DC: Johns Hopkins University Press.
- Tickner, A. (2008). Colombia, the United States, and security cooperation: Between autonomy and dependency. *Latin American Politics and Society*, 50(2), 41–70.
- Wallerstein, I. (2004). *World-systems analysis: An introduction*. Duke University Press.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press

